

Volver a empezar, una vez más

La Argentina en los años 90 parecía haber encontrado la fórmula económica para crecer sin inflación y atrayendo grandes magnitudes de financiamiento externo. El llamado de atención de que no todo marchaba bien, que significó la caída por el efecto Tequila y la explosión del desempleo en 1995, no fue escuchado y se mantuvo sin modificaciones el rígido régimen monetario y cambiario del Plan de Convertibilidad de 1991. Los cambios en las condiciones internacionales en los últimos años de la década, por la secuencia de crisis regionales iniciada con la asiática de 1997 y que culminaron con la devaluación brasileña de enero de 1999, sellaron la suerte de la convertibilidad. Desde entonces Argentina no volvió a crecer y el desempleo, la pobreza y la marginalidad conmovieron a la sociedad. La dirigencia social y política no estuvo ni está a la altura de las circunstancias y lo que constituye ya la mayor crisis de los últimos 100 años no parece haber llegado todavía a tocar fondo.

Pablo Bustos

El año 2001 terminó con la Argentina sumergida en una crisis económica, social, política e institucional de una profundidad comparable a la que un cuarto de siglo atrás dio curso al terrorismo de Estado bajo el gobierno militar. En ambas situaciones, la cuestión central a resolver era y es la búsqueda de alternativas a formas de desarrollo agotadas como la *mercadointernista* en los años 70, o fracasada como la apertura económica ensayada en los 90. Tanto

Pablo Bustos: director de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires; profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes; es autor de trabajos sobre economía argentina e integración regional.

Palabras clave: modelos económicos, Plan de Convertibilidad, Argentina.

entonces como ahora, la dirigencia social y política se revela impotente ante tamaña tarea, y como en aquel momento, la crisis actual tiene como componentes esenciales la degradación social de amplios sectores de la población y el rechazo masivo de las capas medias a las prácticas corruptas que dominan el sistema político.

La comparación con la crisis de los años 30 es pertinente por razones similares, particularmente porque nos hace percibir con más claridad que la superación de la actual encierra aún mayores dificultades que aquélla. Durante la depresión de los 30, el sistema económico mundial se desarticuló y el capitalismo agroexportador argentino, que cobijaba un desarrollo industrial de varias décadas, tuvo la opción de expandir su mercado interior para la industria, con la sustitución de importaciones como política principal. La Argentina de hoy es un país semiindustrializado y muy urbanizado, con un marcado deterioro de su tejido industrial por la liberalización comercial acelerada, y con una deficiente inserción en el mundo globalizado. En este trabajo nos proponemos analizar las condiciones de funcionamiento del régimen macroeconómico derivado del Plan de Convertibilidad adoptado por la Argentina en 1991 y las razones de su derrumbe. También procuraremos entrever las perspectivas que parecen surgir de las medidas de política económica que comenzaron a instrumentarse desde el abandono de la convertibilidad.

Evolución y problemas de la economía en la última década

A lo largo de los años 90, la Argentina alcanzó objetivos que le habían sido esquivos desde mediados de los 70: restableció una moneda, estabilizó los precios y creció significativamente. En 1998, último año de ascenso de su economía, el producto interno bruto (PIB) rondaba los 300.000 millones de dólares y, con casi 36 millones de habitantes, presentaba un PIB per cápita de 8.300 dólares anuales, cifra esta última que superaba largamente la de los países medianos y grandes de América Latina y la colocaba en el lote de los primeros 30 países en el cuadro mundial. En términos del Banco Mundial, se trataba de un país ubicado en el estrato superior de los de ingreso mediano alto.

Tres años después, el país se derrumbaba como un castillo de arena. En ese lapso había ingresado en un peligroso remolino depresivo y deflacionario del que no pudo escapar. Algunos datos nos muestran el panorama: al terminar 2001, antes de devaluar, con un PIB de 270.000 millones de dólares, había dejado de generar para esa fecha cerca de 75.000 millones de dólares de producto y la actividad industrial se ubicaba en el mismo nivel de hacía 6 años. El desem-

pleo abarcaba a 20% de la población económicamente activa (PEA), porcentaje que representaba unos 2.800.000 personas, a las que debía sumarse una cifra similar en condiciones de subempleo. El índice de población bajo la línea de pobreza se ubicaba en 40%, unos 15 millones de personas. De ellos, alrededor de 2 millones sobrevivían en condiciones de indigencia. Los saqueos a supermercados en los últimos días de diciembre pasado son una de las manifestaciones de esta catástrofe social. En el primer trimestre de 2002, el abandono de la convertibilidad y la consiguiente devaluación, ha derrumbado el PIB total a una

Los graves problemas políticos y la inoperancia que signaron al gobierno de Fernando de la Rúa influyeron decisivamente para su fracaso económico

cifra que ronda los 100.000 millones de dólares y el PIB per cápita ha caído a poco menos de 2.800 dólares, es decir, al séptimo lugar en América Latina.

Desde 1999 a 2001, el PIB físico argentino acumuló una merma de 8,4%, pero las estimaciones para 2002, bajo un es-

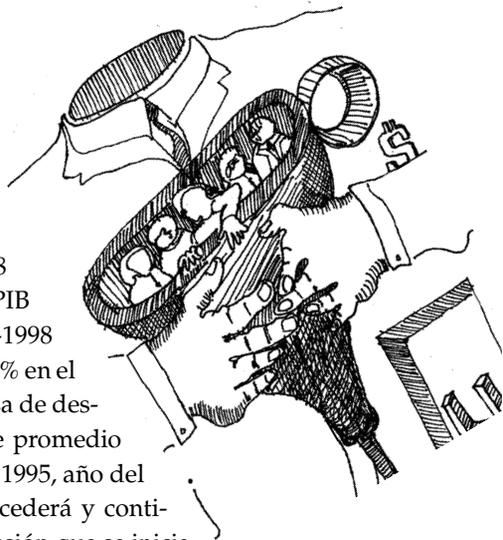
cenario no caótico (esto es, alcanzando algún tipo de acuerdo con el FMI) que evite entrar en una espiral de devaluación-inflación-devaluación como la de los años 80, anticipan una caída por arriba de 10%. Mientras tanto, la alta inflación ha vuelto a acompañar la vida cotidiana de la población y el desempleo alcanza 24%, afectando ya a unas 3.300.000 personas; el porcentaje de población bajo la línea de pobreza ronda 50%.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Es indudable que los graves problemas políticos y la inoperancia que signaron al gobierno de Fernando de la Rúa, desde su inicio en diciembre de 1999, influyeron decisivamente para su fracaso económico, pero también es claro que todas las contradicciones del modelo económico gestado en la década pasada han hecho eclosión en los dos años de gestión delarruista. La economía argentina enfrentó un profundo proceso de reorganización económica a lo largo de la década de los 90, inducido por las nuevas reglas impuestas por el Plan de Convertibilidad¹ y por reformas económicas tales como la apertura externa, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados, la reforma tributaria y la integración regional. Hasta que Argentina sufrió el im-

1. El esquema de convertibilidad se estableció por ley; otra norma, dictada en 1992, reformó la Carta Orgánica del Banco Central. Estos instrumentos fijaron la paridad cambiaria (1 peso = 1 dólar) y obligaron al Banco Central a mantener reservas en proporción no inferior a 80% de la base monetaria (el resto podía constituirse en títulos públicos). Asimismo, se fijaron fuertes límites al crédito del Gobierno y a los redescuentos del Banco Central, que se convirtió en institución independiente.

pacto de la secuela de crisis financieras regionales iniciada en 1997 por la crisis asiática, seguida por el cuasi *default* ruso de agosto de 1998 y la devaluación brasileña de enero de 1999, el PIB creció a una tasa cercana a 6% anual entre 1991-1998 (un fuerte contraste con la caída promedio de 0,3% en el periodo 1982-1990). Pero simultáneamente la tasa de desempleo alcanzaba niveles desconocidos, 13% de promedio anual en 1998, luego de haber rondado 17,5% en 1995, año del efecto Tequila. A partir de aquel nivel no retrocederá y continuará su marcha ascendente al compás de la recesión que se inicia en el tercer trimestre de 1998 hasta alcanzar la marca de 20% a fines de 2001. En otras palabras, durante los primeros 8 años de los 11 que duró la convertibilidad y con la sola excepción de 1995, el tamaño de la economía creció significativamente y lo mismo ocurrió con el ingreso per cápita; pero la tasa de desocupación superior a un dígito adquirió un carácter permanente.



Hasta la crisis bursátil y bancaria provocada por el Tequila, los costos sociales de la reorganización económica se vieron compensados por la eficacia antiinflacionaria del Plan de Convertibilidad. Del régimen de alta inflación, característico desde mediados de los años 70, se pasó en la segunda mitad de los 90 a un nivel próximo a cero. En el mismo sentido compensatorio influyeron los programas de retiro para funcionarios y trabajadores de las empresas de servicios públicos por privatizarse y de organismos estatales en proceso de ajuste, que otorgaron a aquéllos ingresos de varios años que les permitieron emprender negocios de variada suerte pero que mayoritariamente no sobrevivieron a la competencia. Los altos niveles de desocupación y de pobreza existente en la segunda mitad de los 90, no obstante la expansión del producto, se constituyen en un rasgo estructural del nuevo régimen económico y son un factor fundamental para explicar que la distribución del ingreso no haya mejorado y, por el contrario, se haya consolidado y profundizado la inequidad preexistente.

La mayor vulnerabilidad frente a los *shocks* externos es un segundo rasgo que adquiere la economía argentina, derivado de su nueva lógica de funcionamiento. La primera constatación se produjo ante la onda expansiva del Tequila frente a la cual la economía reaccionó con fuerte recesión y aumento del desempleo ante la fuga de capitales y de depósitos bancarios por el riesgo cambiario. También es cierto que lo hizo en sentido inverso en la fuerte recuperación postequila, la que retrajo el desempleo a niveles próximos a los anteriores a la crisis. No obstante, los cálculos más optimistas de entonces ya estimaban que se requie-

rían varios años de altas tasas de crecimiento del producto, en un contexto internacional favorable, para que los índices retrocedieran a niveles de un dígito. Supuestos ambos muy fuertes, como lo pone en evidencia la secuela de crisis financieras regionales iniciada en 1997.

Pero aún con alto crecimiento no se terminan los problemas para la «nueva» economía argentina. Un tercer rasgo que la va a caracterizar es que ahora se trata de una economía mucho más abierta de lo que fue durante muchas décadas: con la vigencia de la Unión Aduanera del Mercosur desde enero de 1995 se consolida el «regionalismo abierto» (una apertura insuficiente desde la perspectiva del Consenso de Washington), como opción de la inserción internacional del país. La mayor competencia para la producción doméstica que significó la apertura comercial tuvo efectos diferenciados. En general, los bienes y servicios no transables respondieron a la expansión de la demanda interna en la primera fase (1991-1994) con aumentos de precios, mientras la oferta de bienes transables aumentó notablemente su componente importado (que presionaron a la baja los precios de los bienes de consumo duraderos, insumos y bienes de capital). La consecuencia fue un balance del comercio de bienes negativo, lo que contribuyó a incrementar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el mismo sentido, convergió el hecho de que se hiciese más rentable producir bienes y servicios no transables que transables por la diferencia en el ajuste de precios. Durante los cuatro años mencionados, los precios mayoristas (básicamente transables) se deterioraron 35% con relación a los precios minoristas (donde predominan bienes no transables), lo cual constituye una aproximación a la pérdida de competitividad. El deterioro inicial que sufrieron los precios mayoristas respecto de los del consumidor no se recuperó a lo largo de la década y la apreciación del peso con relación a las monedas de sus principales socios solo se atenuó respecto del real a partir de 1995 y hasta la devaluación brasileña de enero de 1999. La rigidez de la convertibilidad produjo una distorsión de precios relativos penalizando los bienes exportables y alentando las importaciones. La suma del déficit de cuenta corriente que acompañó a la convertibilidad y del déficit del sector público en casi todos los años, le otorgó un papel relevante al ahorro externo, es decir al ingreso de capitales foráneos, en el funcionamiento de la economía.

La convertibilidad y la inversión extranjera

La Ley de Convertibilidad vigente entre marzo de 1991 y enero de 2002 solo permitía la emisión de pesos contra reservas de divisas del Banco Central. La importante entrada de capitales favoreció el aumento de las reservas, y la emi-

sión monetaria creció *pari passu* posibilitando el crecimiento del crédito bancario y la expansión de la demanda privada. El crédito fue alimentado también por otras vías. El establecimiento de una economía bimonetaria, en la cual se podían realizar depósitos bancarios directamente en dólares y las empresas que podían acceder directamente a los mercados internacionales de capitales no debían pasar por el Banco Central y comprar pesos, posibilitó que la entrada de capitales generase crédito al margen de la autoridad monetaria. Por ambas razones, bajo el nuevo régimen, el crédito disponible en la economía era altamente dependiente de la entrada de capitales del exterior.

Dicha dependencia se hizo evidente en los ciclos económicos que atravesó la economía en los 90. En las dos fases expansivas (1991-1994 y 1996-1997), el ingreso de capitales externos y la baja de la tasa de interés fueron el motor de la reactivación a través de la expansión del crédito y de la demanda privada y, por el contrario, la fase descendente del Tequila y la que aún persiste desde la segunda mitad de 1998, están asociadas a la fuga de capitales, a la retracción del crédito externo y doméstico y a la suba de la tasa de interés. El ajuste se manifiesta en que se reduce el endeudamiento privado y, con ello, el déficit de la cuenta corriente. La mayor vulnerabilidad externa de la economía es evidente: su nivel de actividad económica es altamente dependiente de los movimientos de capitales y la mayor volatilidad de los mismos que caracteriza a la globalización financiera se refleja en la mayor frecuencia e intensidad de sus fluctuaciones económicas. Un factor clave en esta dinámica es la baja tasa de ahorro de la economía argentina que se muestra insuficiente para financiar la inversión, y ese déficit debe ser cubierto recurrentemente con ahorro externo. La volatilidad de los movimientos de capitales se refleja entonces en las fuertes fluctuaciones de la tasa de inversión.

A pesar de los desequilibrios, la rigidez del régimen monetario y cambiario pudo ser mantenida a lo largo de los 90 por los significativos flujos de inversión extranjera que el país logró atraer (Chudnovsky/López): mientras en la década de los 80 recibió 5.860 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED), entre 1990 y 1999 la cifra fue de 67.624 millones, o sea, el promedio anual de los 90 superó largamente el total de los 80. Pese a que los datos son en valores corrientes, y por cambios metodológicos las cifras no son estrictamente comparables, como señalan los autores citados, ilustran clara-

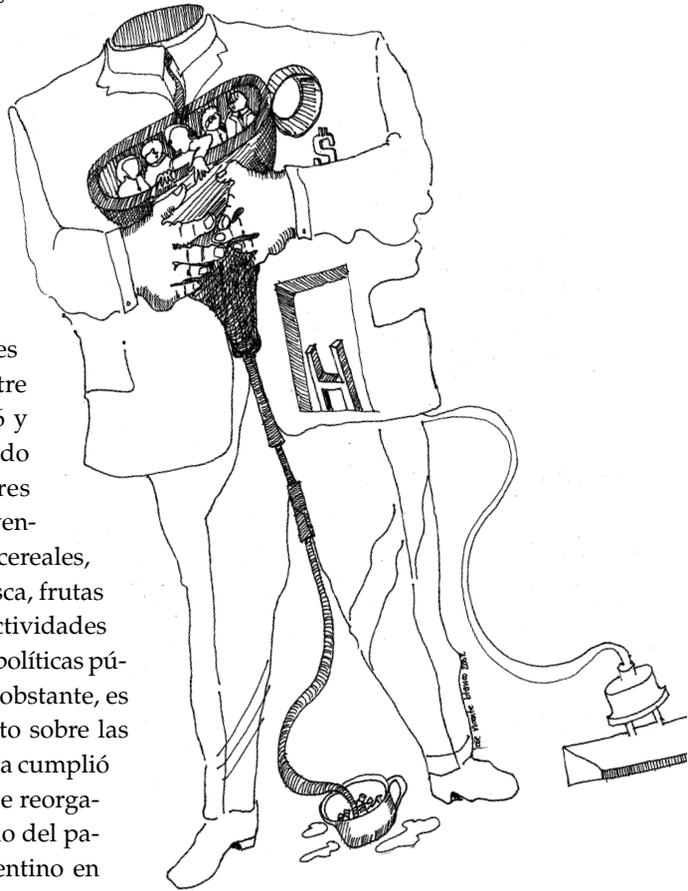
***También es claro
que todas
las contradicciones
del modelo económico
gestado en
la década pasada
han hecho eclosión
en los años
de gestión delarruista***

mente que la Argentina fue una de las economías beneficiadas por el salto de la IED en el mundo, cuyo monto promedio anual pasó de 115.000 millones de dólares a casi 500.000 millones entre 1984-1989 y 1994-1999. Es así como, en el segundo periodo, Argentina ocupó el cuarto lugar detrás de China, Brasil y México dentro del reducido grupo de receptores de IED en gran escala. También el país pudo atraer inversión de cartera, cuyo promedio anual entre 1992 y 1999 fue de casi 7.000 millones de dólares.

Aunque muy lejos del peso demográfico de Brasil y México, con 170 y 100 millones de habitantes respectivamente, la Argentina ha contado en los 90 con un mercado interno altamente dinámico y con un ingreso per cápita que casi duplicaba el de aquellos países. Este factor relevante de atracción de la IED fue potenciado por el programa de reformas de mercado y el simultáneo avance del proceso Mercosur. Es innegable la importancia de los flujos de IED como forma de financiamiento del balance de pagos, pero el impacto de éstos y de la renovada presencia de las empresas transnacionales (ET) sobre la economía no arrojaron los beneficios esperados: a) se verifica una tendencia ascendente en el nivel de remisión de utilidades al exterior; b) las filiales de las ET operan con significativos déficit tanto en el comercio de bienes como en el de servicios, así como también en el intercambio de intangibles, generando fuertes saldos negativos en la balanza de cuenta corriente; c) la IED no ha tenido un impacto positivo sobre el ritmo de formación de capital en la economía argentina porque llegó atraída primero por las privatizaciones de empresas públicas y posteriormente por las oportunidades de adquirir empresas privadas productoras de bienes y servicios de diversas ramas. Las *greenfield investments* han sido menos relevantes y muchas veces asociadas a la existencia de regímenes sectoriales o incentivos específicos; d) las exportaciones de manufacturas, poco significativas en el total de las ventas, se concentran en el Mercosur. A los países desarrollados se envían esencialmente productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales de bajo grado de elaboración; e) las importaciones de manufacturas, sobre todo aquellas de mayor complejidad tecnológica, provienen principalmente de los países desarrollados y en gran medida del país o región de origen de las respectivas casas matrices; f) las exportaciones de las ET están mayoritariamente basadas en recursos naturales, han reforzado la «primarización» y no han contribuido a mejorar el acceso de la producción argentina a terceros mercados más allá del mercado interior ampliado del Mercosur (Chudnovsky/López).

La contribución de la IED para incrementar las exportaciones por la vía indirecta de las inversiones en infraestructura de comunicaciones, energía y trans-

porte, tampoco resulta evidente para los autores citados. Si bien las exportaciones aumentaron fuertemente en los años 90, la participación de las exportaciones en el PIB no creció significativamente. El porcentaje de las exportaciones sobre el PIB pasó de 7,8% entre 1991 y 1995 a 10,4% entre 1996 y 1999. Dicho aumento es explicado esencialmente por las mayores ventas externas de sectores con ventajas comparativas naturales –cereales, oleaginosas, aceites, cueros, pesca, frutas y hortalizas y petróleo–, y de actividades promovidas especialmente por políticas públicas como la automotriz². No obstante, es claro que además de su impacto sobre las cuentas externas, la ola inversora cumplió un papel activo en el proceso de reorganización económica y de cambio del patrón del comercio exterior argentino en los años 90, lo mismo que en la amplia renovación de la cúpula empresarial del país. Las empresas nacionales –concluyen– han perdido protagonismo aunque sigan reuniendo la mayor parte de la producción, el empleo y las exportaciones y algunos grupos locales hayan evolucionado hacia empresas multinacionales o regionales.



La cuenta regresiva

En 1999 todas las debilidades del régimen de convertibilidad convergen para configurar un cuadro de extrema gravedad: la recesión se profundiza de la mano de la deflación, el desempleo comienza una nueva marcha ascendente, merma el ingreso de capitales externos y aumenta la volatilidad de las inversiones de cartera como en la anterior crisis macroeconómica de 1995. El telón de fondo lo

2. El dinamismo de la IED y de la repatriación de capitales domésticos, fugados en la década de los 80, lograron reducir sectorialmente diferencias internacionales de productividad del trabajo y efectivizaron ventajas potenciales de costos de los recursos naturales, pero no de costos laborales por la paridad cambiaria establecida por ley en 1991.

constituye la conversión de las crisis financieras regionales en una crisis internacional generalizada: la secuencia devaluatoria de los principales socios comerciales, la consiguiente fortaleza del dólar y la caída de los precios internacionales. Todo lo cual agrava la debilidad competitiva de la Argentina. En términos de las cuentas externas se evidencia un cambio de tendencia: una fuerte caída de las importaciones aunque también de las exportaciones, la reducción del déficit comercial y de la cuenta corriente pero con un limitado aumento de reservas ante la merma del ingreso de capitales externos. A diferencia de la recesión de 1995, en la cual las exportaciones aumentaron 31%, en la de 1999 registran una caída de 12% y se estancan al nivel de 1998 hasta hoy. El cambio en las condiciones internacionales exigía un tipo de cambio real de equilibrio más alto mientras que la convertibilidad empujaba a un tipo de cambio real más bajo por la distorsión de precios relativos.

En problemas medulares de falta de productividad y de competitividad se encuentra la explicación esencial del colapso de la economía argentina

Con De la Rúa como presidente, 2000 es un punto de inflexión: la recesión no cede, se obtiene un importante superávit de la balanza comercial porque continúa la baja de las importaciones y es notable la caída del déficit de la cuenta corriente, pero se derrumba el ingreso de capitales externos, lo que provoca una leve merma de las reservas internacionales. Solo es un anticipo de lo que trae 2001: recesión más profunda, elevado superávit comercial por la caída de las importaciones y reducción a la mitad del déficit de la cuenta corriente, con una pérdida de casi 40% de las reservas internacionales. La consigna de «déficit fiscal cero» de julio de 2001 lanzada por De la Rúa-Cavallo procuró dar cuenta de que el país se había quedado sin crédito internacional y doméstico, y que los capitales privados se fugaban al exterior. Comenzaba a transitarse el camino al *default* de la deuda pública que declararían en los últimos días de 2001 el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Súa.

Con De la Rúa como presidente, 2000 es un punto de inflexión: la recesión no cede, se obtiene un importante superávit de la balanza comercial porque continúa la baja de las importaciones y es notable la caída del déficit de la cuenta corriente, pero se derrumba el ingreso de capitales externos, lo que provoca una leve merma de las reservas internacionales. Solo es un anticipo de lo que trae 2001: recesión más profunda, elevado superávit comercial por la caída de las importaciones y reducción a la mitad del déficit de la cuenta corriente, con una pérdida de casi 40% de las reservas internacionales. La consigna de «déficit fiscal cero» de julio de 2001 lanzada por De la Rúa-Cavallo procuró dar cuenta de que el país se había quedado sin crédito internacional y doméstico, y que los capitales privados se fugaban al exterior. Comenzaba a transitarse el camino al *default* de la deuda pública que declararían en los últimos días de 2001 el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Súa.

La cuestión fiscal en la convertibilidad

En problemas medulares de falta de productividad y de competitividad se encuentra la explicación esencial del colapso de la economía argentina. Pero, en la lista de factores que minaron la convertibilidad debe ocupar un lugar relevante la brecha fiscal, que requirió ser compensada también con endeudamiento externo. El análisis de las cifras oficiales de déficit fiscal, registra valores que no resultan superiores a los de países comparables; pero hay estudios que mues-

tran que esas cifras oficiales subestiman el verdadero déficit fiscal. Al respecto, si consideramos el incremento de la deuda pública total (una medida objetiva del déficit fiscal acumulado), refleja un incremento de 86.000 millones de dólares entre 1990-2001, es decir equivalente a un déficit fiscal de 3,1 % del PIB como promedio anual, de los cuales 70% se debe a la carga de intereses y 30% restante a déficit fiscal primario (Banco Francés). Este nivel de déficit es ligeramente superior al criterio del Tratado de Maastricht, que exige un tope de déficit fiscal de 3%, pero fue uno de los factores que impidieron la deflación del precio de los bienes y servicios no transables al expandir la demanda e indujeron el atraso cambiario que condenó a la convertibilidad. Uno de los mayores aportes a la permanencia del déficit provino del sistema previsional estatal, como resultado del sistema de capitalización privada vigente desde 1994, porque la pérdida acumulada de ingresos del Estado rondó los 22.000 millones de pesos, alrededor de 8% del PIB actual.

De la Rúa y su primer ministro de Economía, José Luis Machinea, nunca pudieron salir del círculo vicioso conformado por un elevado déficit fiscal que obligó a sucesivos ajustes, retrayendo el consumo, acelerando la recesión, disminuyendo la recaudación y volviendo a elevar el déficit. En este contexto, De la Rúa optó por desprenderse de Machinea y reemplazarlo por Ricardo López Murphy, cuyo plan económico tenía como pilar un nuevo megaajuste y el apoyo irrestricto de la cúpula empresarial. Así como la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez en octubre de 2000, motivada por la falta de voluntad de De la Rúa para investigar supuestos sobornos entregados a senadores para la aprobación de una reforma laboral, fue un hecho trascendente en la erosión de la confianza de la sociedad en el Gobierno, la efímera gestión de López Murphy –apenas 15 días– en marzo de 2001 fue clave para minar la confianza de los insalvables mercados en la gestión gubernamental. El plan de López Murphy para achicar el gasto público nacional (presupuestado en cerca de 40.000 millones de pesos) en 3.000 millones, mereció un amplio rechazo de la dirigencia social y política, luego De la Rúa le quitó su apoyo y decidió su reemplazo por Domingo Cavallo, quien volvió a Economía exactamente 10 años después de haber lanzado el Plan de Convertibilidad, pero ahora para enfrentar su propia herencia. Su regreso generó grandes expectativas en la opinión pública, pero los mercados, sensibilizados por el episodio López Murphy y la percepción de que se encontraban frente a un Cavallo con aspiraciones presidenciales para 2003, no abandonaron su desconfianza.

Las políticas reactivantes ensayadas por Cavallo, como los planes de competitividad sectoriales, que incluían reducciones y devolución de impuestos nacio-

nales y provinciales, no dieron los frutos esperados. Tampoco un ambicioso plan de infraestructura que no llegó a instrumentarse. Las medidas que sí llegaron a aplicarse aumentaron la desconfianza de los inversores externos, los organismos multilaterales y las agencias calificadoras de riesgo, tales como la introducción del euro en una canasta de monedas con el dólar para determinar el tipo de cambio para las operaciones de comercio exterior, o la modificación de la normativa del Banco Central para flexibilizar la política monetaria. Todo ello determinó el cierre de los mercados de crédito externo para la Argentina. Esta situación obligó al Gobierno a girar hacia la ortodoxia más pura; nació así en el mes de julio la regla del déficit fiscal cero. El mago había perdido sus dotes.

Es así como, en los últimos cuatro años, sucesivos gobiernos asistieran impotentes a la suba de los indicadores de riesgo a niveles que suelen poner nerviosos a inversores externos y a agencias calificadoras de riesgo:

Cuadro 1

Argentina. Indicadores de riesgo (%)

Concepto	1998	1999	2000	2001	2002 (estimado)
Cuenta corriente/PBI	(4,9)	(4,3)	(3,1)	(1,6)	2,2
Resultado fiscal operativo/PBI	(1,4)	(2,6)	(2,3)	(3,3)	(2,2)
Deuda pública/PBI	36,5	41,6	43,1	52,4	n.d.
Deuda externa total/PBI	47,1	51,1	51,3	51,8	n.d.
Serv. deuda externa/PBI ³	3,4	3,9	4,3	4,5	7,8
Deuda externa total/exportaciones	532,4	620,9	553,5	523,5	n.d.
Serv. deuda externa/export. ³	38,6	47,7	46,9	45,3	43,1
Cobertura de importaciones ¹	9,5	12,8	12,0	8,6	9,7
Reservas/pasivos financieros ²	101,6	112,8	102,4	84,3	187,6

1. Número de meses de importaciones cubiertos por las reservas líquidas.

2. Calidad de la convertibilidad, fin del periodo. 2001: al 22/11/01.

3. El servicio de la deuda externa incluye los intereses pagados al exterior por el servicio público y el privado.

Fuente: Banco Francés 2002.

El derrumbe de la convertibilidad fue el desenlace natural de la acumulación de factores adversos: falta de gobernabilidad, apreciación del peso, depresión económica, elevado endeudamiento, incertidumbre económica y fuga de capitales. La devaluación del real brasileño en enero de 1999 había sido el golpe de gracia.

Un comienzo que es una vuelta atrás

En las elecciones presidenciales de 1999, De la Rúa derrotó a Eduardo Duhalde. A cuatro meses de la renuncia del primero y casi el mismo tiempo de gestión

presidencial de Duhalde –elegido por la Asamblea Legislativa– aflora con claridad la debilidad de las opciones que se ofrecieron a la ciudadanía en ese momento. El primero no terminó su mandato por inoperante y el segundo aún no ha logrado demostrar los fundamentos de sus aspiraciones. Pero eso no significa que no haya tomado medidas, se tomaron muchas pero ninguna respondió a un plan global. Se trata de una suma de iniciativas más que de un plan coherente en lo monetario, fiscal y cambiario y con alguna visión estratégica en lo productivo y social.

La declaración del *default*, en el interregno semanal de Rodríguez Súa, sin advertencia previa a los acreedores y tenedores de bonos, ha colocado a la Argentina en la situación de ser castigada para que sirva de ejemplo mundial de lo que no debe hacerse. La nueva administración republicana de Estados Unidos tiene una percepción diferente de la que tenía la administración demócrata acerca de las crisis en los países emergentes. Antes se consideraba que se trataba de crisis sistémicas y que, por lo tanto, los organismos multilaterales debían compensarlos con asistencia crediticia. Ahora se adjudica la culpa a gobiernos débiles a incapaces y a malas políticas domésticas. Por lo tanto, la actual receta del FMI es: a) establecimiento de tipo de cambio flotante; b) política fiscal restrictiva; c) política monetaria contractiva; d) escasa asistencia financiera externa³.

Hoy la situación de la Argentina está condicionada por los siguientes elementos: 1) declaración del *default* de 100% de la deuda pública; 2) crisis extrema de solvencia y liquidez del sistema financiero; 3) devaluación y pesificación asimétrica⁴, con la consiguiente ruptura de contratos; 4) inseguridad jurídica

3. Para el caso argentino el FMI tiene, entre otros, los siguientes requisitos para otorgarle ayuda: a) reforma de la ley de quiebras dictada semanas atrás (que favorece a las empresas y perjudica a los bancos); b) limitada intervención del Banco Central en el mercado de cambios; c) inicio de las negociaciones con los acreedores privados y reestructuración de la deuda; d) ajuste en el nivel provincial reduciendo el déficit en 60% y nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos; e) eliminación de las cuasi-monedas (letras de tesorería para cancelación de obligaciones emitidas por el gobierno nacional y las provincias y que circulan como moneda); f) ajuste fiscal a escala nacional incrementando el superávit primario de 1% a 2% del PIB.

4. La devaluación del peso y la pesificación asimétrica han causado profundos cambios patrimoniales, principalmente para los ahorristas y bancos. Los ahorristas vieron sus depósitos reprogramados y pesificados compulsivamente a una paridad de 1,40 por dólar. Las entidades financieras sufrieron desbalances por la pesificación de activos (1x1) y pasivos (1x1,40) a distintos tipos de cambio. También se ha pesificado la deuda pública nacional, provincial y municipal nominada en dólares emitida bajo ley argentina a 1,40 pesos por dólar. La libre flotación del tipo de cambio exigida por el FMI ha llevado la paridad a rondar los 3 pesos por dólar. Los mayores beneficiarios fueron las grandes empresas nacionales altamente endeudadas y particularmente las exportadores cuyas deudas se pesificaron 1 a 1. Casi todas estas asimetrías van a ser equilibradas, como es tradicional, por bonos del Estado.

por discrecionalidad y cambios continuos de la normativa, con afectación del derecho de propiedad de los depositantes en el sistema bancario; 5) destrucción del aparato productivo, con derrumbe del consumo y de la inversión.

El punto de partida es comprender que la crisis actual es una de las más profundas que atraviesa Argentina desde 1930, por la combinación de problemas políticos, sociales, económicos e institucionales: no hay confianza en la dirigencia política y en la administración de justicia; aparte de la señalada insolvencia gubernamental para pagar la deuda pública, el sector privado enfrenta serias dificultades para hacerlo con su propia deuda externa de 50.000 millones de dólares; y por disposición del Banco Central (a pedido de la banca) los depósitos a plazo fijo, donde predominan los nominados en dólares y de 30 días, fueron convertidos a pesos y serán devueltos hasta en tres años de plazo (una verdadera estafa de los bancos a los ahorristas sobre la cual no se expide el FMI). A ello se suma, como señalamos al principio, una recesión de cuatro años consecutivos donde el PIB real acumula una caída de 8,4% contribuyendo a una desocupación de 24%.

Cuadro 2

Argentina. Principales indicadores económicos (1998-2002)

Concepto	1998	1999	2000	2001	2002 (estimado)
PBI nominal (\$ MM)	298,9	283,3	285,0	269,8	312,3
PBI nominal (u\$s MM)	298,9	283,3	285,0	269,8	100,0
PBI real (Variación %)	3,9	(3,4)	(0,8)	(3,9)	(10,5)
IPC (Var. %, fin de año)	0,7	(1,8)	(0,7)	(1,6)	40,0
Depósitos totales (u\$s MM, fin año)	77,0	80,8	84,0	65,3	n.d.
Depósitos totales (Var. %, fin año)	11,3	5,0	4,0	(22,3)	n.d.
Res. fiscal primario (u\$s MM) ¹	2,5	0,9	2,7	1,4	(2,1)
Res. fiscal operativo (u\$s MM) ¹	(4,2)	(7,3)	(6,9)	(8,8)	(7,0)
Res. fiscal global (u\$s MM) ²	(4,1)	(4,8)	(6,8)	(8,8)	(7,0)
Exportaciones (u\$s MM)	26,4	23,3	26,4	26,7	27,7
Importaciones (u\$s MM)	(31,4)	(25,5)	(25,2)	(20,3)	(16,0)
Balance comercial (u\$s MM)	(4,9)	(2,2)	1,2	6,4	11,7
Saldo cuenta corriente (u\$s MM)	(14,6)	(11,9)	(8,9)	(4,4)	3,3
Reservas internac. (u\$s MM) ³	24,9	26,4	25,1	14,6	12,9
Deuda pública total (u\$s MM) ⁴	109,1	117,7	122,9	141,3	n.d.
Deuda externa total (u\$s MM) ⁵	140,7	144,8	146,2	139,8	n.d.
Deuda externa privada (u\$s MM) ⁵	58,3	59,9	61,6	51,9	n.d.
Tasa de desempleo (promedio anual)	12,9	14,0	14,9	17,3	22,0

1. Resultado primario: ingresos totales-gastos corrientes y de cap. Res. operativo: Res. prim.-intereses (meta amplia).

2. Resultado global: resultado primario-intereses+privatizaciones.

3. Reservas líquidas más oro, fin del periodo. 2002: al 20/3/02. **Fuente:** BCRA.

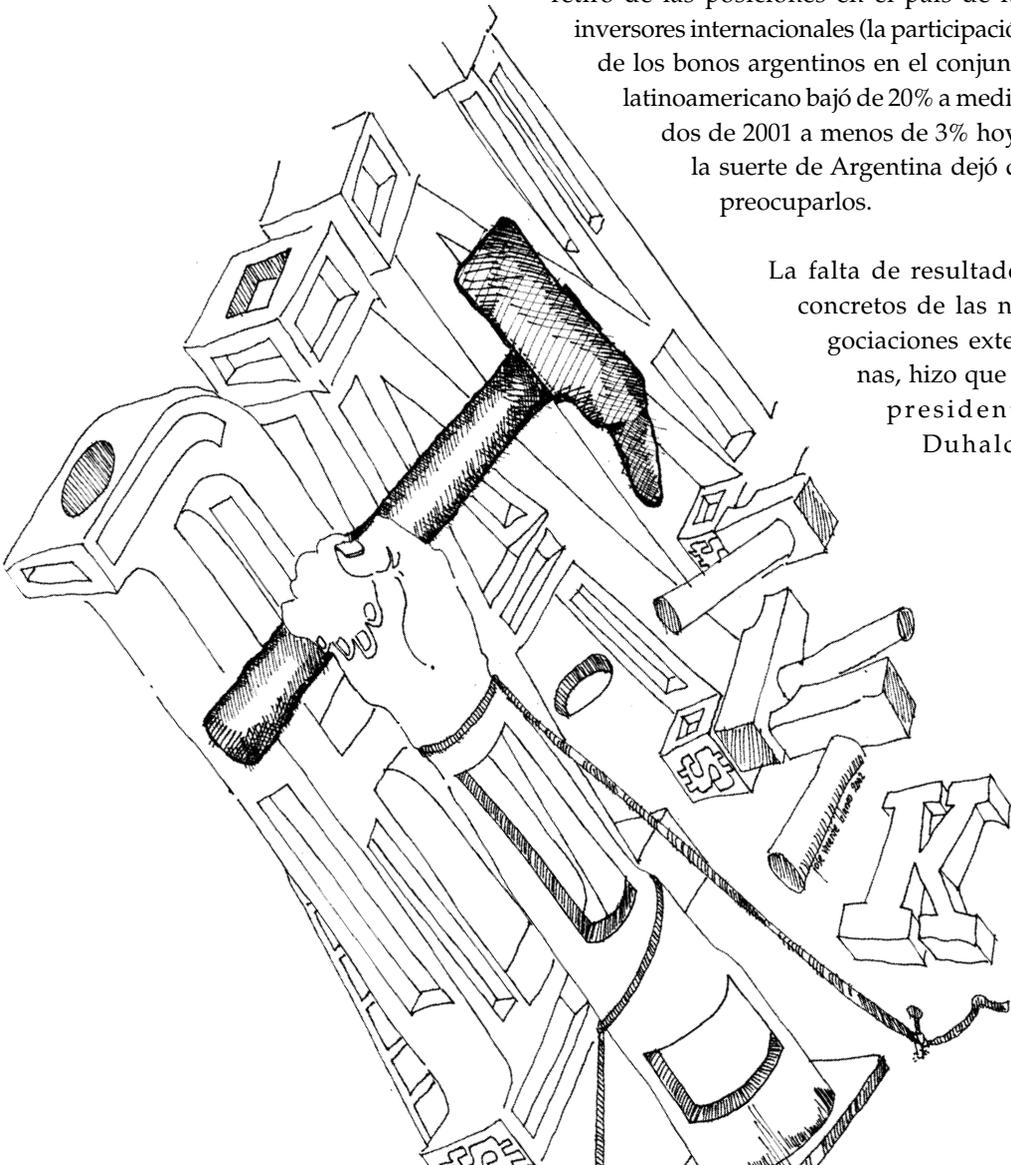
4. Deuda pública total (no incluye Letes) fin del periodo. 2001: al 30/9/01. **Fuente:** Sec. Hacienda.

5. Según estim. balance de pagos, fin del periodo. 2001: al 31/12/01. **Fuente:** Sec. de Política Económica, Meosp.

La estrategia del Gobierno ha sido hasta el momento la de procurar flexibilizar las exigencias del FMI, exponiendo la gravedad de la situación recesiva y de marginalidad social, y buscar el apoyo de algunos de los miembros del Grupo de los 7. El problema es que la mayoría de esos países participaron fuertemente en el proceso local de privatizaciones y hoy están enfrentados con el gobierno nacional por el congelamiento y pesificación de las tarifas de los servicios públicos. Así se explica que se hayan encolumnado con los bancos extranjeros, encabezados por EEUU, para apoyar las condicionalidades del FMI. Esta posición de los principales países industrializados converge con la indiferencia de Wall Street. Superados el temor al contagio a otras economías emergentes y el

retiro de las posiciones en el país de los inversores internacionales (la participación de los bonos argentinos en el conjunto latinoamericano bajó de 20% a mediados de 2001 a menos de 3% hoy), la suerte de Argentina dejó de preocuparlos.

La falta de resultados concretos de las negociaciones externas, hizo que el presidente Duhalde



intentara en la última semana de abril un regreso a sus convicciones más profundas: lanzar un programa económico expansionista y distributivo distanciándose del FMI aunque sin llegar a la ruptura. Ese giro ha detonado la renuncia del equipo económico sin que Duhalde cuente con un equipo o figuras de valía de reemplazo para poder plasmar sus ideas. La oposición de los gobernadores de las principales provincias parece haberlo obligado a volver al cauce. La paradoja es que los «señores feudales» de las provincias, principales trincheras de resistencia junto con el Congreso a los programas de ajuste del origen que sea, muestran mejor percepción que el presidente de turno acerca del mundo donde les toca vivir, ante lo cual prefieren seguir negociando bajo condiciones adversas.

Se configura, en estado puro, una situación que en esencia ha permanecido inmodificable en el último medio siglo: la Argentina y su dirigencia empresarial, sindical y política, ha resistido, tanto en los pocos buenos tiempos como en los muchos malos, instrumentar una política de solvencia fiscal y una política monetaria consistente con ella, y a buscar la mejora de la calidad de vida de los habitantes por la vía de la mayor productividad y competitividad en la producción de los bienes y servicios. Se constata, una vez más, que allí se encuentra la razón básica del fracaso de todos los ensayos de políticas económicas y cambiarias del pasado (cambio fijo, flotación sucia y limpia, convertibilidad, bandas cambiarias, microdevaluaciones, tablita) y de los más recientes como la convertibilidad, la flotación libre y la aún no descartable dolarización. Cuando asumió en los primeros días de enero, Jorge Remes Lenicov, el ministro renunciante dijo una frase iluminada: «Queremos hacer las políticas normales que hacen casi todos los países del mundo y terminar con los ensayos». Eso queda, todavía, como una asignatura pendiente para la Argentina.

Referencias

- Banco Mundial: *Informe sobre el desarrollo mundial*, 1998/1999.
Banco Francés: *Análisis macroeconómico y sectorial* N° 55 año X, Buenos Aires, abril de 2002.
Chudnovsky, Daniel y Andrés López: «La inversión extranjera en la Argentina en los años 1990: tendencias, determinantes a impacto» en *Boletín Informativo Techint* N° 308, Buenos Aires, octubre-diciembre de 2001.
Heymann, Daniel: «Políticas de reforma y comportamiento macroeconómico» en D. Heymann y B. Kosacoff (eds.): *Desempeño económico en un contexto de reformas*, Eudeba/Cepal, Buenos Aires, 2000.

El monstruo bicéfalo de la renta financiera

El artículo analiza los mecanismos utilizados para implantar, desde mediados de los años 70, la actual estructura económica y social en la Argentina. El modelo rentístico convirtió al sector financiero, cada vez más transnacionalizado, en dominante económico y político, con un poder en crecimiento, ya sea bajo gobiernos militares o civiles. El resultado ha sido una economía nacional prendada, un Estado sin instrumentos de política económica y con administraciones cautivas sin aspiración a alcanzarlos, y una sociedad arruinada. Mientras tanto, es de esperar que las nuevas energías políticas y sociales puedan dejar atrás el actual sistema rentístico. En definitiva, el fin de un régimen y el comienzo de otro siempre ha estado determinado en la Argentina por la apropiación de la renta.

**Alfredo Eric Calcagno /
Eric Calcagno**

En 1976 comenzó la Argentina financiera, que hoy agoniza. Después de la hegemonía agraria (1890-1945) y de la industrial (1946-1975), se implantó el modelo rentístico financiero, que predomina hasta ahora¹. Es un monstruo bicéfalo, con una cabeza internacional y otra nacional: por una parte actuaron los bancos transnacionales y los organismos financieros multilaterales, y por la

Alfredo Eric Calcagno: economista argentino; ha sido secretario general del Consejo Federal de Inversiones de la Argentina y funcionario de la Cepal y la Unctad; consultor del Sistema Económico Latinoamericano (SELA); ha publicado 17 libros. Los últimos son *La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla)*; *Para entender la política. Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo* (ambos en colaboración con Eric Calcagno); *El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes* (en colaboración con Alfredo F. Calcagno); y *La perversa deuda*.

Eric Calcagno: economista argentino, graduado en la Ecole Nationale d'Administration de Francia (ENA); autor, en colaboración con Alfredo Eric Calcagno de varios títulos sobre economía argentina.

Palabras clave: modelos económicos, sistema financiero, esquema rentístico, Argentina.

otra el *establishment* financiero local, que en su mayor parte está constituido por los bancos transnacionales. Además, se mezclaron como coautores y beneficiarios, las empresas transnacionales y nacionales grandes. Una de las consecuencias es que los programas económicos argentinos son los que establecen los acuerdos *stand by* con el Fondo Monetario Internacional.

***Así es como
 el principal obstáculo
 para el desarrollo
 argentino reside
 en el sistema de renta
 impuesto desde 1976***

Prontuario del modelo rentístico financiero

A mediados de los años 70, el neoliberalismo se implantó como el sistema hegemónico en casi toda América Latina. En el caso de la Argentina lo hizo en 1976 por medio de una feroz represión y decenas de miles de desaparecidos. Este proceso fue liderado por un grupo de dirigentes nacionales y extranjeros que se apoderó del Estado, lo manejó a su antojo y transfirió a su favor ingresos y riquezas a escala gigantesca. Sin embargo, no se manifestó con igual intensidad en todos los países. En Chile, Brasil y México, por ejemplo, se adoptaron medidas correctivas; en cambio, en la Argentina se llevó el modelo neoliberal hasta sus últimas consecuencias

Así es como el principal obstáculo para el desarrollo argentino reside en el sistema de renta impuesto desde 1976. Este sistema tiene una expresión política cuyo objetivo es la intangibilidad de su estilo de acumulación económica, centrado en el sector financiero. En este contexto, las formas democráticas son conservadas, siempre y cuando los partidos victoriosos en las elecciones acepten el gerenciamiento económico necesario para asegurar, reproducir y aumentar la renta financiera, sin importar cuáles sean las ideas y tradiciones históricas de esos partidos ni sus promesas electorales. Los métodos de presión son variados: desde el condicionamiento realizado a través del financiamiento de las campañas electorales hasta golpes de mercado, pasando por los sobornos. Es importante comprender que la mayor o menor violencia aparece según el grado de contestación de su hegemonía; tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones sobre las pulsiones democráticas del sector financiero: necesitó de un gobierno militar para implantarse y no le asusta la mano dura.

1. El resultado económico de esos periodos, medido por el producto por habitante es definitorio: en el periodo agrario (1890-1945) fue de 1,29% anual; en el industrial (1946-1975), de 2,10%; y en el rentístico financiero (1976-2001), de 0,24%. V, para el periodo 1890-1992, Angus Maddison: *L'économie mondiale 1820-1992*, OECD, París, 1995; para el periodo 1993-2001, Cepal: *Anuario Estadístico*, varios números, Santiago.

En lo económico, el modelo rentístico financiero no se agotó en aprovechar el excedente generado por los restos industriales, sino que se apropió de las rentas de los servicios públicos privatizados y de los recursos naturales, permitió el desarrollo de un sistema bancario usurario y derivó recursos enormes al pago de la deuda externa. Los beneficiarios y los gerentes del sistema de renta siempre han actuado en estrecha articulación con la economía de los países centrales, en donde cierran su ciclo de acumulación. Esta connivencia se logra por las relaciones directas con los gobiernos y fuerzas económicas de los países dominantes o a través de los organismos financieros internacionales. Los rentistas locales utilizan sus vínculos con los poderes externos para ampliar y consolidar sus ganancias. En el plano de las políticas económicas, las condicionalidades impuestas por el FMI, además de reflejar la ideología y los intereses financieros internacionales, son un catálogo de las medidas que los rentistas locales quieren aplicar; como en el ámbito local no tienen legitimidad para imponerlas, utilizan la autoridad del FMI.

Este régimen se basó en el endeudamiento financiero sin límites como proyecto económico y en la mansedumbre social como requisito político

Este régimen se basó en el endeudamiento financiero sin límites como proyecto económico y en la mansedumbre social como requisito político. Para ello, estructuró una clase política a su imagen y semejanza a través de la corrupción generalizada. El resultado está a la vista: destrucción del Estado nacional, desarticulación del sistema productivo, marginación de un tercio de la población.

Quiénes se quedan con la renta

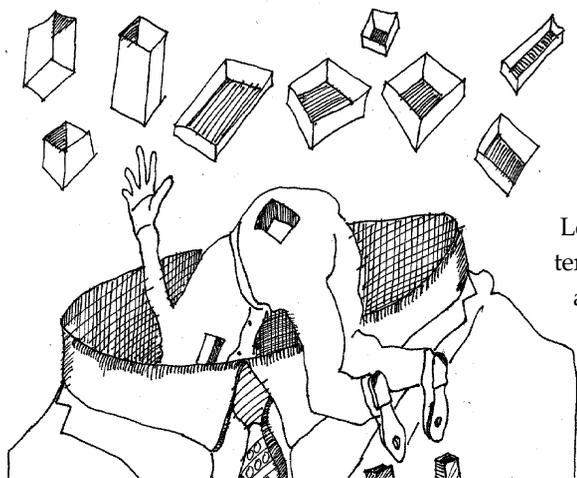
El grupo rentístico que se apoderó del poder político y económico está integrado por quienes se apropiaron de los servicios públicos privatizados, de la renta de los recursos naturales (en especial el petróleo) y de la propiedad del sistema bancario y financiero; este conglomerado expoliador se completa con los acreedores externos. Las privatizaciones constituyeron una monumental transferencia de poder económico y de ingresos del Estado hacia el nuevo grupo económico dominante. Esos sectores avanzaron hacia el poder político por la doble vía del debilitamiento estatal y de su propio fortalecimiento. La compra de empresas públicas se realizó a precios de remate y las utilidades generadas fueron enormes. A través de algunas cifras veremos la magnitud de la transferencia de riquezas. Las 200 mayores empresas del país entre 1993 y 1999 tuvieron utilida-

des contables de 26.000 millones de dólares. Más de la mitad fue captada por las 26 empresas que prestan servicios públicos privatizados; a su vez, 140 grandes empresas no ligadas a las privatizaciones solo recibieron 21,5%. Las tasas de rentabilidad sobre ventas fueron de 10,8% para las empresas privatizadas, de 6,5% para las vinculadas a las privatizaciones y de 1,5% para las demás empresas². Periódicamente las grandes empresas utilizan el recurso de licuar sus deudas y que el Estado se haga cargo de estas. Son muy neoliberales cuando hay que cobrar, pero en el momento de las pérdidas las socializan. Lo hicieron en 1982 durante la dictadura militar, por los sucesivos seguros de cambio establecidos por los presidentes del Banco Central Egidio Ianella, Domingo Cavallo y Julio González del Solar.

Ahora se ha establecido la conversión a pesos de las deudas con el sistema financiero argentino, sin especificar diferencias entre los pequeños y los grandes deudores, haciéndose cargo el Estado de los costos. Se aprovecha la devaluación para licuar la deuda privada con los bancos. Con la excusa de compensar los costos, se confunden situaciones muy diferentes. Una es la de los pequeños ahorristas o deudores que operan en pesos y no tienen dólares; y otra la de quienes operan normalmente en dólares y tienen sus cuentas en divisas en el exterior. La línea divisoria pasa por los montos y las actividades. Las empresas que deben más de un millón de dólares; los exportadores y quienes invierten en el extranjero tienen los dólares con los cuales pagar sus deudas al sistema financiero argentino. Al permitirles pagar sus deudas con pesos al tipo de cambio 1 peso = 1 dólar, se les está perdonando dos tercios de la deuda (con la cotización actual de 3 pesos = 1 dólar); si a esto se le suma la inflación, al final pagarán 15% o 20% de su deuda. Subvencionar a estas grandes empresas es un despropósito económico y una inmoralidad política. En los hechos, significa introducir una distorsión mayor en la economía argentina, donde se privilegia el salvataje de bancos y grandes grupos empresarios en vez del aumento de la demanda interna a través de la redistribución del ingreso.

El segundo eje es el de las empresas explotadoras de recursos naturales. El caso más relevante es el del petróleo, cuya empresa estatal –la mayor corporación de la Argentina– fue privatizada. El costo de producción del barril de petróleo oscila entre 8 y 11 dólares, sin embargo Repsol (empresa española que compró a la estatal YPF) lo vende en el mercado interno argentino al precio internacional, que en 2001 varió entre 20 y 27 dólares. Se apropió así íntegramente de la

2. V. Daniel Aspiazú: «Privilegios empresarios» en *Le Monde Diplomatique*, Ed. Cono Sur, Buenos Aires, 10/2001.



renta de ese recurso natural. Las utilidades declaradas por Repsol por sus operaciones en Argentina durante 2000 fueron de 2.833 millones de dólares.

Los bancos fueron otra base del sistema. Primero lucraron mediante sus actividades normales con *spreeds* y comisiones exorbitantes. Los plazos fijos a 30 días rendían 9,01% en promedio y el crédito se otorgaba a 17,5% (con estabilidad de precios)³. Se mejante margen es de los más

altos del mundo. Además instrumentaron el negocio de las jubilaciones privadas, con el que asignaron a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (de las que son dueños), los aportes previsionales, que representan 11% de todos los salarios y que ascienden a 4.500 millones de dólares anuales; estas administradoras captan la totalidad de esos fondos y cobran 30% por administrarlos, mientras el Estado paga las jubilaciones; la mayor parte de esos fondos se los prestan al Gobierno a altas tasas de interés.

El ajuste estructural del FMI

El FMI ejerce una influencia decisiva en el funcionamiento de la economía argentina. Ello, en violación de sus funciones originarias, que consisten en promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos, infundir confianza a los países miembros y aminorar el desequilibrio de las balanzas de pagos (art. 1 del Convenio Constitutivo). Como se observa, ninguna de las atribuciones originales autoriza al FMI a intervenir en la política económica interna de los países miembros.

Sin embargo la acción del FMI se apartó de esos fines y siguió otra estrategia: sobre la base de una relación de fuerzas –la del acreedor frente al deudor insolvente–, la «comunidad financiera internacional» dicta a los países cómo extraer

3. Carlos Scavo: «Una globalización predatoria» en *Le Monde Diplomatique*, Ed. Cono Sur, Buenos Aires, 10/2001.

excedentes fiscales y externos para «honrar sus obligaciones» (ajuste coyuntural), pero además decide cómo deben estructurar sus economías y sus sociedades, y eso no tiene nada que ver con la deuda original ni con circunstanciales dificultades de pagos externos: se aprovecha una crisis de la balanza de pagos para imponer el «ajuste estructural» (achicar el Estado, privatizar, restringir el gasto público y el crédito, abrir la economía a las mercaderías y capitales externos, flexibilizar el mercado laboral), que a su vez deriva cuantiosos recursos hacia el sector financiero internacional y local. Esta es la receta inmovible del FMI, que se aplica en todas las circunstancias bajo todas las latitudes, incluso en los casos de recesión o depresión económica, lo cual equivale a hacer ayunar a un anémico. En el caso particular de Argentina tales principios llevaron a elaborar una política que se concretó en el esquema de convertibilidad, que entre otras características, significó políticas específicas de deuda externa, privatizaciones, apertura comercial y financiera externa, sobrevaluación del peso, ajuste fiscal, ausencia de una economía de la demanda y defensa del sector financiero. Veamos cada uno de estos temas.

La deuda externa. La deuda externa es una constante en la historia argentina desde el primer empréstito con Baring Brothers en 1824. Cumple con múltiples funciones: es una fuente inagotable de transferencias de ingresos hacia los acreedores; gravita con fuerza en el presupuesto nacional (25% de los gastos son para el pago de intereses); determina la política económica a través de las condicionalidades que impone el FMI, el que a su vez transmite los requerimientos del *establishment* local. Pero no solo eso. Además es una garantía para la continuidad de la política económica que conviene a los acreedores. Esto se logra con facilidad. Primero se infla la deuda a montos tales que no se pueden pagar. Entonces es necesario seguir recibiendo préstamos para cancelar los intereses. Esos préstamos se otorgan si se cumple con la política que quieren los acreedores. Los detalles de esta política se inscriben en los acuerdos *stand-by* con el FMI, que no desembolsa si no se cumplen. Luego, hay que cumplir. Así de simple. De tal modo, el FMI utiliza a la deuda externa como el principal eje de su influencia sobre los países. Ello no tanto por lo que presta directamente, sino porque su «luz verde» es requisito indispensable para el acceso de otros préstamos o inversiones externas.

Durante el decenio de 1990, la política económica argentina giró en torno del pago de la deuda externa. El gobierno de De la Rúa-Cavallo llegó al colmo de obligarse a pagar la deuda externa antes que cualquier otro gasto. La deuda externa argentina es un ejemplo mundial de expoliación. Se la contrajo para financiar la evasión de capitales y si se hubieran aplicado tasas de interés nor-

males se hubiera terminado de pagar en 1989. Después, en el decenio de 1990, fue el combustible que hizo funcionar la convertibilidad. En ninguno de los dos casos sirvió para impulsar la actividad productiva y capitalizar el país. Un hecho notable es que en la actualidad, la mayor parte de los bonos de la deuda externa argentina está en poder de residentes en el país. La actividad de ese conglomerado se completó con la acción del FMI, que impuso programas de ajuste en épocas de recesión y que fue el instrumento de los reclamos de los grupos rentístico financieros.

Desde 1975, el aumento del monto de la deuda es impresionante: 7.875 millones de dólares en 1975, 45.087 millones en 1983, 58.588 millones en 1991 y 142.300 millones en 2001⁴. Dentro de esta expansión general hubo dos tipos de deuda externa. El primero, el de la «deuda vieja», fue el del gobierno militar (1976-1983), que tuvo por objetivo financiar la evasión de capitales y hacer negocios financieros. El segundo comienza en 1991 con el sistema de convertibilidad. Entonces, el endeudamiento es la consecuencia de la obligación que impone la convertibilidad para pagar todo déficit con ventas de activos o endeudamiento, y también del hecho de que la convertibilidad fue incapaz de suprimir tales desequilibrios; al contrario, fueron en aumento. El funcionamiento de la convertibilidad dependía de la entrada continua de capitales en montos brutos superiores a los 20.000 millones de dólares por año, para cubrir el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos y las amortizaciones de la deuda. Cuando los capitales son insuficientes, se ajusta por recesión. Tal es el efecto directo de los cortes presupuestarios; así como en el sector externo, de la necesidad de reducir las importaciones. En ambos casos, disminuye el producto, la desocupación aumenta, la recesión se profundiza y se reduce la recaudación fiscal.

Los pagos efectuados por la deuda externa son significativos: en 2001 salieron 11.921 millones de dólares por intereses. Las amortizaciones que se vencieron en 2001 son de 13.108 millones de dólares⁵. El efecto presupuestario de los pagos de intereses también es importante: en 2001 ascendieron a 24% del total de gastos de la administración nacional, y si se excluyen los destinados a seguridad social se llega a 35%. Para que se advierta la magnitud de esta cifra basta recordar que duplicaron la totalidad del gasto en personal del conjunto de la administración pública nacional⁶. Las consecuencias políticas se manifiestan en las condicionalidades incluidas en los acuerdos *stand-by* con el FMI, de donde surgen dos secuelas principales. En primer lugar determinan la orientación

4. Cifras del Ministerio de Economía de la Argentina.

5. V. Ministerio de Economía: *Proyecto de presupuesto para 2002*.

6. *Ibíd.*

***Como consecuencia
de la desaparición
de las empresas
públicas
se produjo un cambio
en la estructura
de poder interno***

general de la política económica; en segundo término, inciden sobre la estructura del poder. Hace tiempo que las misiones del FMI ya no tienen más como eje el examen de las posibilidades del repago de los préstamos externos. Imponen medidas de política, tales como la estructura del presupuesto nacional, la privatización de empresas y bancos, la flexibilización labo-

ral. De todos modos, no se trata de requerimientos normales de un acreedor para asegurarse que el deudor podrá pagar. Son cuestiones que hacen a la autonomía nacional, que quedan en manos de funcionarios del Fondo y que nada tienen que ver con repagos de deudas.

En esta etapa, la deuda externa tuvo la función política fundamental de permitir la continuidad del modelo económico y de apuntalar la hegemonía de determinados grupos.

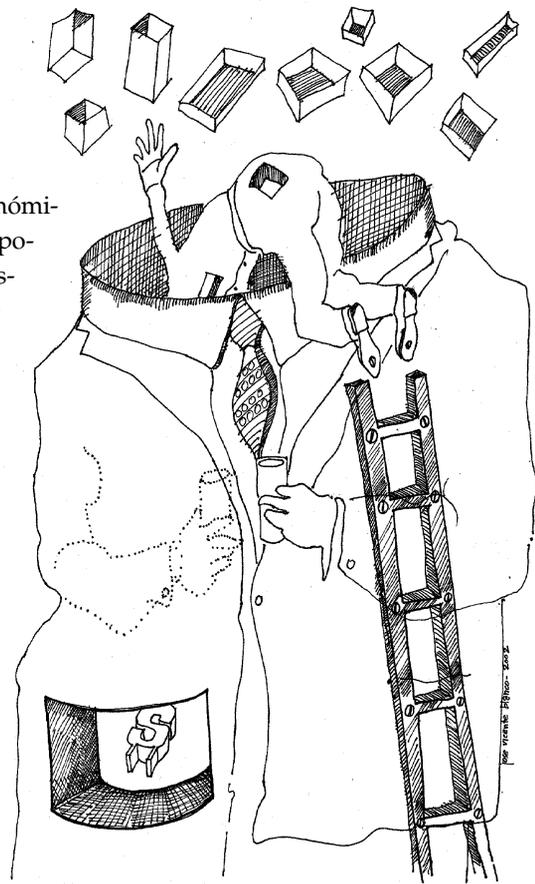
Las privatizaciones. Una de las principales recetas del FMI y del *establishment* nacional e internacional consistió en la privatización de las empresas públicas. Aquí también hubo plena coincidencia con los neoliberales nativos y en la Argentina se cometió el mayor proceso privatizador de América Latina. Entre 1990 y 1999 los ingresos por privatizaciones fueron de 29.985 millones de dólares⁷. Al referirnos a quiénes se quedan con la renta, hemos citado la enorme diferencia de rentabilidad entre las empresas privatizadas y el resto. Este proceso de privatizaciones se realizó en medio de fuertes sospechas de corrupción. Por ejemplo, en las cuentas presentadas con motivo de la privatización de Aerolíneas Argentinas figuraban 77,8 millones de dólares como «gastos asociados con la compra», que no se especificaban. Conociendo los «usos y costumbres» de la época es fácil presumir su origen y destino. Por otra parte, las empresas se vendieron a precios bajos. Más aún: en varios casos se tomaron como pago bonos de la deuda externa argentina, que se compraban entre 15% y 20% de su valor y se computaban a valor nominal. En esta operación se complementan la deuda externa y las privatizaciones.

Como consecuencia de la desaparición de las empresas públicas (que antes de las privatizaciones generaban más de 10% del producto interno bruto) se produjo un cambio en la estructura de poder interno. Los compradores de empresas

7. V. Banco Mundial: *Global Development Finance, 2001*, apéndice 4, Washington, 2001; y Sistema Económico Latinoamericano (SELA): *Inversiones extranjeras directas en América Latina y el Caribe*, Caracas, 2001.

privatizadas integran la elite del poder económico y pueden influir fuertemente en el poder político. Piénsese, por ejemplo, en el valor estratégico y en la magnitud de las recaudaciones de los principales servicios públicos (p. ej. las telecomunicaciones), o en la importancia de algunos bancos, la siderurgia, la energía, los ferrocarriles y el petróleo. Sus dueños y gerentes, en el plano macroeconómico van a manejar sectores clave de la economía; y en lo microeconómico, las suyas serán la mayores cajas del país. Dado el sistema de financiamiento de los partidos políticos, los enormes costos de «hacer política», la ausencia de operaciones del tipo de «mani puliti» y la posibilidad de provocar «golpes de mercado», puede suponerse que su influencia en el poder político será cada vez mayor. Asimismo, las privatizaciones han sido en muchos casos la vía de entrada de empresas extranjeras, públicas y privadas⁸. Al mismo tiempo, con las privatizaciones se modifica el rol del Estado; en teoría deja de ser productor y se convierte en regulador. Se plantean dos problemas importantes. El primero consiste en determinar en qué medida esta pérdida de funciones es compatible con sus tareas esenciales de proveer bienes públicos, definir y administrar los desequilibrios, promover o realizar la acumulación de capital, armonizar los intereses particulares y fijar la estrategia de mediano y largo plazo. La segunda cuestión se relaciona con la posibilidad de funcionamiento de un régimen democrático –y eventualmente del avance de la democracia representativa a la participativa– cuando el sistema político real se desliza hacia la plutocracia⁹.

Esta operación económica y política se realizó en conjunto por el *establishment* económico local y el FMI, que a través de los acuerdos *stand by* exigió que se ejecutara un proceso de privatizaciones.



8. V. Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno: *El universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes*, Alianza, Buenos Aires, 1995, p. 341.

9. *Ibíd.*, pp. 341 y 342.

La apertura externa. Otra exigencia del FMI y del *establishment* es la apertura externa, es decir, la libre circulación de bienes, servicios y capitales, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones. Esta política es otra muestra de la conjunción entre el FMI y el sector financiero que actúa en el país (que en su mayor parte es extranjero). De este modo se otorga al sector financiero la hegemonía en la economía argentina, en perjuicio del sector industrial. Existió una doble maniobra. Por un lado, se mantuvo la estabilidad de los precios internos mediante importaciones que resultaban baratas por el tipo de cambio, y por el otro se liberaron totalmente las importaciones. Así, el sector industrial, que tenía dificultades para competir «mano a mano», no resistió la subvención a las importaciones producto de una sobrevaluación del peso en 40% o 50%. La consecuencia fue que si en 1976 el sector industrial generaba 32% del PBI, en 1998 ese porcentaje se redujo a 17%. El cierre de industrias provocó una desocupación creciente, que llevó el índice de desempleo urbano abierto de 3,7% en 1975 y 2,6% en 1980, a 7,4% en 1990, a 17,5% en 1995 y a 22% en 2002¹⁰.

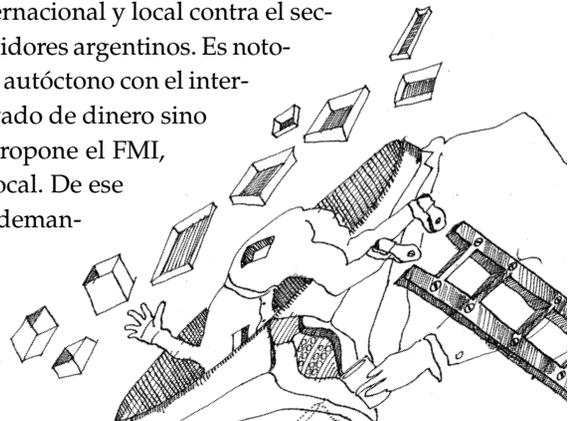
El ajuste fiscal. Una coincidencia ideológica mayor entre el FMI y el *establishment* local argentino es la creencia de que el equilibrio presupuestario es el elemento fundamental del correcto funcionamiento económico; y lo tratan de obtener –sin éxito– sobre todo mediante la restricción del gasto público no financiero. Aplican este dogma en cualquier época, sea de recesión o de expansión. Esto significa un estricto criterio de caja: el Gobierno paga solo lo que se recauda. De tal modo, ante la caída de la recaudación y el aumento de la carga de intereses, se rebajaron en 13% los sueldos de la administración nacional y las jubilaciones mayores de 500 pesos. Este método aprobado por el gobierno De la Rúa-Cavallo no sirve para pagar la deuda en dólares –como era su propósito– y aumenta la recesión. En efecto: supongamos que gracias a la restricción en los gastos estuvieran los pesos para comprar los dólares y pagar los servicios de la deuda; el problema es que no se tienen los dólares, porque las exportaciones no alcanzan, el patrimonio nacional está vendido, los créditos externos cerrados y el Banco Central no puede fabricar dólares. De esa manera, aun si se consiguiera el déficit cero tampoco se puede pagar la deuda (además, en los hechos el déficit aumentó). En los últimos años, los dólares faltantes ingresaron como endeudamiento externo del sector público. Por otra parte, la propia estrategia para eliminar el déficit es equivocada: si se trata de reducir el déficit recortando salarios y jubilaciones, el efecto es recesivo, lo cual a su vez disminuye la recaudación y agrava el déficit.

10. **Fuente:** Para 1975, 1980, 1990 y 1995, Cepal: *Anuario Estadístico*, varios números; para 2002, declaraciones del ministro de Economía.

Ausencia de una economía de la demanda. Otro grueso error conceptual, en el que incurrieron el FMI y el Gobierno, consiste en la insistencia en la economía de la oferta con ignorancia de la economía de la demanda. De acuerdo con ella, si se capacita a alguien, esa persona conseguirá trabajo, y si se rebajan los impuestos y las tasas de interés, habrá inversiones. Pareciera que no existe la economía de la demanda: si nadie compra porque no tiene dinero, ¿quién va a invertir? Se olvidó que para salir de la recesión hay que aumentar el ingreso y el consumo de los sectores desfavorecidos, mediante una redistribución de ingresos que introduzca más justicia social y genere mayor eficiencia económica (estos grupos necesitan satisfacer sus necesidades básicas y no van a comprar dólares), pero esto no le conviene a los intereses de corto plazo del sector financiero, que se maneja en el mundo de la renta y no en el de los beneficios y salarios.

La situación actual

Hemos examinado algunas de las típicas líneas de acción del FMI que sirven a la vez a los intereses del sector financiero argentino. Veamos cómo se quiere aplicar el programa del FMI en la Argentina de hoy. La tremenda recesión que sufrimos desde 1998 es conocida por todos; para calibrarla basta con dos datos: en el periodo 1999-2001 el producto por habitante cayó en 13% y la desocupación abierta trepó hasta 22%. ¿Cómo enfrentar esta situación? Con igual certeza que en el campo médico se receta un coagulante frente a una hemorragia o un anticoagulante si hay una embolia, debe reactivarse el gasto ante una recesión y limitarlo si se recalienta la economía. Pues bien: durante 10 años los economistas neoliberales locales y del FMI estuvieron aplicando anticoagulantes mientras se producía una hemorragia. El resultado lo tenemos a la vista: sobreendeudamiento, desnacionalización de la economía, concentración del ingreso, pauperización de gran parte de la población, crisis financiera y depresión económica. Se hicieron todas las reformas que nos dictó el *establishment*, en mayor medida que cualquier otro país latinoamericano, y ahora resulta que no fueron suficientes, y que ese es nuestro mal. La pugna actual no es entre bancos y empresas norteamericanas contra sus homólogos argentinos (en el caso de que existan), sino del sector financiero internacional y local contra el sector productivo y los trabajadores y consumidores argentinos. Es notoria la connivencia entre el sector financiero autóctono con el internacional, no solo en las operaciones de lavado de dinero sino también en muchas de las medidas que propone el FMI, que interesan sobre todo al *establishment* local. De ese modo, le otorgan legitimidad y fuerza a demandas que le importan a los socios locales.



Podemos comprobarlo al enumerar las medidas que en la actualidad (abril de 2002) impone el FMI a la Argentina:

Primero, una actitud dura como castigo por el *default*, no vaya a ser que a otros países se les ocurra hacer lo mismo; esto es fundamental para la hegemonía del sector financiero. Cuenta además con el apoyo del *establishment* local, pues más de la mitad de los bonos de deuda están en poder de residentes en Argentina (en su mayoría agentes financieros).

Segundo, la desaparición de la intervención del Banco Central para regular la cotización del dólar. Tal medida marca un cambio en la actitud del FMI, que primero imponía una paridad fija, después una flotación «sucia», pero parece que ahora los mejores negocios se hacen con la libre flotación: cuanto más suba el dólar más baratos resultan para ellos los activos en la Argentina.

Tercero, la licuación de las deudas externas bancarias con el seguro de cambio otorgado el 12 de marzo de 2002, por el decreto 494/2002, para que los bancos paguen el saldo de su deuda externa contraída en dólares. El Gobierno emite bonos compensatorios, cuyo canje cada banco podrá solicitar a razón de 1,40 pesos por 1 dólar. Así, se hace donación a los bancos de un insólito seguro de cambio, por el cual no pagaron ninguna prima, y se congela el precio del dólar a 1,40 pesos, cuando ya está a 3 pesos en la libre flotación. La diferencia la paga el Estado argentino. Para evaluar cuánto costará esta dádiva sería necesario saber los montos de los activos y pasivos comprometidos. Un cálculo preliminar lo estimaba en alrededor de 11.400 millones de dólares¹¹, es decir, de 34.200 millones de pesos (con el tipo de cambio de 3 pesos = 1 dólar). Para advertir la magnitud de esa cifra, recordemos que todo el presupuesto nacional para 2002 establece gastos por 43.000 millones de pesos).

Cuarto, la participación privada en la banca oficial, que le daría injerencia parcial o total a los capitales privados en los bancos de la nación, de la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Después de haber extranjerizado la banca privada, ahora también se van a quedar con la banca pública.

Quinto, la modificación de la ley de quiebras para que se otorgue un trato privilegiado a los bancos.

11. *Clarín*, 14/3/02, nota de Ismael Bermúdez.

Sexto, la derogación de la ley de subversión económica de 1974, que podría llevar a prisión a los banqueros responsables de actos que dañan gravemente el funcionamiento de la economía o a los exportadores por la no liquidación de divisas.

Séptimo, la presión al gobierno nacional para que impida que se someta a juicio a los banqueros sospechosos de actos delictivos a interceda a favor de la Corte Suprema, que ha sido benévola con el sector financiero. Todo ello en nombre de una seguridad jurídica que se vulnera cuando se presiona a los gobiernos y a los jueces. Hace dos años, los organismos financieros internacionales presionaron –sin éxito– para que se dictara una ley de inmunidad que impidiera el juzgamiento del presidente del Banco Central, sus directores y los integrantes de la superintendencia de bancos.

Si el sistema político sigue siendo un reducto del poder rentístico financiero internacional y nacional, nada podrá construirse

Octavo, una serie de medidas, que si bien no atañen directamente a los banqueros, actúan como afirmación del esquema neoliberal y que está en la esencia de la doctrina del FMI, tales como la continuación de una política monetaria restrictiva, la reducción adicional del gasto público, la desaparición de los bonos provinciales, la modificación de la ley de coparticipación que restrinja los ingresos de las provincias. Todas ellas forman parte de una política global de ajuste que contribuye al fortalecimiento del sector financiero y al debilitamiento del sector público, aunque desencadene crisis sociales incontrolables.

Conclusión

Frente a esta situación, ¿qué puede hacerse? El primer cambio es político. Si el sistema político sigue siendo un reducto del poder rentístico financiero internacional y nacional, nada podrá construirse. El requisito esencial es, pues, expulsar del poder al conglomerado que hoy lo maneja. Mientras el excedente económico generado por la sociedad sea apropiado por ese grupo y destinado a otros fines que la acumulación productiva, no habrá horizonte visible.

En la historia, el fin de un régimen y el comienzo de otro está definido por la apropiación de la renta. La Argentina agraria perdió la hegemonía frente a la industrial, cuando en 1946 el Estado comenzó a captar la renta proveniente de la exportación de cereales (a través del monopolio estatal de compra y de comercialización externa) y lo asignó al desarrollo industrial y a la creación o fortalecimiento de empresas estatales de servicios públicos. Ahora, para termi-

nar con la hegemonía rentístico financiera, la renta que captan esos grupos deberá volver al Estado. De ese modo, la economía recobrará su carácter funcional a la política. Los dos ejes del cambio económico viable ahora en Argentina son el pasaje de una economía de renta a otra de producción y una política redistributiva que establezca equidad y eficiencia. En un modelo alternativo, la dupla beneficio/salario reemplazaría al endeudamiento continuo, a la especulación financiera y a las ganancias abusivas. Esos son algunos de los límites que la ética, la moral y la política tienen que imponerle a la economía.

De este breve examen surge con evidencia que el sistema rentístico que hoy nos agobia no solo es retrógrado en lo ideológico. Además es troglodita en cuanto a su origen y modo de funcionamiento. Esta nueva clase dirigente salió de las «cuevas»¹² financieras que contribuyeron con avidez al vaciamiento del país. Más aún: ahora consideran a la Argentina como una «gran cueva» en donde ellos mandan. Como en la caverna de Platón, ven danzar sombras en el fondo de la gruta, tales como los vaivenes financieros, los índices fiscales y las «señales» del mercado. Confunden así sombras con realidad, pero eso no les impidió alzarse con todo lo que encontraron. Les muestran las sombras a los incautos, mientras ellos se llevan bienes y rentas. Se apropiaron para su patrimonio de las rentas financieras, de los servicios públicos privatizados y de los recursos naturales; implantaron un sistema y una práctica fiscal que consagra sus ape-tenencias. Convierten en negocio personal todo lo que tocan. Ahora las llamadas reformas de «segunda generación» apuntan a la apropiación rentística de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la defensa de los argentinos.

La confusión entre interés nacional y negociado privado es total. Sin embargo, no parece una construcción sólida. Desde el punto de vista económico, ese funcionamiento no logra asegurar, ni siquiera de manera injusta, las funciones de acumulación, distribución y producción. Desde el ángulo político, la ruptura del contrato social entre representantes y representados, se expresa en la heterogeneidad de las asambleas barriales, las manifestaciones espontáneas, la protesta ciudadana frente a políticos o encumbrados funcionarios (los «escraches»). La Argentina contempla una situación donde existe la posibilidad de encauzar las energías políticas, económicas, sociales en un nuevo proyecto que liquide el sistema de renta. Pero también pueden surgir viejos demonios bajo nuevas formas, que traten de imponer por todos los medios la reproducción de la renta.

12. En la Argentina, se llaman «cuevas financieras» a los locales semiclandestinos donde se efectúan operaciones financieras ilegales o especulativas.

Contradicciones y límites del Plan de Convertibilidad

Las crisis monetarias, financieras y cambiarias de los últimos años revelan un proceso común subyacente a la inestabilidad económico-financiera de los países periféricos, que efectuaron una liberalización de la cuenta de capitales y se sometieron a un proceso de desregulación financiera. Se procura mostrar los límites y contradicciones internas de esta estrategia económica a partir del programa de estabilización argentino. Este ha representado una de las experiencias más radicales de regímenes cambiarios y monetarios, que se volvió insustentable ante la volatilidad de los flujos internacionales de capitales.

**Marcos Antônio Macedo Cintra /
Maryse Farhi**

Introducción

Las crisis monetarias, financieras y cambiarias de México (1995), del Sudeste asiático (1997-1998), Rusia y Venezuela (1998), Brasil y Ecuador (1999), Ucrania

Marcos Antônio Macedo Cintra: doctor en Economía del Instituto de Economía/Unicamp; investigador de la Fundap; @: <marcos.cintraC@uol.con.br>.

Maryse Farhi: doctora en Economía del Instituto de Economía/Unicamp; investigadora del proyecto Fapesp/IE/Unicamp; @: <quatis.adsl@uol.con.br>.

Palabras clave: Plan de Convertibilidad, caja de conversión, apertura financiera y comercial, crisis cambiaria y mercados emergentes, Argentina.

y Paquistán (2000) y, finalmente, Turquía y Argentina (2001/2002) revelan un proceso común subyacente a la inestabilidad económico-financiera. Todos estos países periféricos, llamados emergentes, efectuaron una liberalización de la cuenta de capitales y se sometieron a un proceso de desreglamentación financiera, quedando sometidos a la ciclotimia despótica de los mercados nacionales e

A comienzos de los años 90, en condiciones de estabilidad cambiaria, acreedores y deudores fueron más negligentes en cuanto al riesgo

internacionales, o sea, sujetos a una etapa inicial de euforia seguida por fugas de capitales, amenazas de colapsos financieros y de ataques especulativos contra las monedas. En todos los episodios, la inestabilidad cambiaria se inició con un aumento significativo de los flujos de capitales, seguido de una abrupta pérdida de divisas.

Dentro de las reglas y prácticas monetarias y financieras vigentes a comienzos de los años 90, en condiciones de estabilidad cambiaria, acreedores y deudores fueron más negligentes en cuanto al riesgo, elevando progresivamente los flujos de capitales hacia las economías emergentes. Por otro lado, estos flujos reforzaron las expectativas de estabilidad cambiaria, atrayendo grandes volúmenes de recursos hacia las bolsas de valores, aplicaciones en renta fija y compra de activos reales. Con la corriente de capitales la tasa de cambio tendía a valorizarse y la tasa de interés a elevarse, pues incluía un «premio al riesgo» que correspondía a la expectativa de devaluación de la tasa de cambio.

Tal combinación estimuló el endeudamiento externo de los agentes domésticos –bancos y grandes empresas– que tomaron decisiones de apalancar créditos (renegociando entre bancos) en monedas extranjeras, con tasas de interés menores. Así, los arbitrajes entre tasas tendieron a reforzar el contexto de diferenciales de interés entre los mercados financieros nacionales y no a homogeneizar las diferencias entre las diversas plazas. Las continuas entradas de capitales basados en los diferenciales de rentabilidad, ampliaron la revalorización de la moneda local, realimentando los flujos y ampliando los pasivos externos. El aumento de las reservas internacionales daba una impresión de fuerza a su inserción internacional (con endeudamiento externo) y, consecuentemente, proveía la credibilidad necesaria a la tasa de cambio vigente. Sin embargo, producía una esterilización de las divisas, esto es, el cambio de monedas extranjeras por títulos públicos denominados en moneda nacional y/o indexados al dólar, ampliaba la deuda pública y presionaba las tasas en los mercados monetarios domésticos, reforzando el diferencial de interés y atrayendo más flujos de capitales en la búsqueda de arbitrajes altamente rentables.

De esa manera, a pesar de las características de cada país, la movilidad de los flujos de capitales produjo en Asia, América Latina y Europa oriental una conjunción insustentable de valorización cambiaria, aumento de la deuda externa pública y privada que desembocaría en crisis cambiarias, fragilidad de los sistemas financieros y falta de liquidez en los mercados domésticos. Por lo tanto, las sucesivas ondas de turbulencia financiera que asolaron a los países emergentes están asociadas a la inestabilidad intrínseca de los mercados de capitales internacionalizados y no reglamentados. La experiencia argentina ha sido conforme al proceso descrito, pero presenta particularidades que hablan tanto de la radicalidad y la extensión de las medidas antiinflacionarias y de liberalización financiera implementadas, como de la profunda crisis que alcanzó el país a comienzos de 2002.

El Plan de Convertibilidad

A finales de 2001, el Plan de Convertibilidad adoptado en abril de 1991 entró en colapso. El Gobierno declaró la moratoria de la deuda pública y devaluó el peso en medio de una de las más largas y profundas recesiones de la historia argentina. El programa antiinflacionario representaba una de las experiencias más radicales de régimen cambiario y monetario, y se mostró insustentable frente a la volatilidad de los flujos internacionales de capitales.

Sin lugar a dudas, los límites y contradicciones del modelo argentino aportan importantes lecciones para los países latinoamericanos. Muestran, en efecto, que las eventuales soluciones a sus problemas no están asociadas a una mayor extensión de las reformas liberalizantes sino, al contrario, a la necesidad de recuperar la capacidad de implementar políticas monetarias, cambiarias y fiscales autónomas.

Este artículo busca examinar algunos aspectos del Plan de Convertibilidad, pero no propone un balance general de la experiencia argentina. En la primera sección, se analiza la lógica intrínseca del Plan, buscando evidenciar sus límites y contradicciones. Después se discute el éxito relativo del programa de estabilización frente al deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos y el creciente endeudamiento del sector público. En la tercera sección se evalúa el comportamiento de las reservas y de los agregados monetarios y sus impactos en el sistema bancario. En la cuarta, se muestra el desempeño del sector público, destacando el pago de intereses. En la quinta sección se tejen algunas consideraciones sobre la naturaleza de la expansión y crisis de la economía argentina y de los demás mercados emergentes en los años 90.

Contradicciones y límites del Plan de Convertibilidad

Como sabemos, para controlar la inflación en 1991, la tasa de cambio fue establecida en un dólar / un peso, subordinando la base monetaria a las reservas internacionales. Estas reglas fueron establecidas por ley, no meramente anunciadas por las autoridades monetarias¹. En principio, el régimen de cambio fijo facilita el proceso de integración con los mercados financieros internacionales, pues

La tasa de cambio fija argentina pudo aguantar durante los 90 el riesgo de devaluación, promoviendo una fiesta en los mercados de capitales

los agentes económicos ven ampliada la previsibilidad reduciendo probables ataques especulativos. La convertibilidad plena introdujo un modo de funcionamiento económico que, supuestamente, aseguraría su reproducción automática. El mecanismo debía funcionar así: de ocurrir una ampliación de reservas, se produciría una expansión en el volumen de crédito y una reducción en la tasa de interés, lo que impulsaría la actividad económica. Si la expansión ocasionaba un desequilibrio en la balanza de pagos, con las importaciones creciendo más rápido que el producto, habría una caída de las reservas internacionales acompañada de una reducción de la liquidez del sistema bancario, contracción del crédito y elevación de la tasa de interés, con la consecuente reducción de la actividad económica y del volumen de importaciones. Aun así, el aumento en la tasa de interés doméstica atraería el capital externo, restableciendo el equilibrio y proporcionando una nueva recuperación económica. De esta manera, la estrecha relación entre reservas y liquidez doméstica garantizaría la perpetuación del sistema, con el nivel de actividad dependiente del flujo de capitales internacionales.

La experiencia argentina mostró que este mecanismo no funciona a satisfacción. En condiciones adversas de liquidez internacional, un régimen de cambio fijo introduce restricciones que limitan la capacidad de las autoridades para promover un ajuste en la economía. La tasa de cambio fija argentina pudo aguantar durante toda la década de los 90 el riesgo de devaluación, promoviendo una fiesta en los mercados de capitales que terminó incrementando extraordi-

1. Por ley la moneda argentina fue declarada convertible en dólares a una tasa de cambio nominal fija (Art. 1). Se estableció también que las reservas internacionales de libre disponibilidad del Banco Central debían ser siempre equivalentes a, por lo menos, 100% de la base monetaria (Art. 4). Fueron prohibidos mecanismos de indexación (Art. 7). Además de eso, el Código Civil fue modificado en forma de dar plena eficacia jurídica a los contratos en moneda extranjera (Art. 11). La ley de Convertibilidad fue reproducida en Revista de Economía Política vol. 11 N° 4, 10-12/1991, San Pablo, pp. 157-159. Para una excelente discusión sobre los diferentes momentos del programa argentino, v. Batista.

nariamente el endeudamiento público y llevó a la moratoria de la deuda y a un proceso desordenado de devaluación de la moneda. Durante el proceso de deterioro de las expectativas que condujeron a diversos ataques especulativos contra el peso y al desencadenamiento de la crisis con retiros de depósitos y pérdida de reservas, se puso de manifiesto la necesidad de un acreedor de última instancia capaz de sustentar el sistema financiero y de un apalancamiento externo de emergencia para mantener el régimen cambiario. Esos papeles fueron desempeñados en forma precaria, en diferentes momentos, por el Banco Central, por el endeudamiento público creciente y por el «blindaje financiero» organizado por el FMI, posponiendo la crisis que se dibujaba progresivamente. Sin embargo, la inexistencia de un respaldo en dólares que cubriera toda la masa monetaria y los límites a la capacidad de endeudamiento del sector público se tornaron evidentes a partir de marzo de 2001.

Dado el nivel de la tasa de cambio real y el grado de apertura comercial, para Argentina ha sido imposible crecer sin generar un creciente déficit en el balance de transacciones corrientes, financiado por los mercados de capitales. La deuda externa del sector público financió el déficit en cuenta corriente, pero ha resultado en una elevación de los gastos con intereses. El consecuente déficit público se vio agravado, sobre todo en el segundo mandato de Carlos Menem, por las tentativas de acomodar las contradicciones y reivindicaciones de las distintas facciones de las clases dominantes que, por falta de un proyecto político y económico único, tenían cada vez más dificultades para ejercer su hegemonía. Sin embargo, el sistema de convertibilidad no es compatible con desequilibrios (externos y fiscales) persistentes, dado que no puede perder reservas ni es capaz de emitir moneda para cubrir el déficit público. A comienzos de los años 90, el abundante financiamiento externo permitió evitar esa contradicción – pero no la eliminó. Al final de 2001, por el contrario, el elevado endeudamiento externo, sobre todo del sector público, combinado con el estancamiento del producto y de las exportaciones, elevó la tasa de riesgo soberano a más de 5.000 puntos (lo que significa tasas de interés de 50% por encima de la pagada por los títulos del Tesoro estadounidense), excluyendo al país del mercado internacional de crédito voluntario y de los mecanismos de financiamiento de emergencia patrocinado por las instituciones multilaterales². La pérdida contumaz de

2. El banco J.P Morgan/Chase divulga, en tiempo real, un índice de los riesgos-país, de composición definida y calculado por *una media* de los precios de los títulos de las deudas soberanas negociadas en los mercados secundarios internacionales. Aunque no tenga el aspecto casi institucional de los ratings concedidos por las agencias de clasificación de riesgo crediticio, *este índice es un espejo más fiel* de las expectativas de los participantes de los mercados financieros y un indicador más preciso del costo probable de una nueva emisión. Resáltese que debido a su forma de cálculo, también es mucho más volátil que los *ratings* atribuidos por las agencias.

las reservas y la huida de los depósitos bancarios desencadenaron una dinámica perversa, sustentada en la pérdida de apalancamiento, para una economía monetaria periférica, anclada rígidamente a una moneda fuerte. Desde 1999, la economía argentina padece de continuas caídas en el consumo y en la inversión,

***Se estima que
38% de la moneda en
circulación
está compuesto
por estos bonos,
cuasi-monedas
públicas y privadas
que se aceptan
con una elevada
depreciación***

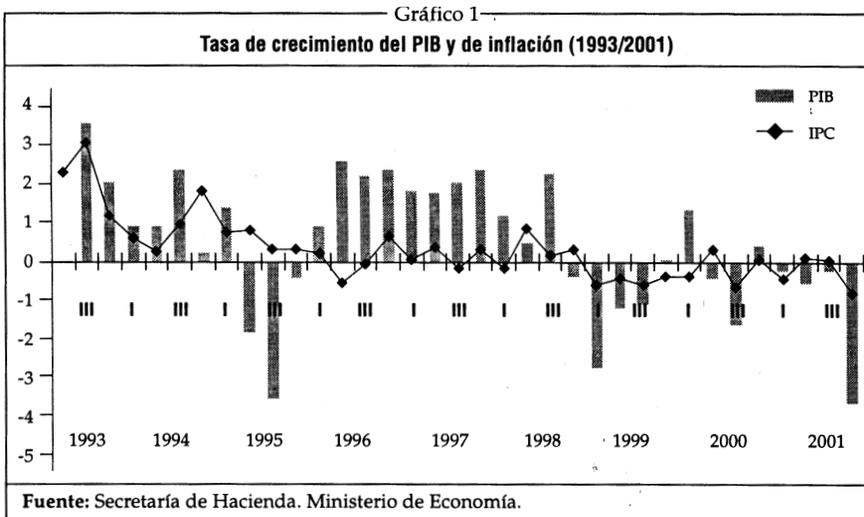
acarreando depresión económica prolongada, crisis fiscal, cese de la intermediación financiera, deflación, desmonetización, aumento del desempleo y agravamiento de la desigualdad social (Laplane).

Los esfuerzos de reducción del déficit público exigidos por el FMI hicieron que, aún bajo la vigencia de la convertibilidad, las relaciones mercantiles pasaran a depender de 14 bonos-moneda al margen del sistema monetario oficial. Las provincias emitieron estos bonos (p. ej., Lector, de la provincia de Córdoba; Patacón, de la de Buenos Aires) para pagar sueldos y proveedores; las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecops), emitidas por el gobierno nacional, fueron utilizadas para pagar deudas con las provincias, etc. Una organización llamada Activar, integrada por empresarios, profesionales liberales, representantes de la sociedad civil y por el gobierno del municipio de Villa María (Córdoba) lanzó 100.000 bonos-moneda. Se estima que 38% de la moneda en circulación está compuesto por estos bonos. Obviamente, esas cuasi-monedas públicas y privadas se aceptan con una elevada depreciación.

En fin, se desorganizó completamente el sistema monetario. «Este es el momento en que la hiperinflación y la deflación prolongada convergen hacia un mismo final: la completa destrucción del sistema monetario y, por lo tanto, la imposibilidad de coordinar las decisiones privadas» (Belluzzo). Ahora bien, en este sentido la desorganización del sistema de crédito se planteó por la pérdida creciente de depósitos y por la forma atribulada en que se dieron las modificaciones en las políticas cambiarias, lo cual terminó poniendo en riesgo la propia supervivencia de las instituciones financieras.

El desempeño del sector externo y el endeudamiento del sector público

El Plan de Convertibilidad tuvo pleno éxito en la estabilización de los precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó de 51% en el primer trimestre a 5,8% en el tercer trimestre de 1991 (ver gráfico 1). A partir del primer trimestre



de 1996, el IPC comenzó a presentar señales de deflación, que se profundizaron después de 1999 con la depresión económica. La estabilización de precios, combinada con la entrada de capitales extranjeros, permitió una rápida remonetización de la economía y una expansión del crédito, sobre todo el asociado al consumo. Esto reactivó la actividad económica entre 1991 y 1994, mediante la utilización de la capacidad ociosa. Sin embargo, no permitió un arreglo adecuado para el crecimiento a mediano y largo plazo (v. gráfico 1).

La reducción de la inflación estuvo acompañada de fuertes cambios en los precios relativos entre bienes transables y no transables, que deterioró la competitividad de la economía. Frente a déficit persistentes en la balanza comercial, el ajuste recaía sobre el nivel de actividad económica, como forma de reducir las importaciones. En resumen, la estabilidad de los precios no resultó en estabilidad económica, pues el nivel de actividad se tornó dependiente de las fluctuaciones de los mercados de capitales mundializados, que pasan abruptamente de la euforia a la depresión. La sobrevaluación cambiaria y la apertura comercial transformaron el superávit comercial de 8.000 millones de dólares en 1990, en déficit en 1992. Las exportaciones crecieron significativamente entre 1993 y 1997, pero se estancaron en los años siguientes. En gran medida, ese incremento siguió a la creación del Mercosur (1994), estimulando los procesos de especialización, que ampliaron el comercio intrasectorial (sector automovilístico, químico, etc.) a intraempresarial. Crecieron también las exportaciones de productos primarios, tales como petróleo, gas y granos (trigo y soja), aprovechando la expansión de la economía norteamericana y la revaluación de la moneda bra-

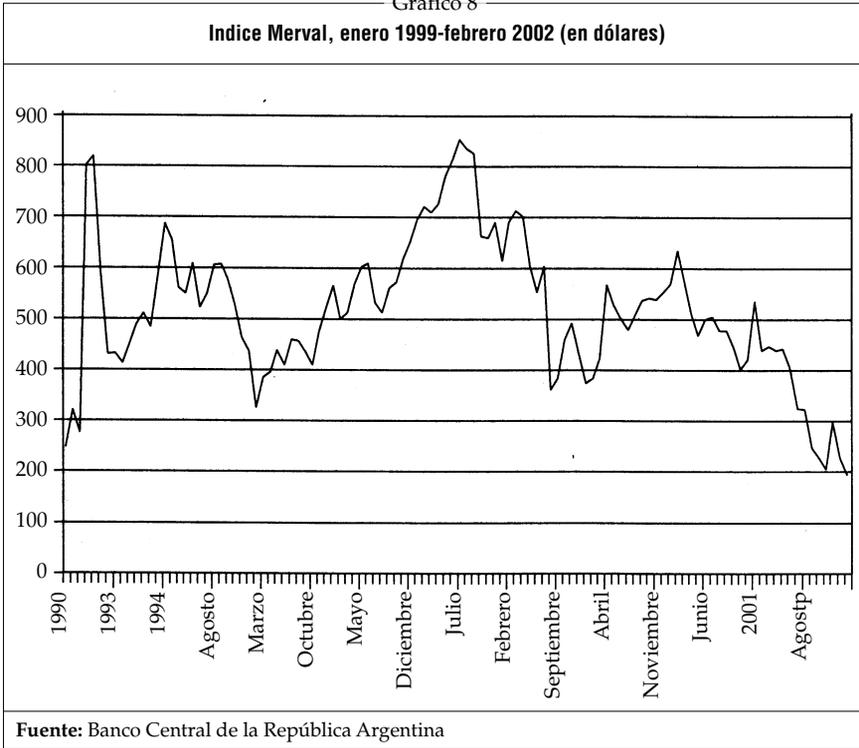
sileña. Sin embargo, las importaciones crecieron a una tasa más elevada, desencadenando un déficit comercial persistente entre 1992 y 1999, excepto en 1995 y 1996, después de la crisis mexicana.

Al déficit en la balanza comercial se deben agregar las remesas de utilidades y los pagos de intereses. Estos crecieron de 2.400 millones de dólares en 1992 a 7.300 millones en 2000, asociados al aumento de la deuda externa y de la inversión extranjera directa (IED) (sobre todo, venta de empresas públicas y privadas al capital externo). El elevado pasivo externo –el inventario de la deuda y de la IED– generó un déficit estructural en la balanza de servicios. Eso significó un déficit de cuenta corriente durante una década. De 5.600 millones de dólares en 1992, saltó a 14.600 millones en 1998, cayendo a 8.800 millones en 2000³. La captación de recursos externos se tornó, entonces, imprescindible para cerrar la balanza de pagos y mantener el régimen de convertibilidad. Para financiar el déficit en cuenta corriente y aumentar las reservas, en las cuales se anclaba la base monetaria, fueron necesarios 113.600 millones de dólares entre 1992 y 2000. Hasta la crisis mexicana la entrada líquida de capitales se situó en 11.800 millones de dólares anuales, en términos medios. De ese monto, aproximadamente 70% se originó en operaciones del sector privado, atracción de capitales a corto plazo para la bolsa de valores, con el índice Merval valorizándose acentuadamente (v. gráfico 2), emisión de bonos a IED, y 30% de captaciones del sector público.

Esa situación se alteró en los años siguientes con la crisis mexicana seguida de las crisis en Asia, Rusia y, finalmente por la devaluación de la moneda brasileña en 1999. A partir de 1995, la necesidad de financiamiento externo saltó a otro nivel, aumentando a un promedio de 13.700 millones de dólares, a pesar de la caída en la tasa de crecimiento económico. Pero cambió la composición del financiamiento externo: disminuyeron las captaciones del sector privado y crecieron las captaciones del sector público. Los flujos líquidos de capitales privados a corto plazo se tornaron negativos, con el índice Merval volviendo al nivel de preestabilización (v. gráfico 2). Los capitales a largo plazo siguieron positivos (sobre todo en 1997, pero declinaron en los años siguientes) bajo la forma

3. En principio, esto representaba un resultado «adverso» del modelo de convertibilidad. Supuestamente, la apertura comercial y financiera, la privatización de los servicios de utilidad pública, la reforma de la previsión, la desnacionalización y reglamentación del sistema bancario, la independencia del Banco Central, la descentralización del gasto social, la adopción de la ley de responsabilidad fiscal, la flexibilización del mercado de trabajo y otras reformas exigidas por los mercados financieros internacionales deberían generar acentuados aumentos de productividad. El crecimiento de las exportaciones y de la competitividad de los sectores comerciales eliminaría los desequilibrios en la balanza de pagos, sin alterar la tasa de cambio (Calcagno/Manuelito/Titelman, p. 5).

Gráfico 8



de emisiones de títulos de la deuda, y mediante la IED, principalmente en la forma de adquisiciones de bancos y empresas argentinas, meras transferencias de propiedad y ningún nuevo emprendimiento⁴.

En las captaciones del sector público las privatizaciones tuvieron relevancia, pero el endeudamiento público garantizó la mayor parte de la entrada de capital. Dicho sector pasó a responder por 70% del financiamiento externo, mediante la emisión de bonos. La deuda externa total pasó de 58.600 millones de dólares en 1991 a 146.800 millones en septiembre de 2001, siendo que 61,9% correspondía al sector público. Es evidente, por lo tanto, que desde 1995, el régimen de convertibilidad fue mantenido gracias al creciente endeudamiento externo público. Este escenario de endeudamiento progresivo sin crecimiento, llevó al país a una situación de insolvencia. Para cumplir o renovar los pagos de las deudas en 2001 y 2002, se negoció a finales de 2000 un paquete del Fondo

4. La IED totalizó aproximadamente 58.700 millones de dólares, entre 1992 y 2000. En ese total está incluido la inversión de la española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que corresponde a la compra de acciones de la empresa en poder de no residentes, en 1999.

Monetario Internacional de «blindaje financiero». Incluyó 13.700 millones de dólares del FMI, 2.500 millones del Banco Mundial, 2.500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, 1.000 millones del gobierno español y 20.000 millones de inversionistas institucionales y bancos internacionales que renovaron sus créditos. En mayo/junio de 2001, el Gobierno promovió una reestructuración de la deuda (mediante una operación de *swaps*) por 30.000 millones de dólares, en la cual fueron diferidos pagos de capital a intereses por 16.000 millones de dólares para los cinco años siguientes. Con la reestructuración hubo un aumento de las existencias en depósito de la deuda de aproximadamente 2.000 millones de dólares, pago de comisiones por 145.000 millones de dólares, y la aceptación de tasas de interés de alrededor de 15%. Sin embargo, ninguno de esos programas fue capaz de restablecer el equilibrio del sector externo, ni restaurar la confianza de los inversionistas internacionales.

A finales de 2001, el Gobierno decretó la moratoria de la deuda pública y el bloqueo de los depósitos bancarios. Las manifestaciones populares duramente reprimidas llevaron a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y a fuertes perturbaciones políticas, con una rápida sucesión de presidentes. En enero de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde abandonó el régimen de convertibilidad y a principios de febrero de 2002, convirtió a pesos todos los depósitos y aplicaciones bancarias en dólares, a una tasa de 1 dólar por 1,4 pesos; las deudas fueron convertidas a una tasa de 1 por 1. Se adoptó, además, una política cambiaria con flotación «sucia» (sujeta a intervenciones del Banco Central); imposición de controles sobre las operaciones financieras con el exterior; y esfuerzos para alcanzar un acuerdo con el FMI, a fin de obtener recursos en moneda fuerte. La transformación de los pasivos y activos en dólares por pesos en forma asimétrica desencadenó un desequilibrio patrimonial en el sector financiero que deberá ser cubierto por bonos del Tesoro. Pero frente a la fuerte crisis fiscal del Estado argentino, tales bonos valen mucho menos que su valor nominal, de manera que el temor de una degeneración del sistema financiero sigue existiendo. Se estima que la reestructuración de ese sistema costaría cerca de 34.500 millones de pesos (14% del PIB).

El comportamiento de las reservas y de los agregados monetarios

De acuerdo con la Ley de Convertibilidad, la base monetaria debía corresponder a las reservas internacionales, a la tasa de cambio fijada (un peso / un dólar). O sea, la regla monetaria adoptada vinculó la emisión monetaria con la acumulación de reservas internacionales. Sin embargo, hubo cierto margen de flexibilidad, al computar como reservas internacionales ciertos títulos públicos

(que no podrían superar 33% de las reservas totales). De todas formas, la regla monetaria implicaba para el público en general que todos los pesos en circulación estaban respaldados por dólares en el Banco Central. Si esto era verdad para la base monetaria, no lo era para los depósitos bancarios, que excedían en mucho las reservas internacionales en el Banco Central (v. gráfico 3).

Ello provocó una enorme asimetría entre los periodos de expansión y de contracción de las reservas. Durante la expansión (1991-1994 y 1996-1998), hubo un aumento simultáneo de las reservas internacionales, de la base monetaria, de los

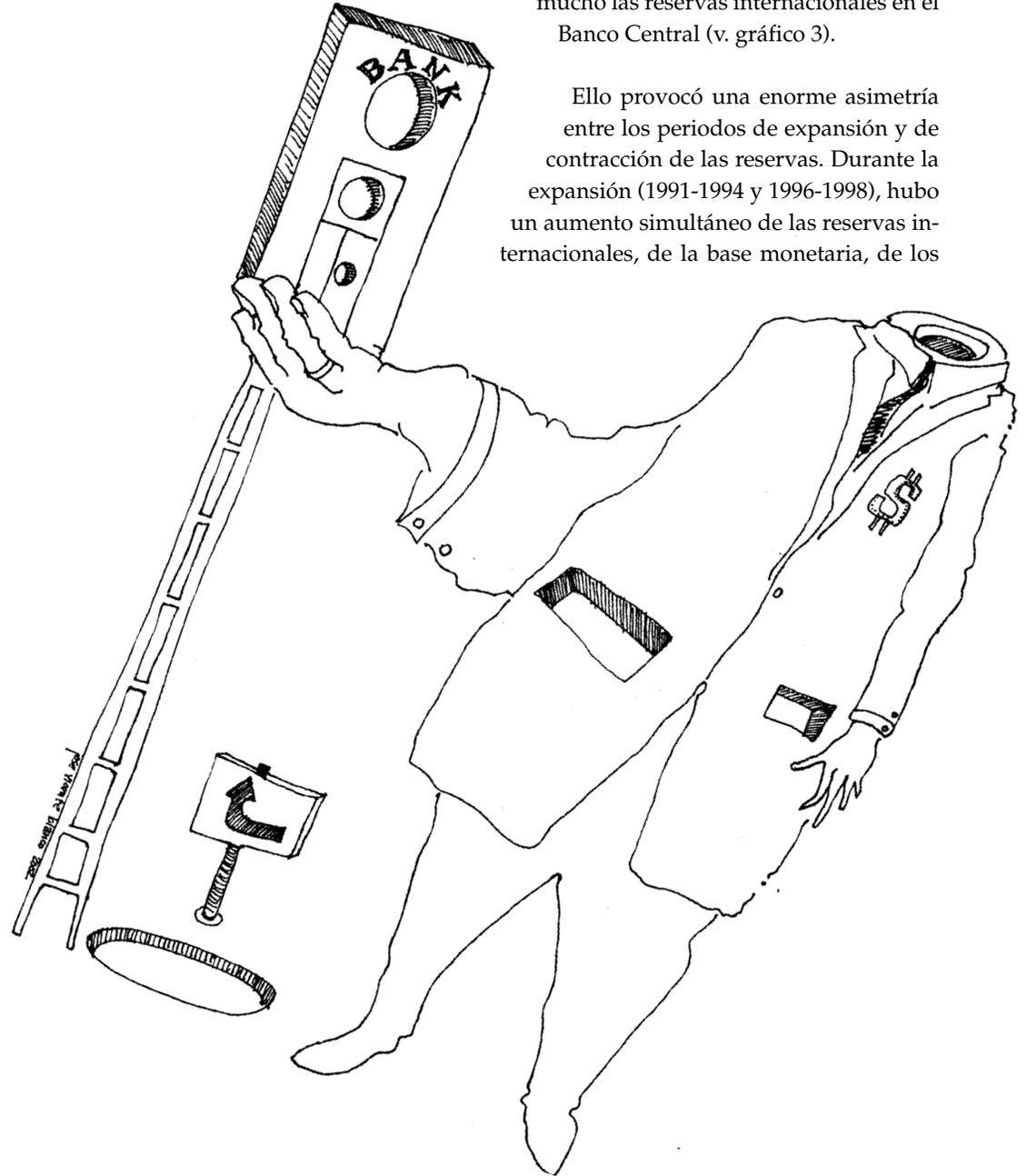
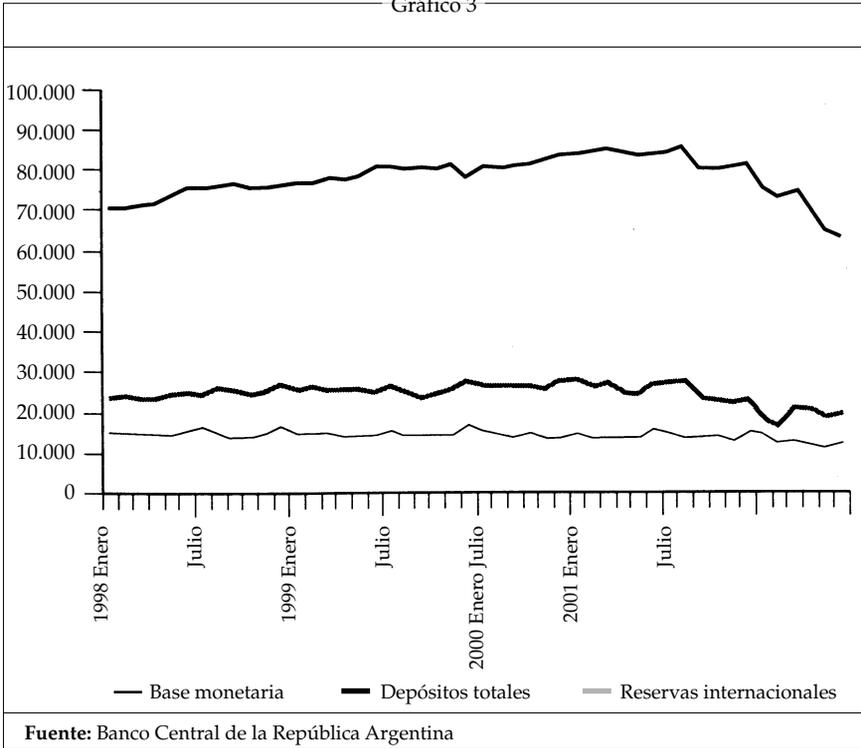
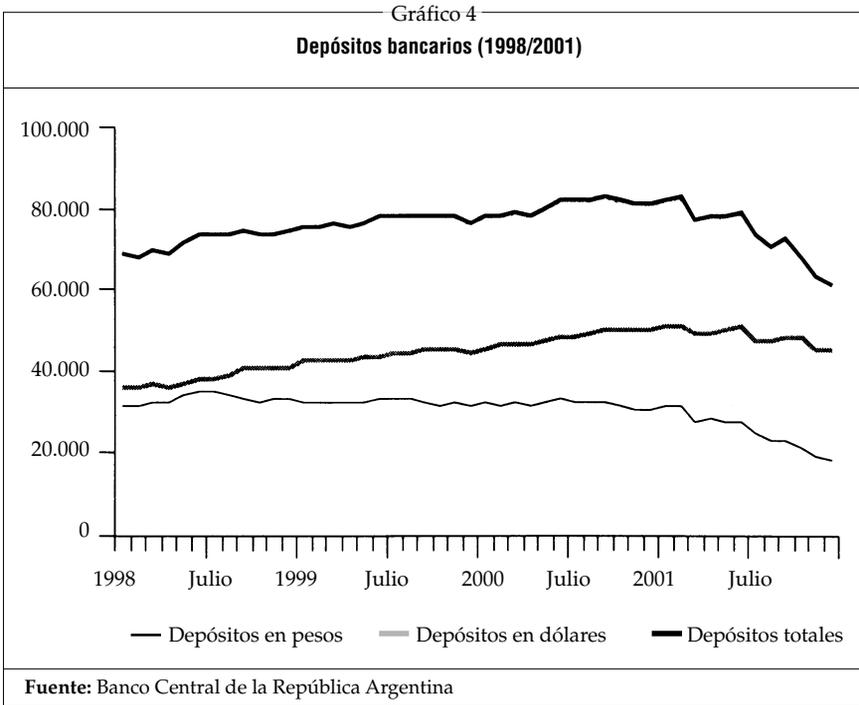


Gráfico 3



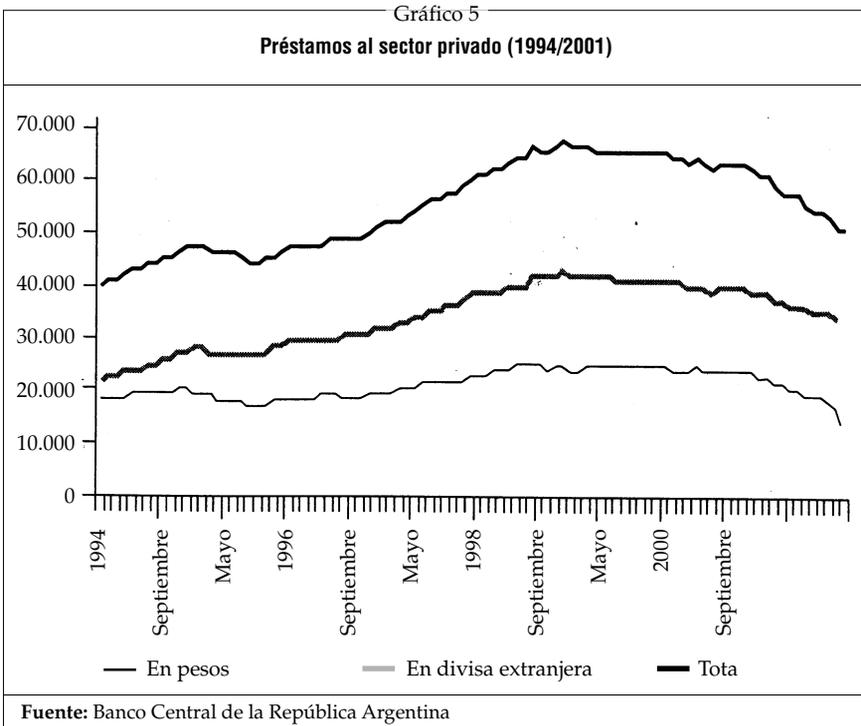
depósitos bancarios y de los préstamos al sector privado. La expansión conjunta fue notable durante los primeros años del régimen de convertibilidad, cuando hubo una rápida remonetización de la economía. Las reservas internacionales pasaron de 8.900 millones de dólares en diciembre de 1991 a 17.900 millones en diciembre de 1994, creciendo 101%; los depósitos, 119%; mientras los préstamos al sector privado, 73% (Calcagno/Manuelito/Titelman, p. 9). Entre diciembre de 1995 y diciembre de 1998 se produjo también una expansión de esos indicadores. Las reservas crecieron de 18.500 millones de dólares a 26.500 millones (43,3%), y los préstamos al sector privado de 46.700 millones a 67.000 millones (43,4%). Por otro lado, en los tres meses siguientes a la crisis mexicana, las reservas se contrajeron en 5.400 millones de dólares (de 17.900 millones en diciembre de 1994 a 12.500 millones en marzo de 1995).

La base monetaria debió caer en un monto semejante, pero disminuyó en apenas 886 millones de dólares. La cantidad de moneda en circulación y de depósitos a la vista permaneció relativamente estable. Los depósitos bancarios (en pesos y en dólares) cayeron 6.500 millones de dólares, pero los préstamos al



sector privado disminuyeron en apenas 320 millones (Calcagno/Manuelito/ Titelman, p. 10). Frente a eso, es evidente que las reservas no funcionaban como anclaje de la base monetaria, ni de los medios de pagos, que no fueron cambiados por dólares. Fueron los inversionistas de depósitos a plazo quienes corrieron hacia el dólar, pero las reservas no eran suficientes para garantizarlos si la huida continuaba. Además, se comprobó que el sistema bancario no podía contraer sus préstamos en la misma proporción de la pérdida de depósitos sin provocar una crisis.

Así, no entró en operación ningún mecanismo de ajuste automático. Ni la base monetaria cayó con las reservas, ni los préstamos disminuyeron con los depósitos bancarios. Se produjo, en verdad, la intervención del Banco de la Nación y del Banco Central, a través de operaciones de redescuento y de inyección de liquidez en el sistema por 3.500 millones de dólares (mediante una alteración de la Carta Orgánica del Banco Central), para enfrentar la amenaza de crisis. Además de eso, fueron flexibilizados los requisitos para depósitos bancarios, se implementó un sistema de garantía de depósitos y se constituyó un fondo para financiar la reestructuración del sistema, mediante fusiones y transferencias. Además, se adoptó una política explícita de concentración del sistema fi-



nanciero y de entrada de bancos extranjeros, cuya participación en el mercado saltó de 17,9% en 1994 a 48,6% en 1999 (Cintra/Castro)⁵.

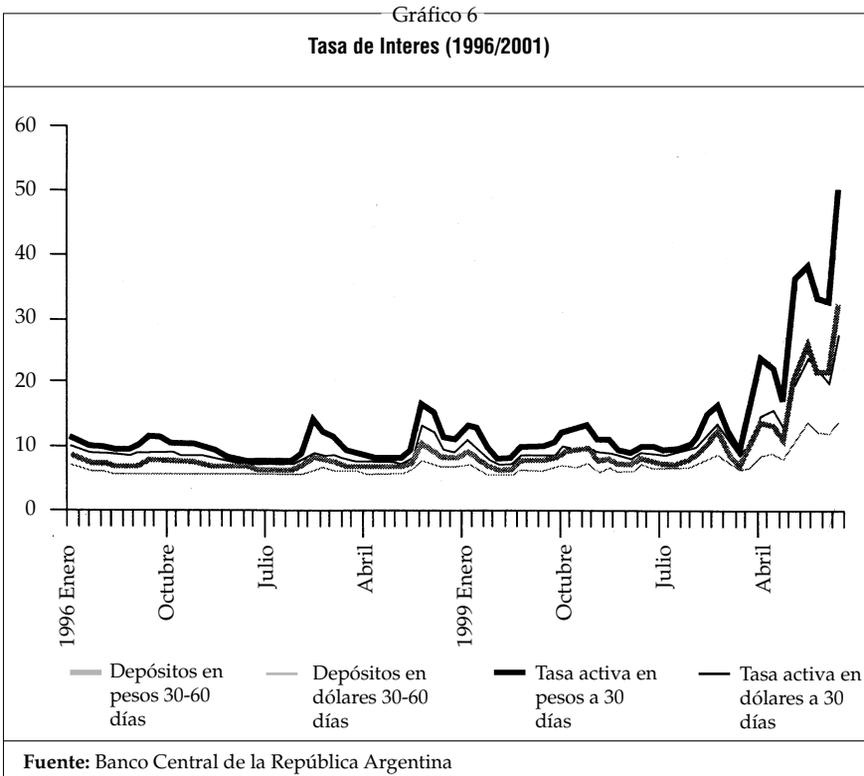
Para restaurar la confianza en el sistema monetario y financiero, el Banco Central pasó a estimular también los depósitos en dólares en el mercado local, que ofrecían tasas atractivas (Schvarzer). Rápidamente los depósitos en dólares se tornaron superiores a los nominados en pesos y, mediante el multiplicador bancario, ampliaron la dolarización del crédito (v. gráficos 4 y 5), consolidando un sistema bimonetario. Eso significa que la confianza en el dólar aumentaba en tanto declinaba la fe de la población en el peso.

Con el paquete de ayuda al gobierno mexicano, patrocinado por Estados Unidos, los flujos de capitales hacia los países periféricos fueron restablecidos, y Argentina pudo experimentar un pequeño recalentamiento entre 1996 y 1998. A pesar de la ampliación del déficit en cuenta corriente y del crecimiento de la

5. La internacionalización bancaria era vista como una forma de mejorar la calidad del sistema doméstico, una vez que las filiales de los bancos extranjeros en el país estarían garantizadas por las matrices. Hipótesis que no se confirmó en la crisis.

deuda pública, los mercados financieros internacionales continuaban buscando con apetito los papeles de mayor rendimiento y riesgo emitidos por los países emergentes.

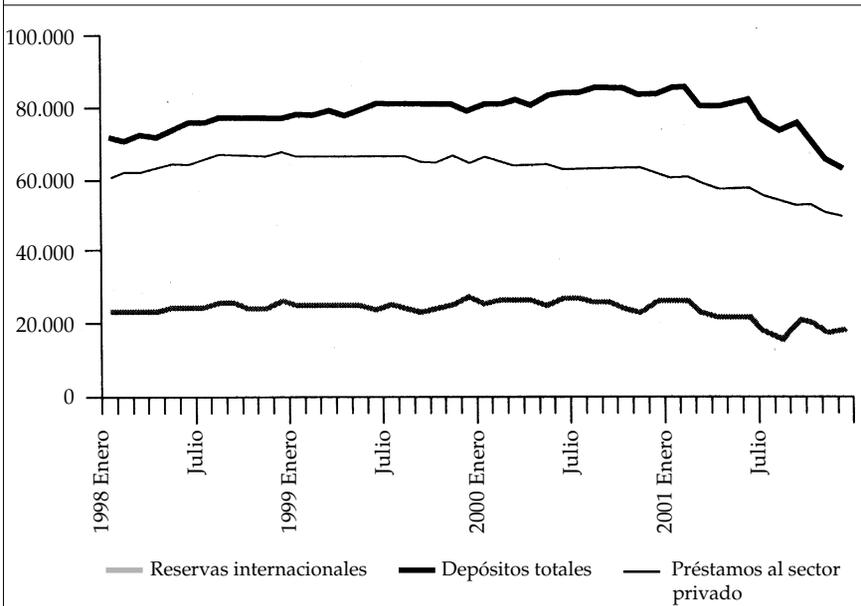
Más tarde, frente a la creciente dolarización de activos (y pasivos) y la incapacidad de generar recursos en moneda fuerte para servir las deudas públicas y del sector privado, se ampliaron extraordinariamente los rumores de insolvencia argentina a partir de marzo de 2001. Se incrementó también la aversión al riesgo de los inversores financieros internacionales, con el descenso de las principales bolsas mundiales y con la desaceleración de la economía norteamericana. El financiamiento de las deudas de países periféricos con déficit en cuenta corriente se puso más difícil. El aumento de las tasas de interés, tanto en pesos como en dólar, fue reflejo de la percepción de riesgo de los mercados (v. gráfico 6). Las tasas de interés en pesos expresaban el riesgo de devaluación, mientras que las tasas de interés en dólares expresaban el riesgo de moratoria.



El «blindaje financiero» organizado por el FMI y la reestructuración de la deuda pública fueron percibidos como insuficientes y se diluyeron en el diluvio de la desconfianza. Las medidas de política económica implementadas por el ministro Cavallo –aumento de las tarifas aduaneras para bienes de consumo y reducción de las tarifas para bienes de capital, rebaja en los tributos de empresas exportadoras, a introducción del euro en la definición de la tasa de cambio para el comercio exterior– no lograron reactivar la economía. Los poseedores de riqueza desencadenaron una persistente huida de depósitos del sistema bancario, acompañada de la reducción de las reservas cambiarias. Eran síntomas evidentes de una crisis monetaria y cambiaria en gestación. Entre febrero y diciembre de 2001, los depósitos bancarios totales (en pesos y en dólares) cayeron de 85.600 millones de dólares a 63.000 millones (v. gráfico 7). Las reservas en el Banco Central disminuyeron de 26.800 millones de dólares a 19.400 millones, incluyendo un nuevo aporte del FMI (el préstamo total fue de 8.000 millones, pero la liberación de los recursos se producía en varias fases) al final de agosto. Los bancos respondieron contrayendo los préstamos al sector privado, que cayeron de 61.000 millones de dólares a 50.000 millones (v. gráfico 7). A su

Gráfico 7

Préstamos al sector privado (1994/2001)



Fuente: Banco Central de la República Argentina

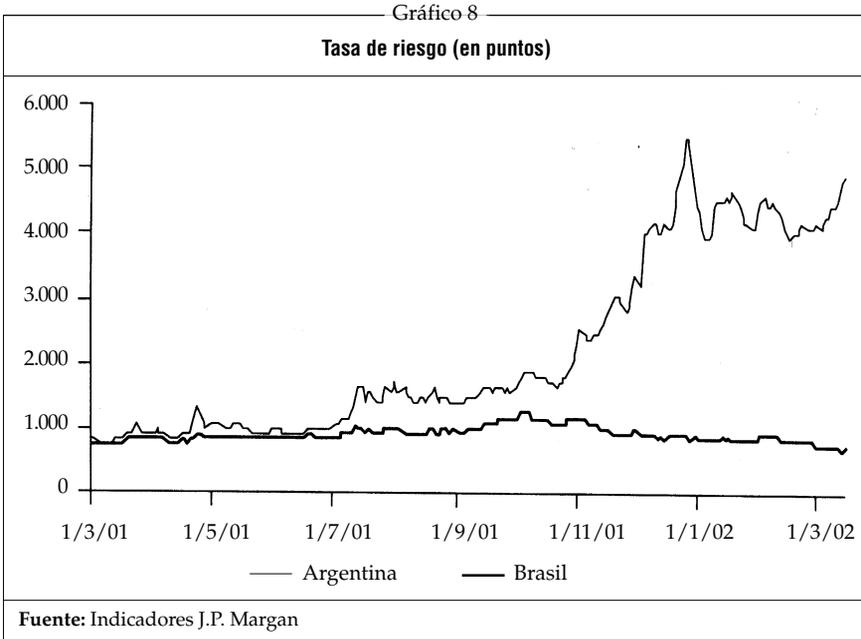
vez, el Banco Central redujo los encajes y prestó 1.800 millones al sistema bancario. En fin, una vez más la contracción en el volumen de reservas no tuvo como contrapartida una caída semejante en la base monetaria, que cayó de 13.500 millones de dólares a 11.900 millones, aunque con la necesaria intervención del Banco Central y de un nuevo préstamo del FMI. Se comprobó nuevamente que el sistema era vulnerable, y que no contaba con ningún mecanismo endógeno de ajuste. En verdad, se amplió la percepción de que el régimen cambiario y monetario generaba endógenamente un desequilibrio creciente entre el volumen de reservas y la masa de activos financieros domésticos, inflados por la elevada tasa de interés local.

A principios de diciembre, la persistente caída de depósitos llevó al Gobierno a bloquearlos. Personas físicas y jurídicas podrían retirar solamente 1.000 dólares por mes, ampliando la desconfianza en el sistema bancario y desencadenando una restricción de la liquidez sin precedentes. En un clima de creciente incredulidad frente a la moneda nacional y al sistema financiero, los inversionistas trataron de anticiparse a una eventual devaluación buscando refugio en el dólar. La acelerada pérdida de reservas tornó imposible sostener la convertibilidad. Finalmente, el Gobierno declaró la moratoria de la deuda pública, devaluó el peso (1 dólar / 1,40 pesos) y, enseguida, se adoptó una tasa de cambio fluctuante. Por lo que se observa, hasta el final de marzo de 2002, la libre fluctuación tiene pocas posibilidades de estabilizar el cambio⁶, frente al desarreglo de las expectativas, la inexistencia de una política monetaria (en función de la gran cantidad de cuasimonedas en circulación) y los movimientos de pánico de los portadores de pesos que buscan cambiarlos por divisas a cualquier precio.

La tasa de riesgo argentina explotó, pero el contagio hacia Brasil, notable hasta octubre de 2001, fue mucho más limitado con la constatación de inversionistas brasileños e internacionales de que las situaciones eran bastante distintas. Si tal disociación fue beneficiosa para Brasil, puede haber repercutido desfavorablemente en Argentina, ya que hubo la percepción de que la crisis no sobrepasaba las fronteras y llevó al FMI a imponer duras condiciones a cualquier nuevo préstamo (v. gráfico 8).

El desempeño del sector público

Entre 1991 y 1993, con la estabilidad de precios, un menor costo real de la deuda pública en dólares, la ampliación de la base tributaria gracias a la expansión de la actividad económica y de las importaciones, las cuentas fiscales presenta-



ron evidentes señales de mejoría. Los recursos de las privatizaciones también contribuyeron al aumento de los ingresos públicos y a la reducción del déficit, incluso frente a una elevación de los gastos. En 1993 hubo un superávit fiscal de 2.700 millones de dólares, incluyendo los ingresos por privatizaciones. Sin embargo, después de la crisis mexicana estos factores comenzaron a agotarse y las cuentas públicas se tornaron crecientemente negativas: de 1.300 millones de dólares en 1995, 4.000 millones en 1998, 6.800 millones en 2000 y 8.100 millones en 2001. Los ingresos por privatizaciones disminuyeron y el costo de la reforma del sistema de seguridad social, así como los gastos por pagos de intereses deterioraron progresivamente las cuentas públicas.

En junio de 1994, el Gobierno promovió una reforma de pensiones, constituyendo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este esquema fue estructurado en dos pilares. El primero administrado por el Estado, otorgando una pensión mínima. El segundo delegaba a los trabajadores la posibilidad de optar entre un régimen de reparto con beneficio definido y administrado por el

6. Por estabilizar se entiende definir un valor nominal del dólar compatible con las expectativas de inflación y al mismo tiempo, mantener una tasa de cambio real capaz de señalar una reducción sustancial del déficit en transacciones corrientes, sobre todo mediante la obtención de superávit comerciales, reduciendo las necesidades de recursos en moneda extranjera para sostener los compromisos de la balanza de pagos.

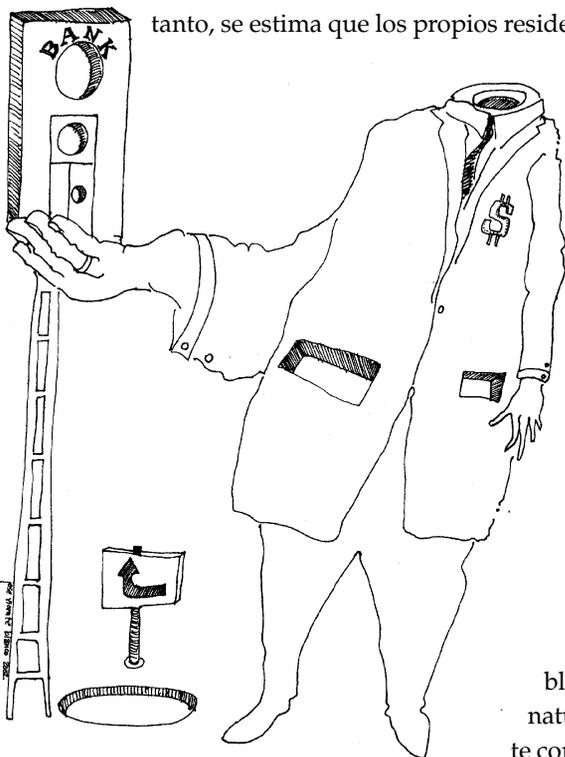
Estado, o un régimen de capitalización individual gestionado por el sector privado, a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esa reforma desencadenó efectos perversos sobre las cuentas públicas, contribuyendo a un déficit creciente. Por un lado, la estructura de gastos de la seguridad social a cargo del Estado mantuvo la tendencia deficitaria, pues la recaudación total tendía a disminuir, dada la caída de los sueldos, el elevado nivel de desempleo, subempleo y empleo informal. Por otro lado, la reforma exigió que el Estado transfiriera a las AFJP las contribuciones correspondientes al sistema de capitalización en torno de 4.300 millones de dólares anuales, entre 1998 y 2000 (Calcagno/Manuelito/Titelman, p. 13).

El monto de la deuda pública total saltó de 97.100 millones de dólares en 1996 a 141.200 millones en septiembre de 2001, representando 54% del PIB. Cerca de 90% del monto de la deuda está denominada en moneda extranjera. Mientras tanto, se estima que los propios residentes poseen alrededor de 60% de la deuda

externa, mediante la compra de bonos locales en el exterior. Diferentes estimaciones indican que los argentinos mantienen en el exterior entre 70.000 millones y 100.000 millones de dólares, variando de 28% a 40% del PIB. En las estadísticas oficiales, apenas los depósitos del sector privado no financiero en el exterior sumaban 24.600 millones de dólares en marzo de 2001⁷.

El pago de intereses, bajo la existencia creciente de esa deuda con tasas de interés cada vez más elevadas, contribuyó decisivamente al aumento del déficit fiscal. La evolución del déficit público incluyó, por lo tanto, un fenómeno de naturaleza monetaria y financiera, ciertamente con graves implicaciones de orden fiscal. El

7. Así, la reestructuración compulsiva de la deuda impondrá pesadas pérdidas a diferentes sectores argentinos. A título de ejemplo, en la operación de canje de deuda de 2001, del total de 29.500 millones de dólares en títulos canjeados, cerca de 21.000 millones estaban en manos de bancos, fondos de pensión o inversionistas que operan en el país.



pago de intereses fue de 2.900 millones de dólares en 1993, alcanzó 4.000 millones de dólares en 1995, 6.600 millones de dólares en 1998 y 9.600 en 2001. Eso representó 5,8% de la tributación corriente en 1993, 8,3% en 1995, 11,8% en 1998, y 18,8% en 2001. El servicio de la deuda correspondió a 10% del gasto público total en 1993, 11,3% en 1995, 14,3% en 1998 y 20,5% en 2000. En fin, el deterioro

El régimen de acumulación argentino, fundado en el anclaje cambiario, fue subordinado por la lógica de los mercados financieros globalizados y líquidos

endógeno de las cuentas explica gran parte del aumento del gasto público al final de la década de los 90, aumentando los temores de los inversionistas extranjeros y nacionales en cuanto a la sustentabilidad del modelo.

El gobierno de De la Rúa efectuó varias tentativas para reducir el déficit fiscal, mediante mudanzas en la estructura tributaria y cortes de gastos. En lo referente a los ingresos, creó el impuesto a las transacciones financieras, con una alícuota de 0,6% sobre movimientos en las cuentas corrientes (con algunas excepciones, como el pago de sueldos y pensiones). Simultáneamente, adoptó un plan de competitividad a fin de apoyar a cerca de 20 sectores, entre los cuales sobresale la actividad agropecuaria, calzado, textiles y confección, construcción civil, bienes de capital, industria automovilística, empresas de turismo, papel y gráfica, productos de madera, industria alimenticia, productos plásticos, transporte de carga, etc. Las tarifas de importaciones de los bienes de consumo fueron aumentadas al máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (35%), las tarifas sobre bienes de capital, fueron reducidas a cero.

Por el lado del gasto, en julio de 2001 se adoptó la ley de Déficit Cero. La norma disponía que, cuando los recursos presupuestarios fuesen insuficientes para cubrir los gastos previstos, «se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, de forma de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios»⁸. Entre los rubros sujetos a cortes estaban los sueldos y el pago de pensiones, pero no los intereses de la deuda. Por lo tanto, se procuraba asegurar el reembolso de los intereses a los acreedores y restaurar la confianza de los mercados financieros internacionales. En ese sentido, fue establecido un corte de 13% de los sueldos y pensiones superiores a 500 pesos.

8. Ministerio de Economía: «Déficit Cero: una política de Estado», Buenos Aires, 2001, <www.mecon.gov.ar/basehome/deficit0.htm>.

Sin embargo, la coyuntura implicó un círculo vicioso de caída en la recaudación, atribuida a la recesión económica, exigiendo nuevos cortes de gastos y aumentos en la tributación para sanear las cuentas, provocando una nueva caída de la recaudación, agravando la desconfianza de los acreedores, aumento en las tasas de interés y del déficit público (Laplane). Ese mecanismo perverso aumentaba el desempleo, deprimía el consumo de las familias, con efectos inmediatos sobre las actividades económicas y las expectativas de las empresas, imponiendo la necesidad de un ajuste fiscal permanente. Así, los paquetes fiscales fueron siendo devorados por la recesión prolongada y el déficit cero parecía un espejismo.

Consideraciones finales

El régimen de acumulación argentino, fundado en el anclaje cambiario, fue subordinado por la lógica de los mercados financieros globalizados y líquidos. El largo periodo de escasez de financiamiento externo privado, característico de los años 80, llegó a su fin al inicio de los 90. Los mercados financieros internacionales, líquidos y no reglamentados, buscaban ávidamente oportunidades de ganancia en plazas consideradas de mayor riesgo. Con la abundancia de capitales líquidos fue posible implementar la regla cambiaria y monetaria bajo la guía del Plan de Convertibilidad (1991). Esa fue la condición indispensable para la utilización de la tasa de cambio como anclaje nominal. El país ofrecía altas tasas de interés y la posibilidad de adquirir activos subvaluados, sobre todo con la perspectiva de ampliación del programa de privatización. Así, los mercados anticiparon la estabilización y sus posibles desdoblamientos, tales como elevada remuneración de las aplicaciones de corto plazo y ganancias de capital provenientes de la revalorización de los activos –públicos y privados– adquiridos por debajo de su precio. Más aún, ese modelo de estabilización con apertura comercial y financiera y liberalización del mercado cambiario fue acompañado de un rápido crecimiento del pasivo externo de la economía. El ciclo de endeudamiento externo, asociado a la expansión del crédito internacional en los años 90, o mejor, la nueva etapa de dependencia del financiamiento externo aumentó considerablemente la vulnerabilidad de la economía argentina frente a un choque externo. Además, el régimen cambiario y las reformas estructurales implementadas coartaron buena parte de la autonomía monetaria y fiscal de las autoridades económicas (Frenkel).

La valorización prolongada del peso provocó decisiones de endeudamiento y de posesión de la riqueza que impidieron ajustes positivos después de la modificación de la política cambiaria. En Brasil, la reestructuración bancaria, inicia-

da en 1995, con elevado costo financiero para la autoridad monetaria, como las expectativas de una modificación de la política cambiaria, en 1999, llevaron a los principales agentes privados a cubrir sus riesgos anticipadamente, y al Banco Central y al Tesoro a asumirlos, acarreado una socialización de las pérdidas. Pero tuvieron como efecto impedir que se produjera una retracción muy acentuada de la actividad económica (Farhi). Esa opción no existió en Argentina en función de la magnitud de la vinculación de activos y pasivos con la moneda norteamericana. Después de la adopción de la fluctuación cambiaria, la tasa de cambio sufrió devaluaciones que fueron más allá de lo necesario para transformar supuestamente el déficit comercial en superávit. Por lo tanto, a pesar del bloqueo de los depósitos y aplicaciones bancarias, hubo una exagerada devaluación (el 25 de marzo de 2002, el dólar alcanzó los 3,9 pesos, una caída de 25,8% en solo un día). Ante las señales y el temor a una explosión inflacionaria –con pasivos externos públicos y privados muy elevados con relación a las reservas–, hubo un desplazamiento de la preferencia por la liquidez del dólar. Aunque la magnitud de tal desplazamiento haya sorprendido, correspondió a un trazo nacional de preferencia de la población argentina por la posesión de divisas, en lugar de la moneda nacional, heredada del periodo de hiperinflación.

Esa elevada desconfianza actual en la moneda nacional encubre una evidente lucha entre el Gobierno, los poseedores de riqueza bloqueados, los exportadores de *commodities* agrícolas y minerales, que no internalizan el producto de sus transacciones, y el FMI, que conjuntamente con el Tesoro norteamericano dificulta la liberación de nuevos recursos en moneda fuerte para el país. Hay una discordancia generalizada en cuanto a la aceptación de una norma general capaz de orientar las pautas de cambio, la fijación de los términos contractuales y la atribución de valor a la riqueza y a los rendimientos. En ese estado de expectativas, la tasa de cambio capaz de recomponer el flujo de las exportaciones y el equilibrio en el mercado de deudas se torna indeterminada.

A finales de marzo de 2002, el Gobierno adoptó más de un conjunto de medidas para aumentar las reservas disponibles en el Banco Central y tratar de ampliar la confianza en la moneda nacional. Las iniciativas consistieron en comprar divisas directamente a los exportadores, restringir las operaciones de redescuento del Banco Central, limitar a 5% del patrimonio la posesión de dólares por parte de las instituciones bancarias, y ampliar las opciones para realizar aplicaciones financieras en peso. Pero en el estado actual de crisis crear condiciones mínimas de previsibilidad sobre la tasa de cambio exigiría un inmediato aporte de recursos internacionales del FMI.

La implementación de políticas alternativas pasan por la recuperación de un mínimo de consenso político y por un aporte de capitales externos para procurar recobrar la confianza del público en el sistema de pagos. En efecto, las medidas adoptadas en función de la escasez de divisas funcionan, en la práctica, como una centralización del cambio; el bloqueo de los depósitos y aplicaciones bancarias le permite al Gobierno un alto grado de control del dinero, roto apenas por las decisiones judiciales favorables a los depositantes. Pero la insuficiencia de reservas continúa frente a las presiones de los acreedores y del conjunto de la población temerosa de una nueva hiperinflación. Fuera de la adopción de una nueva convertibilidad en más elevados niveles de cambio, para buscar relanzar el proceso anterior y ganar tiempo, o la plena dolarización de la economía, se torna difícil imaginar nuevas medidas económicas que puedan responder, por lo menos en parte, a esas presiones conflictivas sin un mínimo de consenso político.

Fuentes y referencias

- Banco Central de la República Argentina.
- Batista Jr., Paulo Nogueira: «Dolarização: significado a conseqüências» en Batista Jr., PN. (ed.): *A economia como ela é ...*, Boitempo Editorial, San Pablo, 2000, pp. 277-299.
- Belluzzo, Luiz Gonzaga de Mello: «A perversa 'desalavancagem' argentina» en *Valor Económico*, 16/8/2001, San Pablo, p. A11.
- Calcagno, Alfredo; Sandra Manuelito y Daniel Titelman: «La convertibilidad en Argentina: lecciones de una experiencia», 2001, mimeo.
- Cintra, Marcos Antônio Macedo y Elza Moreira Marcelino de Castro: «Internacionalización del sector financiero y dolarización de los países latinoamericanos» en *Nueva Sociedad* N° 172, 3-4/2001, Caracas, pp. 85-103.
- Farhi, Maryse: «Derivativos financeiros no Brasil: ataques especulativos a crises cambiais» en *Revista Economia a Sociedade*, IE/Unicamp, Campinas, 2001, en prensa.
- Frenkel, Roberto: «Las políticas macroeconómicas en la tercera década de la globalización financiera», trabajo preparado para el seminario «La teoría del desarrollo en los albores del siglo xxi», Cepal, Santiago, 28-29 de agosto de 2001.
- Laplane, Mariano E: «Argentina: reconstrução econômica e democracia» en *Indicadores Diesp* N° 88, Fundap, San Pablo, 2002.
- Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Buenos Aires, <www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales>.
- Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Buenos Aires.
- Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Dirección de Gastos Sociales Consolidados, Buenos Aires.
- Ministerio de Economía: *Informaciones Económicas*, <www.mecon.gov.ar/informe>.
- Schvarzer, Jorge: «El fracaso histórico de la convertibilidad. Argentina en la década del 90», 2002, mimeo.

Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto

Sin rumbo, la sociedad argentina continúa inmersa en un proceso de desorganización sin pautas para la reconstitución de un orden, y en consecuencia sin que sea posible avizorar una salida. La desconfianza en las instituciones económicas y políticas se ha generalizado, dando cauce a diferentes fugas: en primer lugar de la moneda, favoreciendo la corrida hacia el dólar como valor refugio y amenazando con desencadenar un proceso hiperinflacionario; del sistema bancario, que ya no es considerado confiable para efectuar las transacciones; del propio país, que es abandonado en los hechos o en la imaginación por miles de personas de toda edad y condición, aglomeradas en las puertas de los consulados. La desconfianza entre las personas se ha profundizado luego de los recurrentes saqueos, de modo tal que el miedo y la inseguridad son también un factor de disgregación social.

Isidoro Cheresky

El Gobierno no logra reconstituir su autoridad en la medida en que su legitimidad de origen está cuestionada¹, a ello se suma que en su desempeño se ha enredado en una maraña de decisiones que multiplican la fragmentación y los intereses en pugna. Hacia fines de diciembre de 2001, aún bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, el congelamiento de los depósitos bancarios fue el dis-

Isidoro Cheresky: politólogo argentino; profesor de Teoría Política Contemporánea, Universidad de Buenos Aires; miembro de la Fundación Carlos Auyero.

Palabras clave: crisis, sistema político, cultura política, Argentina.

parador de una situación de excepcionalidad en que los derechos consagrados se suspendían (algunas formas del derecho de propiedad) y la suerte al menos patrimonial de los individuos se supeditaba a las decisiones circunstanciales de gobernantes y jueces. Poco después, la declaración del *default* (la cancelación del pago de la deuda pública) generó una situación de aislamiento internacional. Finalmente el abandono de la convertibilidad y la consiguiente devaluación y pesificación de la economía, generaron una multiplicidad de situaciones que debían ser arbitradas, en particular el valor en pesos de los depósitos congelados, de las deudas contraídas con los bancos y con prestamistas privados, la adecuación de los contratos de alquiler y otros compromisos contractuales. En la medida en que caía verticalmente la recaudación impositiva y se agravaba la situación social por pérdida del valor real de los salarios y del incremento de la desocupación, se planteaba la alternativa de cobrar impuestos excepcionales (a las exportaciones y a los grandes beneficiarios de la pesificación de deudas; en un momento se proyectó un impuesto a las empresas privatizadas que habían obtenido grandes ganancias en los años 90, pero debió ser abandonado por las trabas legales y la fuerza de los intereses en juego) y controlar los precios máximos de los alimentos de la canasta familiar. Cuando la flotación libre del peso produjo una repentina y espectacular «corrida» hacia el dólar, la idea de una mayor intervención gubernamental que aventara el inminente peligro de hiperinflación se hizo más intensa.

Podrían por supuesto enfatizarse las dimensiones estructurales que hacen que la Argentina esté atravesando un verdadero derrumbe, debacle o bancarrota general –según el modo en que diferentes analistas han definido la situación.

1. El actual presidente Eduardo Duhalde goza de una autoridad precaria, derivada del origen indirecto (aunque institucional) de su mandato y del desapego de los ciudadanos por la representación política. El 1º de enero de 2002 fue elegido por la Asamblea Legislativa, que votando por un peronista daba cuenta de la mayoría parlamentaria existente. El acceso de Duhalde se produjo luego de una serie de percances institucionales. El 20 de diciembre había renunciado De la Rúa y el sucesor designado por la Asamblea Legislativa fue el gobernador peronista de San Luis, Adolfo Rodríguez Sáa (en razón de la vacancia en la vicepresidencia producida en octubre de 2001 luego de la espectacular renuncia del titular de ese cargo, Carlos Chacho Alvarez, que había marcado el estallido de la coalición gobernante). Pese a que la mayoría peronista había tenido la intención de designar un mandatario para la convocatoria a elecciones en el lapso de tres meses, Rodríguez Sáa, apoyado por los gobernadores peronistas de las provincias menores, permaneció sólo una semana en el poder. Dimitió por la doble presión del aislamiento en el seno de su partido, donde se sospechaba que querría quedarse en el poder por el lapso presidencial faltante (hasta octubre de 2003) y de la sociedad movilizadora que encontró en la composición de su gabinete otro blanco para repudiar la corrupción de los políticos. Recién entonces se pensó en Duhalde, quien aunque había triunfado en las elecciones senatoriales de octubre por la provincia de Buenos Aires, no contaba con consenso ni liderazgo partidario –al punto de haber estado al margen de las deliberaciones que se produjeron luego de la renuncia de De la Rúa. Duhalde llegó a la presidencia cuando los mecanismos institucionales habían puesto en evidencia el fraccionamiento político existente.

De hecho, la recuperación de la senda del crecimiento, la reanudación de los lazos de comercio e inversión con el mundo, y en consecuencia la superación de la decadencia social expresada en índices inéditos de desempleo y pobreza parecen inciertos. En todos estos aspectos la caída continúa². Pero lo que denota quizás más la gravedad de la situación es la profunda desorganización de la representación política y de los lazos sociales. La vida pública ha estado dominada desde diciembre último por la irrupción social bajo las formas separadas del saqueo y de la protesta urbana masiva. Los saqueos a supermercados pero también a una variedad de comercios barriales transformaron algunos vecindarios en tierra de nadie, poniendo en el tapete la fuerza destructiva que acarrea ese condicionamiento antipolítico de la vida humana que es la irrupción de la necesidad. Por otra parte una inédita y heterogénea movilización urbana colocó a la protesta ante el Gobierno y las instituciones como un factor permanente de interpelación a la legitimidad política. El cacerolazo dio la tónica de una situación en que los lazos de representación estaba profundamente cuestionados.

En conjunto la situación social ha visto constituirse dos escenas, en un caso con actores públicos sorprendentes desde el punto de vista de los conocidos hasta ahora, teniendo como protagonistas a los pobres y a las «clases medias». Sin embargo, cabe preguntarse si es satisfactorio denominar estas nuevas presencias con rótulos heredados. En medio de la diversidad de elementos que configuran la actual situación y que inhiben un diagnóstico general certero así como predicciones sobre la evolución futura, los rasgos que ponen en evidencia la naturaleza política de los problemas remiten a la debilidad de las creencias colectivas o a la desconfianza generalizada, por una parte, y a la inestabilidad de los poderes públicos y del propio presidente que en conjunto no gozan de autoridad reconocida, por la otra. Las decisiones generales y la adopción de un plan de Gobierno coherente tropiezan con la licuación de poder, que lleva a oscila-

2. Con la salvedad de las exportaciones que sin embargo están también trabadas como consecuencia de la actual situación. La inflación y la recesión tienen efectos demoledores sobre los sectores populares. Dada la diferencia de consumos, la incidencia de la inflación si se mantienen los índices actuales sería de 71,5 % para los más pobres y de 28,4% para los más ricos. De este modo, 58% de los argentinos quedaría debajo de la línea de pobreza (Informe de la consultora Equis citado en *La Nación*, 11/3/02). Según las estimaciones del Indec, en mayo de 2001 estaban debajo de la línea de pobreza 13.700.000 personas, 38,1% de la población. No solo la creciente desocupación, que según estimaciones de 2001 habría sido superior a 22%, incide en esos índices de pobreza. La propia remuneración del trabajo también ha declinado en el periodo en parte próspero de los años 90: entre 1994 y fines de 2000 el ingreso medio de los hogares se redujo 4,3%, que desciende a 11% en el caso del estrato bajo (40% de los hogares con ingreso más bajo) y a 8% para el estrato medio; cf. M. Marcó del Pont y H.M. Valle: «La crisis social de los 90 y el modelo de convertibilidad» en Marcelo R. Lascano (comp.): *La economía argentina hoy*, El Ateneo, Buenos Aires, 2001. Sin embargo las conclusiones de este último análisis han sido objeto de controversia.

ciones en las decisiones que se adoptan y a que se definan centros de poder alternativos con una parcial eficacia en su acción y que en conjunto dibujen una situación de caos. Los decretos del Ejecutivo, las leyes dictadas por el Parlamento y la interpretación que los jueces dan a los derechos constitucionales son ejemplos de la diversidad de centros decisionales, a lo que deben agregarse los poderes provinciales que gozan de considerable autonomía.

Un factor decisivo en el condicionamiento de la vida política lo constituye a su vez la intervención del FMI y de otros poderes externos o internacionales, que encarnan la orientación pautada por los principales centros de poder, en primer lugar Estados Unidos. El futuro económico y político del país parece depender de una asistencia externa desde que se declaró el *default* y toda otra fuente de inversión o de crédito parece vedada o restringida³. El país se encuentra entonces bajo tutela y debe orientar sus decisiones según un plan definido por los expertos extranjeros⁴. Así, en aspectos esenciales el margen de la decisión política democrática ha desaparecido, y esta situación de extrema dependencia es exhibida y manipulada en la relación entre los actores intervinientes sin ningún tapujo. Pero paradójicamente esta dependencia tiene un efecto ordenador. Voluntariamente o a regañadientes las diferentes posiciones e intereses se alinean y aceptan la agenda de temas y restricciones provenientes de los organismos internacionales en la expectativa de que su visto bueno llegue en algún momento y con él las líneas de crédito y el mejoramiento de los intercambios. Por el momento la reacción nacionalista está acallada y aunque una parte de la población adheriría a políticas aislacionistas, la protesta pública en este respecto es limitada⁵.

***En aspectos
esenciales el
margen de
la decisión
política
democrática
ha desaparecido***

3. Un índice de riesgo país superior a los 4.000 puntos ilustra la marginación de los mercados financieros; una marca que por otra parte ha dejado de estar en el centro de la atención puesto que la situación permanente ya no puede ser afectada por variaciones circunstanciales.

4. Rudiger Dornbusch, en una nota escrita en colaboración, sostuvo recientemente que para salir adelante la Argentina debería ceder temporalmente su soberanía, y en particular su política monetaria debería estar controlada por un equipo de representantes de bancos centrales extranjeros. Esta recomendación, que unas semanas atrás fue considerada como una provocación, parece ser la pauta actual.

5. La eventual ayuda externa es uno de los puntos en que la opinión pública se muestra más dividida. Según una encuesta reciente, 54% de los entrevistados considera que el país necesita ayuda externa en tanto que 42% piensa que puede salir solo de la crisis (encuesta de Gallup de 4-8/4/2002, en *La Nación*, 14/4/02). Según otra encuesta hecha en Buenos Aires y alrededores, 451 responde afirmativamente a la pregunta «¿Tendría que venir un grupo internacional que asesore, controle o ejerza tareas de gobierno?» (Ibope-OPSM, *Página 12*, 31/3/02). También en Buenos Aires y alrededores, aunque 53% de los entrevistados se manifestaba de acuerdo con negociar con el FMI contra 37% de opiniones negativas, la tendencia estatista era fuerte: 41% por la nacionalización de la banca contra 39% en desacuerdo; 65% por la reestatización de las empresas públicas privatizadas contra

Pero la posibilidad de que no haya una ayuda internacional significativa que coadyuve a frenar la caída de la economía⁶ es real, y abre un interrogante sobre las reacciones que podrían producirse en tal extremo.

La gravedad de la situación hace más apremiante la pregunta sobre la naturaleza de su debate. Precisar un diagnóstico permitiría pensar en el camino de la recuperación. Hay una coincidencia en considerar el problema argentino como de naturaleza política, lo cual es tanto más llamativo cuanto que es evidente la gravedad de su situación económica estructural⁷. Y sin embargo, efectivamente el problema parece ser el de la capacidad para fijar un rumbo y hacer converger las energías nacionales en esa misma dirección, lo que se traduce, desde la óptica de las instituciones políticas, en una búsqueda de autoridad del Gobierno y del Estado, y desde el punto de vista de la sociedad en requerimiento de creencia y confianza en el lazo social, en los acuerdos básicos y en los liderazgos legales. Este diagnóstico va a contracorriente de la tradicional explicación sobre el origen de las crisis y aun de ciertas evidencias presentes. ¿No hay un causante y un beneficiario de los males argentinos? Y más precisamente, ¿no hay un agente social en el origen de los males? Aunque el capitalismo y la globalización son mencionados recurrentemente, esta imputación está lejos de tener la verosimilitud y fuerza del pasado.

La terrible sensación que predomina, no desmentida por la información disponible, es que la bancarrota no es algo que vaya en provecho de ningún sector social particular, al menos de los concernidos directamente, aunque las consecuencias sean muy diferentes para unos y otros. Ello es así porque las lógicas del capitalismo financiero que han contribuido al endeudamiento del país y a la obtención de beneficios son exactamente lógicas, es decir que benefician a los ocasionales tenedores de títulos y otros papeles financieros que pasan de mano en mano, pero no se trata de agentes definidos y permanentes que determinen y aprovechen los beneficios. Es más, el mundo de las finanzas genera perdedores tanto entre los grandes como entre los pequeños participantes del mercado. Por supuesto está el amplio y creciente ámbito de quienes están fuera

26% en contra; la intención mayoritaria era de no dar la espalda al mundo: 60% en contra de no pagar más la deuda externa, frente a 34% con la opinión contraria (Hugo Haime y Asociados, *Página 12*, 24/3/02).

6. El PBI ha venido cayendo en los últimos cuatro años, para 2002 se prevé una depresión mayor que en el pasado, con un descenso que varía entre 7,5% según las previsiones oficiales y más de 10% según economistas reconocidos.

7. A1 momento de declararse en cesación de pagos, Argentina tenía una deuda externa equivalente a la mitad de su PBI. Este peso se había hecho abrumador dado el estancamiento y luego el retroceso económico. El gasto fiscal y la evasión impositiva eran factores que acentuaban el carácter deudor y deficitario de la economía. La espiral de descrédito no hacía sino agravar la situación.

del juego. Pero en lo que a este aspecto del análisis se refiere, la ausencia de agentes permanentes de la globalización y del capitalismo financiero acentúa un cambio de perspectiva y las miradas se dirigen a los responsables políticos, a los gobernantes y a los técnicos que los auxilian, que en su conjunto son quienes toman las decisiones y embarcan al país en tal o cual dirección. En ese sentido hay, como veremos, una politización, pero al mismo tiempo un sentimiento de impotencia pues ya no se trata de los responsables y menos aún de los enemigos sustanciales del pasado.

El argumento que aquí se desarrolla pone el acento en la posibilidad de reconstituir el lazo de representación política y la autoridad institucional, y recuperar un margen de soberanía que dé lugar a una deliberación y decisión democrática. Definir cuáles

son las posibilidades y los límites de semejante cambio requiere prestar atención a ciertos factores: los relacionados con la debilidad del Estado, con las transformaciones sociales que han modificado la configuración de intereses y actores emergentes, y con los cambios en la vida pública y por lo tanto en las nuevas condiciones para la constitución de fuerzas políticas y liderazgos.

El Estado argentino está cuestionado y desacreditado, pero la aspiración mayoritaria es que sea rehabilitado

La debilidad del Estado y los problemas de su reforma

El Estado argentino está cuestionado y desacreditado, pero la aspiración mayoritaria es que sea rehabilitado. Su ineficacia favoreció en los años 90 un proceso privatizador que según sus gestores aliviaría las cuentas públicas y eliminaría focos de corrupción. Hoy esa experiencia es fuertemente impugnada por la debilidad en el control público de la provisión de bienes sociales básicos. Las críticas a la clase política y la desconfianza en las instituciones políticas son ilustrativas de esta situación. La sospecha de corrupción, confirmada por los procesos judiciales relativos a los grandes negociados⁸, han dado sustento a la percepción de que el acceso al poder conduce al uso arbitrario de los fondos públicos y al tráfico de influencias.

Pero la debilidad del Estado no se remite solo a los actos de corrupción. Las fuentes son estructurales y residen en el modo en que cumple sus funciones distri-

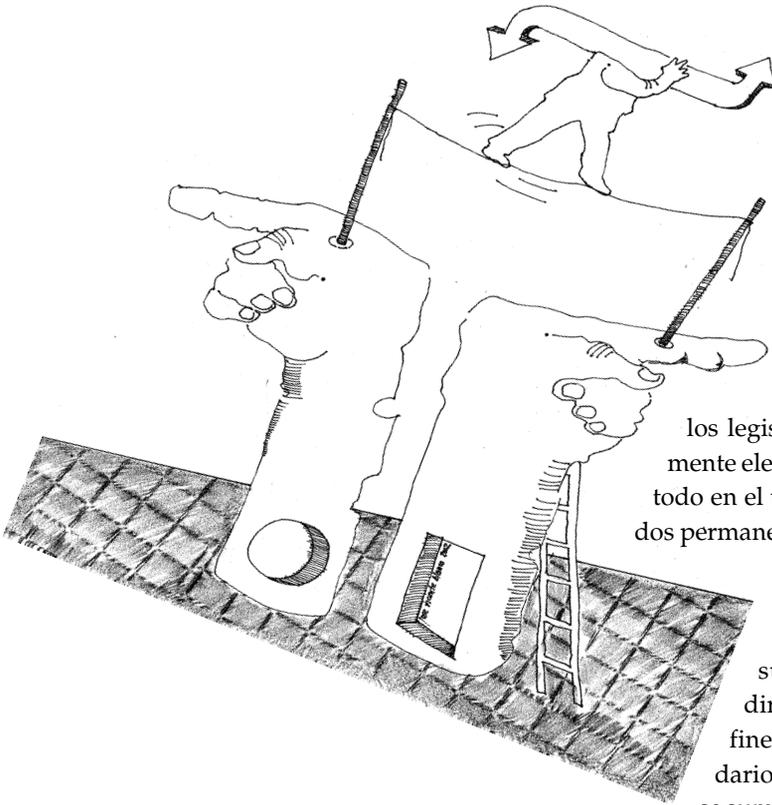
8. El más resonante que ha implicado al ex-presidente Menem y varios de sus ministros es el de tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. Pero ha habido otros procesos judiciales vinculados con el lavado de dinero a los contratos de informatización entre IBM y Banco Nación y Ministerio de Hacienda.

butivas. Estos dispositivos son limitados, pero a través del empleo y de las obras públicas, y de las políticas sociales el Estado ha desarrollado un sucedáneo del Estado benefactor. La red político-administrativa y las estructuras de los principales partidos canalizan los recursos públicos y procuran incrementarlos, puesto que su vínculo social y su propia estructura se sostiene en esa circulación. Pero esta distribución se hace según criterios particularistas. No se ha establecido una política de derechos sociales o de algún otro criterio universalista que coloque a los individuos en pie de igualdad ante los recursos públicos sino que la atribución de éstos devienen favores como resultado de vínculos clientelares. Los recursos y particularmente la ayuda social generan de ese modo al mismo tiempo opresión política⁹. El funcionamiento dispendioso del Estado ha sido siempre de tratamiento problemático; pareciera que cuestionarlo supondría preguntarse por el principio redistributivo mismo propiciando la inacción pública ante las desigualdades sociales¹⁰.

La debilidad del Estado se expresa en primer lugar en su incapacidad de recaudar impuestos. Luego de la crisis de fines de diciembre la caída de la recaudación ha revestido las características de una rebelión fiscal, y es la contrapartida del descontento ciudadano al congelamiento de sus ahorros y a la poca representatividad del actual gobierno. Sin embargo, en condiciones normales la evasión impositiva es de tal magnitud que, según expertos, un cumplimiento razonable hubiese sido suficiente para afrontar el endeudamiento externo. La evasión fiscal es el síntoma de una situación social de considerable amplitud. Quienes la protagonizan son parte de los grandes empresarios pero también amplios sectores medios y altos integrados también por profesionales y funcionarios. Este comportamiento social ilustra la baja incumbencia por la suerte de lo público y una resistencia de hecho a las políticas redistributivas. La creciente debilidad del Estado contrasta con una evolución de la opinión pública, favorable a la intervención reguladora del Estado.

9. Esta forma de «intercambio político» se extiende a todo el sistema incluyendo las organizaciones de signo revolucionario. Lo ilustran los propósitos de Amancy Ardura, dirigente de la Corriente Clasista Combativa, que enuncia sin pruritos los criterios con los cuales se distribuye el subsidio estatal (Planes Trabajar) que administra su organización. Según relata, se emplea un sistema de puntaje para seleccionar los beneficiarios del plan: «La persona que va a una asamblea tiene un punto, el que va a una movilización, otro, y el que participa en un corte de ruta se suma otro. Los compañeros están en un listado y en el caso que hablamos los primeros 50 de la lista reciben la bolsa ... El sistema tiende a ser justo y solidario» (entrevista en *La Nación*, 3/3/02).

10. Ha surgido un velo de opacidad en cuanto al empleo de estos recursos y se ha inhibido la discusión sobre la aptitud de las políticas sociales para estimular la inserción social. La reforma de un Estado macrocefálico e ineficiente, sobre todo en el interior del país, es problemática porque pone en juego situaciones sociales que no pueden ser resueltas de manera precipitada. La reforma y la consiguiente reducción, calificación y modernización de su personal no puede encararse sin una política de desarrollo que asegure otras fuentes de empleo y otros recursos para la ayuda social. Este es uno de los puntos críticos de las actuales negociaciones con el FMI.



Por último, la propia representación política es objeto de crítica, que se ha concentrado en la denuncia del gasto político. La crítica se funda en que en algunos casos las retribuciones de los legisladores son inusualmente elevadas, pero por sobre todo en el uso arbitrario de fondos permanentes o excepcionales, destinados a costear numeroso personal legislativo, conceder subsidios de manera directa, o utilizarlos con fines personales o partidarios. A este descontento se suma el concerniente a las estructuras partidarias, que

con el actual sistema electoral presentan opciones cerradas, de voto a ciegas, al utilizarse el sistema de listas sábanas, lo que ha debilitado la imagen del legislador como representante instituido. En última instancia la significación de la actividad política en sí misma parece problemática –y esto sería lo esencial. Tras los cuestionamientos –fundados en muchos de los casos– se encierra en algunos sectores la vocación de reducir la política a su mínima expresión: una concepción antipolítica ve en esas instituciones una traba para la espontaneidad de la actividad social y en particular de los mercados. Pero si esta embestida tiene predicamento es porque incluso quienes son favorables al fortalecimiento de los instrumentos públicos se sienten impotentes ante su descrédito.

Las transformaciones económico-sociales y el nuevo individualismo. Los nuevos protagonistas sociales

El nuevo individualismo. La modernización del Estado y la economía emprendida en los años 90 profundizó rasgos propios de la evolución mundial. El crecimiento económico, particularmente en la primera mitad de la década, no aparejó

una mayor integración social sino que incrementó los índices de desocupación y de pobreza. Asimismo las desigualdades regionales se acentuaron. A la exclusión correspondía también una gran transformación en el mundo del trabajo: la precariedad, la inestabilidad y desreglamentación resultante tanto de transformaciones productivas como de cambios jurídicos implicaron un debilitamiento de la protección tradicional a los trabajadores. Paralelamente se impulsaron

Una intensa mercantilización produjo una transformación social vertiginosa que llevó a los individuos de una lógica ciudadana a una patrimonialista

cambios en la relación del Estado a instituciones públicas con la sociedad, tendientes a reforzar el paradigma individualista del capitalismo norteamericano, en detrimento de los lazos mutualistas y de la responsabilidad estatal. El impulso al sistema de capitalización privada como alternativa a la jubilación por el sistema de reparto, la expansión de la cobertura de salud por el sistema llamada de «prepagas» como sustituto de las obras sociales sindicales e institucionales, y los seguros contra accidentes de trabajo, se cuentan entre las principales transformaciones asociadas con la idea de una electividad y riesgo individual, en lugar de la participación en la previsión pública solidaria. Por otro lado, quizá con más intensidad que en otras latitudes se expandió, al menos en parte de la sociedad, una lógica de ahorro e inversión que incitaba a la permanente valorización de los patrimonios¹¹.

De modo que en Argentina una intensa mercantilización produjo una transformación social vertiginosa que llevó a los individuos de una lógica ciudadana a una patrimonialista. Los amplios sectores que fueron involucrados en este proceso cobijaron la expansión del nuevo individualismo pero asimismo una específica disociación y, en ciertos casos, tensión entre su condición social «tradicional» derivada del trabajo y su condición de ahorrista o inversor involucrado en los vaivenes del mercado financiero.

Los nuevos actores sociales. Los recientes acontecimientos vieron aparecer protagonistas inéditos, resistentes a ser designados con los nombres heredados del contexto social tradicional, que han ocupado el centro de la escena. Los participantes de los piquetes, de cortes de ruta y de saqueos, aunque no sean las mismas personas físicas, remiten al mundo de la pobreza y la exclusión, en tanto

11. La mencionada congelación de los depósitos bancarios afectó a 1.800.000 ahorristas, con 41.000 millones de dólares en plazos fijos bancarios. Esta cifra indica la magnitud de la población involucrada en el ahorro y la inversión.

que los «caceroleros» y vecinos de las asambleas barriales son clasificados como miembros de las «clases medias». Esta última designación en particular parece problemática. Está asociada a contextos conceptuales variados¹², pero sobre todo rememora el análisis en términos clasistas según el cual se trataría de una categoría residual respecto a las clases principales: la burguesía y la clase obrera. Cuando en un afán por delimitar la extendida movilización social de fines de diciembre pero cuyas trazas remontan a un periodo anterior, se hace referencia a «las clases medias», y se quiere delimitar una condición social a fin de explicar las características de la movilización social. En efecto, este recurso a la sociología parecería coherente en la medida en que la arena pública ha visto emerger al mismo tiempo acciones originadas en un protagonista designado socialmente como pobres o excluidos. Pero la pertinencia de la clasificación plantea la duda de si es posible reconocer esa presencia o esperar el surgimiento de las clases fundamentales que pondrían a esas «clases medias» en su lugar residual. Parece más fundado considerar que los caceroleros y los participantes de las asambleas barriales exteriorizan una nueva movilización social constituida en torno de identificaciones colectivas que comportan ideales, y que aunque no son ajenas a intereses dependen más que nunca de una producción pública de sentido; de manera que no expresan ninguna condición social preexistente a la movilización. Si se la quisiera identificar según términos sociales tradicionales se vería que está compuesta de asalariados y de propietarios de variada talla, pero debería tenerse en cuenta la propia precariedad y significación de esta distinción. Y en lo que hace a los asalariados discriminar su pertenencia a la clase obrera o a las tradicionales clases medias, supondría una tarea ímprobada dado que los trabajadores de la industria ya no son tan frecuentemente los «manuales» y otros asalariados no industriales han perdido el nivel de ingresos superior y el reconocimiento social de los «white colars».

Incluso el protagonista popular es también de nuevo cuño. El modo de constitución y al mismo tiempo de expresión de los excluidos es la protesta para paliar su situación. Los cortes de ruta denotan un modo de acción, con riesgos variados de derivación violenta, que está destinado a presionar sobre las autoridades por medio de una perturbación del orden. El recurso del excluido es recuperar significación de este modo: el bloqueo. Sin embargo, la organización de este espacio social parece ser extremadamente dificultosa. El individualismo y la relegación provenientes del apartamiento del trabajo y de otros víncu-

12. Por ejemplo en la sociología norteamericana de los años 50 fue objeto de gran atención, como también en los estudios de desarrollo y de sociología política de hace varias décadas dedicados a América Latina.

los sociales parecen ser parcialmente sobrellevados cuando intervienen grupos partidarios o sindicales externos que cumplen una función estructurante y dirigente. Estas formas de organización para la acción y de contención parecen ser inestables y estar sometidas a flujos significativos. Los saqueos que tuvieron su momento culminante a fines de diciembre de 2001 y contribuyeron al desorden y la protesta que provocó la caída de De la Rúa son una expresión de la significación y naturaleza de la esfera en expansión de quienes están apremiados por necesidades vitales. Existe ahí un poderoso potencial antipolítico y aun de disgregación de los lazos sociales. La exclusión puede amalgamar individuos que estando confinados en sus lugares de habitación, tienen potencialidad para movilizarse en direcciones de lo más variadas en búsqueda de satisfacción a sus necesidades apremiantes. Las asociaciones de desocupados y los piqueteros deben probablemente su éxito no a la envergadura de la representación efectiva que ejercen, pues parecen abarcar una minoría de ese sector, ni a la magnitud de sus concentraciones, sino a la representación virtual que comporta su acción. En otras palabras, buena parte de la sociedad sensibilizada por la magnitud de la situación social impone y se autoimpone respeto ante muy variadas expresiones de protesta provenientes de los excluidos¹³. La represión a estas manifestaciones por los gobiernos es sumamente limitada y prudente en razón de esa sensibilidad y tolerancia colectivas.

Los protagonistas sociales novedosos corresponden a una sociedad dominada por el individualismo y la fragmentación. Si la lógica de constitución de identidades colectivas se sustentaba en gran medida en pertenencias sociales y culturales intermedias que servían de tránsito hacia la representación política, ahora el relacionamiento de individuos o de grupos de interés y demandas está de algún modo provocado o incluso instituido por la acción gubernamental y política, y requieren también más directamente de una respuesta institucional. Ello paradójicamente sucede mientras la representación política y la legitimidad gubernamental están profundamente cuestionadas. Lo cierto es que los

13. Después de un periodo de frecuentes cortes de ruta y paros nacionales, en agosto de 2001 las encuestas revelaban que una mayoría se manifestaba en contra del corte de rutas: 62% contra 42%, a favor. Asimismo los paros generales eran rechazados por la mayoría: 71% (encuesta Gallup, en *La Nación*, 3/8/01). Sin embargo los paros fueron exitosos. Ello no puede atribuirse simplemente a la ausencia de transporte. Puede considerarse en cambio que aunque reticente al paro, la mayoría carecía de una motivación política o cívica para pronunciarse activamente en contra. Según una reciente encuesta nacional de Gallup, hay una adhesión variable a las protestas: 77% está de acuerdo con las reuniones vecinales, 70% con el cacerolazo, y 40% con los cortes de ruta (*La Nación*, 15/4/02). Una reciente encuesta es ilustrativa de las preferencias ciudadanas; ante la pregunta sobre la forma como deben expresarse las protestas, el orden de respuesta es el siguiente: mediante el voto, 42,9%; cacerolazo, 23,9%; participar en asambleas, 23,4%; huelgas y paros generales, 4,7%; piquetes y cortes de ruta, 1,7% (Hugo Haime y Asociados, *Página 12*, 10/3/02).

desocupados reclaman ante el Gobierno, y sus formas de reclamo y organización son tributarias de las leyes y políticas sociales. En cuanto a la protesta de las cacerolas, su movilización de rechazo se produce como reacción a las iniciativas estatales a la vez que despliega demandas fragmentadas y puntuales y en algunos casos contradictorias entre sí, que no podrán adquirir coherencia y en buena medida ser superadas si no es por una iniciativa de orden general que aparezca como justa, tarea que supone actuación y revalidación de una representación política.

Transformaciones en la vida pública. Las condiciones políticas para la emergencia de nuevos actores

La nueva ciudadanía. Por cierto la experiencia pública de los últimos años ha incidido en el descrédito de los políticos y de la política. Respecto a ésta, se ha desarrollado un sentimiento de impotencia, no se espera de los gobiernos cambios significativos ni se ve en el Estado la capacidad de dotarse de una voluntad capaz de contrarrestar los condicionamientos del sistema económico globalizado ni de los poderes fácticos locales. La experiencia de modernización de los años 90 que trajo inicialmente estabilidad y crecimiento no fue confrontada en ese entonces por alternativas críticas verosímiles. El «pensamiento único» se impuso entre los principales líderes políticos, de modo que la actual revisión crítica sobre rasgos salientes de la política de entonces alimenta el rechazo y el escepticismo. Una parte del común parece reprochar a los políticos, en particular a los opositores de entonces, no haber advertido a tiempo las consecuencias de esas políticas. Al mismo tiempo el incumplimiento de las promesas es otra fuente de descrédito, esta vez más orientada a los líderes y las alianzas políticas. Aunque lejano, el abandono de las promesas distribucionistas con las que Menem llegó al poder alimentó siempre un malestar en el seno del electorado peronista, aunque tardó en adquirir alcance público. La erosión constante del electorado peronista tradicional y la secularización del voto popular pueden sin embargo ser consideradas como expresión de la decepción ante los incumplimientos de las promesas. La decepción más reciente y de talla fue la provocada por el gobierno de la Alianza que no cumplió ni las promesas latentes de mayor justicia social ni las más explícitas de moralización de la vida política. Estas frustraciones han contribuido, junto a los cambios sociológicos apuntados anteriormente, a una transformación de los actores políticos y del electorado. La construcción de la democracia argentina contemporánea emprendida en 1983 comportó una evolución desde la referencia a un sujeto popular unificado como característica del periodo populista, a la conformación de una ciudadanía portadora de derechos, con una relación menos comprometida y pa-

sional con la vida pública pero a la vez más electiva¹⁴. En los 90 los procesos electorales y la ciudadanía se afirmaron como la fuente de legitimidad política y el recurso de regulación de la vida pública por excelencia. Cuando Menem tomó la iniciativa de postularse para un tercer periodo presidencial consecutivo, contrariando la Constitución, cuya reforma había propulsado, se desencadenó una lucha política que involucró a la oposición de entonces y dividió al propio peronismo. Pero los recursos institucionales de Menem fueron contrarrestados por el peso del consenso negativo de la opinión pública, por la amenaza de plebiscitos ciudadanos y por los resultados en las elecciones internas partidarias.

La ciudadanía aunque poco movilizada en los términos tradicionales, ocupaba, tanto en su figuración como estado de la opinión y como fuente electoral de legitimidad, el centro de la escena desplazando los recursos del pasado. Esto fue particularmente notorio en el peronismo, tradicionalmente propenso a hacer pesar los liderazgos y aparatos, o a poner en juego la movilización de masas como modos de resolución de los conflictos. Las elecciones de 1999 mostraron también de un modo indudable y a escala nacional la nueva autonomía ciudadana y su relación crecientemente electiva con los partidos y las candidaturas. La oleada antimennemista llevó a la presidencia al candidato de la Alianza que resultó triunfante en 22 de los 24 distritos, pero los candidatos a gobernadores de la coalición triunfante solo ganaron en 8, lo que sugiere la cantidad de electores que votaron por partidos diferentes según el nivel de representación que se disputaba¹⁵.

Pero casi dos años después, luego que las esperanzas puestas en la Alianza se vieron frustradas, las elecciones nacionales de renovación legislativa mostraron una fisura en la relación de la ciudadanía con la oferta electoral que sería el primer signo ostensible de la crisis de representación. En efecto, en octubre de 2001, más de 4 ciudadanos sobre 10 no concurrieron a las urnas, o lo hicieron expresando rechazo al votar en blanco o anulando el voto¹⁶. Los principales

14. V. al respecto I. Cheresky: «Hipótesis sobre la ciudadanía argentina contemporánea» en I. Cheresky e I. Pousadela (eds.): *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*, Paidós, Buenos Aires, 2001.

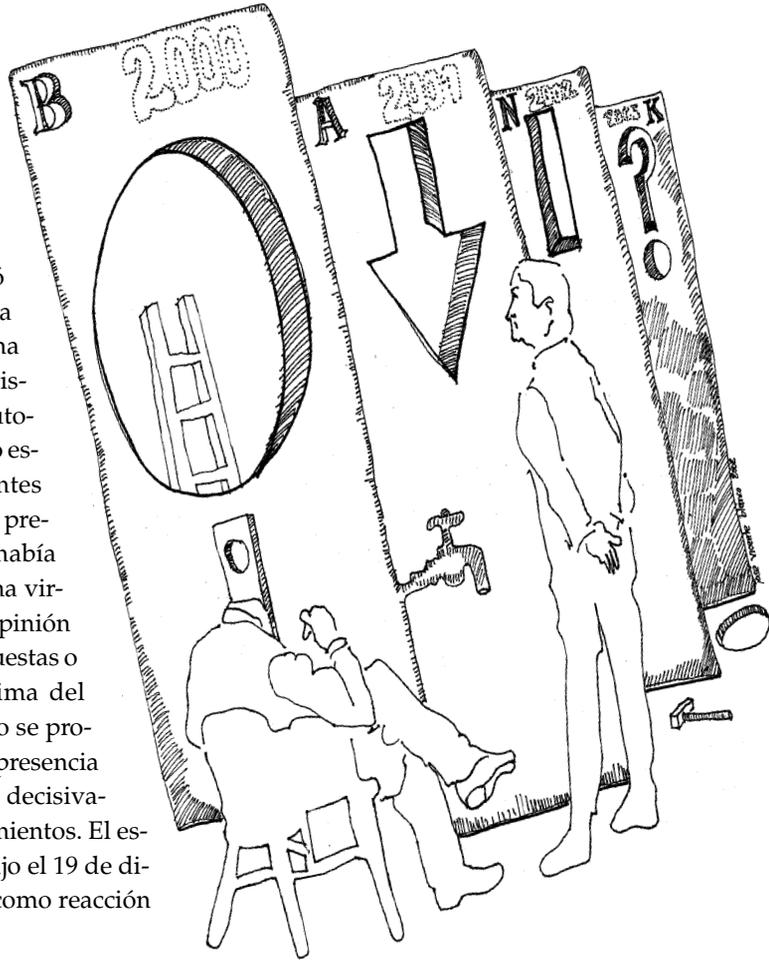
15. En algunos casos se trató de corte de boleta, pero el voto diferenciado o fluctuante fue facilitado porque las elecciones a gobernador y presidente se desdoblaron en la mayoría de las provincias.

16. Las abstenciones pasaron de 18,4% en 1999, a 26,3% en 2001 como proporción del total del padrón. Alrededor de dos millones y medio más de ciudadanos no concurrieron a los comicios. Los votos blancos y nulos por su parte representaron alrededor de 22% de los votos emitidos en 2001, en contraste con 6,6% en 1999. Alrededor de cuatro millones de electores eligieron esta forma de expresión crítica.

partidos redujeron considerablemente su predicamento tanto en términos absolutos como relativos¹⁷. En este sentido la ilustración del paradójico resultado electoral se expresó en el hecho de que el peronismo aparecía triunfando ampliamente y alcanzando la mayoría en ambas cámaras, aunque la cantidad de votos que había obtenido estaba

en franca retracción respecto a la elección precedente en la que, sin embargo, había perdido de un modo contundente.

El cacero-lazo. A fines de diciembre se registró un viraje al surgir una movilización ciudadana inédita. Como se ha visto, los signos de la autonomía y el descontento estaban dados desde antes pero hasta entonces la presencia ciudadana se había expresado bajo la forma virtual del estado de la opinión construido por las encuestas o por la actividad mínima del voto. Con el cacero-lazo se produce una inesperada presencia pública que gravitará decisivamente en los acontecimientos. El estallido inicial se produjo el 19 de diciembre por la noche como reacción



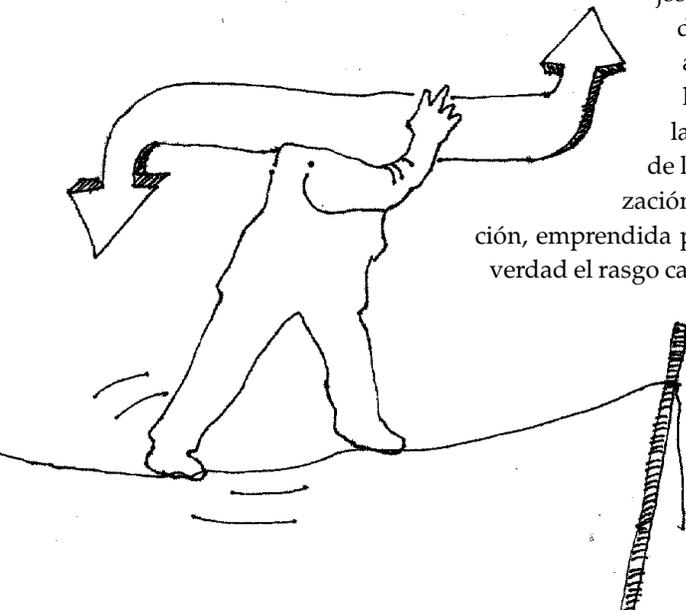
17. La Alianza vio reducirse sus votos drásticamente, de más de 8 millones en 1999 pasó a poco más de 3,1 millones en 2001. Esta última cifra representa 22,2% de los votos positivos (es decir, excluyendo los votos en blanco y anulados). Pero el peronismo también pasó de aproximadamente 6,1 millones en 1999, a menos de 5 millones en 2001. Esto representa 35% de los votos positivos. Un factor que contribuyó a debilitar el electorado de los dos grandes partidos coaliciones, que en 1999 sumaban 76,7% de los votos y en 2001 tan solo 55,2%, fue la emergencia de algunas nuevas fuerzas y la reactivación de pequeños partidos que en conjunto concitaron, aunque marginalmente, una dispersión del voto. Este aspecto es también ilustrativo del descontento ciudadano expresado en esa ocasión.

al discurso presidencial que luego de una jornada de saqueos a supermercados y comercios minoristas, que convirtieron a numerosos barrios del conurbano en tierra de nadie, daba prueba de insensibilidad y sobre todo de eludir toda visión autocrítica sobre su gestión, decretando el Estado de sitio para combatir la acción de presuntos enemigos de la República.

Las cacerolas comenzaron a sonar en un continuo que iba desde el balcón de la casa como borde del ámbito privado, hasta las calles en las que se concentraban los vecinos más activos, algunos de los cuales cortaban el tránsito en los principales cruces y protestaban durante horas, desgranándose grupos en dirección a los centros tradicionales de poder y de protesta: la Plaza de Mayo, ante la sede del Gobierno, y la Plaza de los Dos Congresos, ante el Parlamento. Toda la ciudad parecía pronunciarse, sin que se produzca la figuración tradicional de las masas congregadas en un lugar, como había sucedido en el pasado. Esta activación social se extendió espontáneamente sin liderazgos y estructuras, teniendo una primera prolongación a los centros urbanos litorales, para ser más amplia en los eventos futuros similares. La tentativa policial de desalojar la Plaza de Mayo dio lugar a la represión y enfrentamientos violentos, con varias muertes como saldo. Ante el repudio y el descontrol De la Rúa presentó la renuncia. Su sucesor elegido por la Asamblea Legislativa se alejaría también del cargo una semana después bajo la presión de un nuevo cacerolazo y su débil legitimidad.

Este paradigma o referencia fundacional de la activación ciudadana debe ser deslindada de otras expresiones ilustrativas de su carácter heterogéneo: acciones de reclamo ante los bancos por el congelamiento de depósitos y plazos fi-

jos, reclamos de diferentes lesionados por la pesificación como los acreedores de deudas privadas, los deudores de créditos en dólares no pesificados, etc., así como de las tentativas de dar una organización y un carácter duradero a la acción, emprendida por las asambleas vecinales. En verdad el rasgo característico del estallido y la activación ciudadana es su negatividad; convergen todos –pues el registro parece ser el de la sociedad toda, de la unanimidad so-



cial— en reacción a las iniciativas del poder. Esa convergencia negativa es la que permite una coexistencia heterogénea y presenta la novedad de una acción que no reviste la forma de un movimiento social, es decir, no tiene al menos inicialmente otro reclamo general que el utópico pero significativo «Que se vayan todos».

El estallido y la prolongación del movimiento urbano de protesta dirigido a repudiar la representación política plantearon el interrogante de su significación. Parece pertinente considerarlos como el síntoma de una profunda crisis de representación pero, aunque negativamente, con una significación política. Se trata de la expresión de un veto a las iniciativas gubernamentales y de un cuestionamiento general a los dirigentes. Es también una experiencia que ha revelado la capacidad de ejercer poder y que ha colocado la relación entre la sociedad y los dirigentes en nuevos términos: las instituciones hasta ahora vigentes aparecen debilitadas y a merced de un poder difuso de «la calle». Es decir, se plantea la posibilidad de una reinstitucionalización pero toda tentativa deberá tener en cuenta la disposición incrédula y vigilante de los movilizados. La movilización social precipitó la interrupción de la gestión de De la Rúa y de ese modo apareció como una irrupción extrainstitucional, pero fue percibida como una intervención que ponía fin a un presidente extremadamente deslegitimado, produciendo un impase frente al cual las instituciones representativas y la propia oposición aparecían como impotentes. En este sentido, la intervención ciudadana cumplió una función reguladora que desbloqueó la situación y permitió que el proceso retomara luego un cauce institucional¹⁸. La movilización «negativa» prolonga la crisis en el sentido que pone de relieve la ausencia de representación e inhibe la posibilidad de una solución meramente interna al sistema institucional representativo. Ello está ilustrado en la situación presente, con un gobierno que cuenta con una inédita y muy amplia coalición parlamentaria de sustento, en la que se mezclan peronistas, radicales y frepasistas, que padece de una profunda debilidad por su escaso reconocimiento social.

La movilización social urbana cuestionadora y pacífica constituye una extraordinaria ampliación del espacio público. Parece así revertirse la corriente hacia la privatización de los individuos y hacia una relación con la vida pública extremadamente segmentada que prevalecía desde los años 80. Esta ampliación tiene la potencialidad de revigorizar el régimen democrático puesto que se tra-

18. Queda así cuestionada una visión hiperinstitucionalista de la democracia que ignora la primacía de los principios democráticos por sobre formas institucionales concretas, lo que se pone en evidencia en situaciones de crisis.

***Se ha desplegado
una escena
ciudadana
y vecinal
que podría dar
nuevas bases
a la vida pública
e incluso
al surgimiento
paulatino
de nuevos
liderazgos***

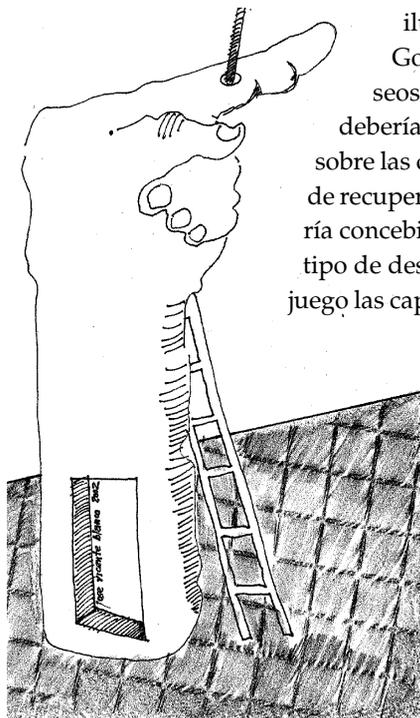
ta también de una presencia que no predica en absoluto un cambio de régimen político sino que actúa en vistas a ejercer una influencia. Por cierto, la movilización es realmente heterogénea y coexisten en ella potencialidades distintas. Las asambleas zonales congregadas desde principios de enero ilustran una posible evolución deliberativa y de organización barrial. Podríamos asistir a un notable renacimiento de la sociedad civil, en la que nuevas asociaciones combinen preocupaciones políticas y vecinales. Pero también se ha evidenciado la propensión a la acción directa, es decir, a mantener un estado de movilización permanente encontrando blancos del rechazo e incluso chivos expiatorios hacia las cuales dirigir sucesivamente las energías. Los «escraches» ilustran esta potencialidad de violencia, puesto que cercando domicilios particulares e incluso dañándolos y haciendo objeto de escarnio a los «escrachados», se da libre cauce a que grupos *ad hoc* pronuncien veredictos sobre las personas ignorando a la justicia y la protección de los derechos. Esa práctica podía sumarse a otras que apuntan a la desagregación social y a los enfrentamientos descontrolados.

En definitiva, se ha desplegado una escena ciudadana y vecinal que podría dar nuevas bases a la vida pública e incluso al surgimiento paulatino de nuevos liderazgos, que por el momento tendrían un alcance local. Pero la recomposición de la situación y en particular la recreación de un lazo de representación que asegure la productividad política de la sociedad movilizada, dependen de la emergencia de nuevas fuerzas políticas y eventualmente de la renovación de las tradicionales. Una renovación política venida exclusivamente o aun esencialmente «desde abajo» no parece estar a la orden del día. Pero cualquier reconstitución de los lazos políticos no podría pensarse como una vuelta al sistema tan desarticulado por los acontecimientos recientes, ni podría hacerse ignorando la nueva presencia de una ciudadanía activa.

El rumbo democrático

El desorden general, el apremio del empobrecimiento en expansión y la pérdida de soberanía resultante de la vulnerabilidad externa no son propicias para la rehabilitación de la política. Por el contrario esas restricciones alertan sobre el riesgo de la inestabilidad y la violencia. Sin embargo, existe una potencialidad colectiva consciente de esos escollos y propensa a la prudencia, como lo

ilustra un estado de ánimo general crítico respecto del Gobierno y aun dubitativo sobre su legitimidad pero deseoso de que continúe y finalice su mandato legal¹⁹. Pero debería surgir un debate que encienda una luz de esperanza, sobre las capacidades de la decisión ciudadana y la posibilidad de recuperar la soberanía hoy retaceada. Este horizonte requeriría concebir, a diferencia de lo sucedido en la última década, un tipo de desarrollo y de integración con el mundo que ponga en juego las capacidades nacionales y se aleje de un modelo simple y homogeneizante de globalización.



La recomposición de la representación política debe ser encarada, pero sin ceder a las tentaciones demagógicas de la antipolítica. El redimensionamiento de recursos e instituciones debe ir a la par de una reforma de los sistemas electorales que permita las candidaturas independientes y la participación ciudadana por vías referendarias, cuidando por supuesto de no favorecer la ilusión plebiscitaria que quita su lugar a las instituciones representativas y a la elaboración de políticas

en contextos específicos. La activación social ciudadana es una fuente poderosa de renovación política, en primer lugar porque condiciona de modo tal que nada podrá hacerse sin tener en cuenta esa fuente de crítica, control y eventualmente proposición ciudadana. Ella puede ser también el semillero de nuevos liderazgos, pero la reconstitución de la representación política depende sobre todo de la iniciativa e imaginación de quienes intervienen en la política por vocación y se organizan para ello.

También debe tenerse en cuenta que las trazas de la debacle serán duraderas también en el plano social. Un orden político viable debería recuperar sus capacidades de efectuar políticas de integración social. Ello supone asimilar la experiencia de los últimos años que invita a alejarse de las utopías tecnocráticas que predicán o admiten un crecimiento disociado de la justicia social. Amén de las consideraciones éticas, una concepción de crecimiento y democracia restringida generan las condiciones para su inestabilidad y caída.

19. Una reciente encuesta es categórica: 67% desaprueba la tarea presidencial (aun 81% desaprueba la tarea económica del Gobierno), pero la mayoría prefiere que Duhalde termine el mandato (58%) a que se convoquen elecciones anticipadas (35%) (Gallup, *La Nación*, 14/4/02).

Razones para un optimismo politológico

Pocos países vivieron un proceso de decadencia económica y política tan acentuado como la Argentina en los últimos años. Sin embargo, en el plano político surgen señales que dan lugar al optimismo: la veloz deslegitimación de un modelo de democracia delegativa, la multiplicación de la «voz horizontal» entre los ciudadanos como respuesta a la falta de referencias institucionales creíbles y la generación de formas autónomas y autosustentadas de capital social, encarnadas en centenas de asambleas barriales, revitalización de ONGs y compromiso voluntario en acciones sociales. A su vez, estas situaciones desafían las explicaciones tradicionales de la ciencia política sobre cuándo gran parte de las clases medias decide abrazar una mayor democratización de las relaciones políticas como solución a la crisis.

Fabián Echegaray

Quien observa hoy a la Argentina con ojos de economista o casi cualquier otra profesión, solo puede tener motivos para la alarma y la desesperanza. Por eso, quizá la mirada del politólogo sea la única con un dejo de optimismo. Dada su reinante escasez, vale la pena detenerse para entender sus fundamentos. El país está despertando simultáneamente a tres situaciones políticas extraordinarias: la deslegitimación de la «democracia delegativa», la multiplicación acelerada de la «voz horizontal» como respuesta masiva a la crisis, y la

Fabián Echegaray: doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Connecticut; profesor de la Universidade do Vale de Itajaí (Santa Catarina, Brasil); director de Market Analysis Brasil. @:<fabian@marketanalysis.com.br>.

Palabras clave: teoría política, democracia, crisis, Argentina.

generación de formas autónomas y autosustentadas de capital social. Desde ya, no son situaciones que involucren a todos los argentinos, ni siquiera a una mayoría. Pero posee características tanto inéditas como favorables a su continuidad: en primer lugar, todas parten del principio de que la democracia es la mejor forma de gobierno; en segundo lugar, envuelve, por primera vez de una forma masiva la movilización y autoorganización política, en líneas extrapartidarias, de sectores significativos de las clases medias y medias-altas; y en tercer lugar, su naturaleza esencialmente metropolitana garantiza un impacto por partida doble, debido a la proximidad del centro de poder y la mayor visibilidad que adquiere entre los medios de comunicación.

El eje del cambio

Por detrás de estos fenómenos no asoma únicamente un evento fortuito, como un presidente caído en desgracia, un escándalo que genera indignación aislada o un brote inflacionario capaz de trastocar por algún tiempo hábitos y costumbres. Esas eventualidades ya se produjeron y, en lugar de favorecer un reordenamiento más participativo y republicano, reforzaron la aspiración por un liderazgo personalista fuerte, capaz de tomar decisiones por todos y traducir su mandato en imposiciones unilaterales (v. Bosoer/Leiras). El germen de la novedad está en la simultánea valoración de la práctica democrática¹ con el agotamiento de la división schumpeteriana del trabajo político y del poder –división que fue aprendida y transmitida generación tras generación, como forma legítima de actuación cívica y organización colectiva. Lo que se cuestiona es la separación entre el ciudadano como alguien que vota y vuelve a su mundo personal, y el político como aquel que decide por los próximos cuatro años. Se pone en tela de juicio el supuesto que dice que el comportamiento público y el privado siguen caminos separados, como también la práctica individual de criticar el poder en privado y endosar las autoridades en público. Por debajo de estos cambios emerge un cuestionamiento a la idea de abdicar del civismo activo como la salida más racional de los ciudadanos en una democracia de masas. Se revierte el cálculo sobre las ventajas de la tradicional asignación de tareas políticas que implicó transferir la definición de lo que es deseable y realizable en política para el Gobierno, las obligaciones de vigilancia y fiscalización a la televisión, sus periodistas, o sus columnistas, y las responsabilidades por participar colectivamente y movilizar intereses a los aparatos partidarios o gremiales.

1. Recientes encuestas de opinión pública con muestras nacionales representativas sistemáticamente apuntan el apoyo al régimen democrático, ubicándose entre 64% y 85%, dependiendo del fraseo de la pregunta; v. PNUD, febrero 2002; *La Nación*, 31/3/02.

El replanteo en marcha sugiere volver a politizar la vida privada y reducir la distancia entre las iniciativas individuales o grupales y la gestión de los bienes públicos. En nombre de la eficacia de sus resultados y de una preferencia individual, supuestamente natural, a «verse libre de la política»², la división tradicional del trabajo político se consolidó sobre el principio de que los manda-

***Tras años
 sin poder encajar
 la Argentina en
 el argumento
 economicista
 de origen
 democrático,
 uno puede sospechar
 que se le ha
 encontrado
 la vuelta
 al enigma***

tarios y sus técnicos toman las decisiones por todos y los electores refrendan o no lo actuado vía comicios o, eventualmente, encuestas. Hoy tal lógica es explícitamente desafiada³.

Las fuentes del cambio

¿Era esperable esta súbita demanda por más democratización frente a un cuadro de larga recesión, onda de saqueos, continuos cortes de rutas por grupos de desempleados y multiplicación de los delitos? No. La opción por el orden, antes que por más democracia, prevaleció entre las clases medias y medias-altas a lo largo de la historia argentina, y, como formulado por las teorías más clásicas del desarrollo político, cuando las condiciones sociales podrían haber favorecido una participación regular y sustantiva⁴ a través de la articulación de dichas clases en asociaciones y mecanismos de influencia política, ellas favorecieron el modelo más acomodado de democracia. Para sorpresa de teóricos y observadores, la mayor conciencia y exigencia democrática de aquellas clases, que el progreso material fue incapaz de traer, fueron resultado de la decadencia económica y la parálisis política.

Para el politólogo, semejante desenlace debería ser otro motivo para el optimismo: tras años sin poder encajar la Argentina en el argumento economicista de origen democrático, uno puede sospechar que se le ha encontrado la vuelta al enigma. Al desafío pionero de Guillermo O'Donnell (1973, 1982), que revertía

2. Así lo presuponía Robert Dahl en su libro *A Preface to Democratic Theory* (University of Chicago Press, Chicago, 1956), que diera aliento a la versión estrictamente procedimentalista-electoralista de la democracia, fuertemente abrazada y divulgada por los líderes políticos argentinos tras el retorno a la democracia en 1983.

3. En no poca medida, las decisiones contrarias al derecho de propiedad y de libertades públicas tomadas por el Gobierno mediante confiscación de depósitos bancarios, declaración de Estado de sitio y represión policial de manifestaciones pacíficas, dejaron en claro que las tradicionales reglas de juego son dispensables coma también ineficaces.

4. La referencia obligatoria aquí es el trabajo de Seymour Lipset publicado en *El hombre político* (Eudeba, Buenos Aires, 1960).

el efecto político del progreso económico, augurando autoritarismo en lugar de más democracia, ahora podemos agregarle el argumento sobre cómo una democratización más capilar de las relaciones políticas es estimulada por la debacle económica y la ausencia de opciones políticas. Es más, otras líneas clásicas de razonamiento sobre cuáles son las condiciones que llevan a una democracia más cívica y participativa, también convergen en la misma dirección que invita a revisar las hipótesis típicas de trabajo.

1. Comencemos por la línea de argumento centrada en las bases sociales de una mayor democratización cívica: ella nos sugiere que es necesario que exista una burguesía para generar auténtica democracia (Barrington Moore). Y burguesía supone no solo una clase autopercebida como media, sino vinculada cotidianamente a actividades comerciales y de negociación privadas pero a escala masiva. La disminución del aparato estatal y el fin de las reglas de estabilidad laboral, junto con la recesión de cuatro años, expulsaron a millones de personas, tradicionalmente definidas como de clase media, a las incertezas del mercado. Producto de ello, el desempleo se disparó⁵; pero aumentó infinitamente más, y con una penetración familiar más fuerte, la propensión al cuentapropismo corporizado en el lanzamiento de iniciativas propias de supervivencia financiera⁶. La misma certidumbre respecto a que el Estado, las empresas ni un nuevo ciclo económico podrán cambiar la situación personal en el corto plazo, ayuda a consolidar la noción de intereses comerciales propios y la necesidad de defensa articulada y colectiva de los mismos.

Claro que tal situación está lejos de parecerse al surgimiento de una clase consolidada, con intereses comunes, organizada institucionalmente y con fuerza política. Pero tampoco fue así en el comienzo de las experiencias burguesas europeas. De hecho, la cristalización de tales intereses y articulaciones significó la propia democratización del sistema, o el equivalente a su día anterior. Por otro lado en la Argentina, como en toda la región, los canales disponibles de organización y consolidación de intereses (sindicatos, federaciones, asociaciones comerciales) son preexistentes y fueron creados unilateralmente por el Estado, restándole impulso a la autonomía política de aquel germen de burguesía, en lugar de motorizarla.

5. En octubre de 2001, según la última medición formal del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) la tasa abierta de desempleo trepaba a 18,3% (casi 3% más que 12 meses antes) y junto con la de subempleo comprometía a 29% del total de la población (Indec, marzo de 2002).

6. Entre los argentinos, 7,8% exhibían actitudes fuertemente emprendedoras, porcentaje virtualmente idéntico al de nuevos emprendedores (8%), dejando el país en quinto lugar (entre 21) en términos de proporción de empresas nacientes; fuente: *Monitor Global de Emprendorismo*, 11/2001. Por otro lado, más de 29% calificaba como trabajadores por cuenta propia y empleadores (Indec, marzo de 2002).

A pesar del drástico cambio económico mencionado, buena parte de lo que se entiende como la clase media en Argentina continúa sin militar en las filas de los micro y pequeños empresarios. No obstante, desde finales de noviembre de 2001, cuando fue decretada la confiscación de los ahorros y cuentas corrientes de más de 61.000 millones de dólares correspondientes en su mayoría a inversiones y depósitos personales, esa franja (integrada por empleados públicos,

***Cuanto más
 extiende la
 resolución
 del problema,
 el Gobierno
 más favorece
 la politización
 organizada
 y autónoma
 de los sectores
 afectados***

jubilados y pensionistas, profesionales independientes, asalariados industriales, empleados de comercio, entre otros) también tuvo la oportunidad de reconocer intereses comunes y comprobar que mal podría esperarse una defensa de los mismos a través del Estado o los actores tradicionales de mediación.

Si el primer paso fue la búsqueda de soluciones judiciales individuales que sumaron casi 100.000 procesos, el paso siguiente esperable es la convergencia de dichos intereses particulares en mecanismos organizados de defensa colectiva, dada la resistencia del Gobierno a dejar que las acciones legales prosperen y el alegato de los bancos sobre la falta de recursos para efectuar las devoluciones pertinentes. Irónicamente, cuanto más extiende la resolución del problema, el Gobierno más favorece la politización organizada y autónoma de los sectores afectados, movimiento singular que –como ocurriera en otros contextos– tiene grandes posibilidades de generar vida propia permanente.

Por lo tanto, en Argentina hoy encontramos miembros de la clásica clase media reconociendo sus intereses comunes y articulándose para defenderlos, sin esperar ni confiar en el papel mediador o protector del Estado o los sindicatos y asociaciones de clase. En otras palabras, un actor social numeroso, actitudinalmente próximo a la mentalidad burguesa de intereses de clase visibles y forzado a hacer de la negociación su rutina diaria, y crecientemente movilizado y organizado en defensa de tales intereses.

2. Teóricos del argumento culturalista corrigieron hace tiempo su primera propuesta que postulaba la preexistencia de orientaciones prodemocráticas para la difusión y ampliación de la democracia. A partir de Rustow, ya en los años 70 se aceptó que es la propia convivencia con la democracia la que enseña a los individuos un comportamiento favorable a la misma. El actual caso argentino ratifica esa lógica. Los adultos que hasta el final de la dictadura estaban más acostumbrados a definirse frente a sus autoridades como electores, contribu-

yentes, consumidores o, genéricamente, como pueblo, aprenden con el tiempo a comportarse como ciudadanos. Y, hoy a partir de la experiencia directa en microexperimentos de decisión pública como las asambleas barriales, vemos robustecerse la cultura democrática. Esos «town meetings» están generando, de la manera más visible y pedagógica posible, un nuevo ciudadano, conciente de derechos y deberes, incluyendo las manifestaciones callejeras de protesta, los escraches a jueces, políticos y represores, y hasta los circunstanciales abucheos y escenas pugilísticas con representantes de los gobiernos anteriores (expresiones, dígame de paso, también presentes en los originarios «town meetings» norteamericanos).

Sería legítimo preguntarse si tales fenómenos no formaron parte del paisaje histórico argentino en épocas anteriores. De hecho, revoluciones y revueltas populares como la de 1890-1904, movilizaciones multitudinarias como las de 1945, 1972-1974 y un sinnúmero de movimientos sociales y ONGs surgidas al calor del derrumbe de la dictadura tras la guerra de Malvinas en 1983-1984, sugieren que tales expresiones masivas de afirmación popular no resultaron desconocidas. Solo que ninguno de aquellos eventos cuestionó la división del trabajo político *per se*, buscando transferir el poder de un grupo o líder hacia otro antes que plantear la ruptura con la misma. Con esos antecedentes, algunos podrán preguntarse: si otras veces asistimos a un cuestionamiento parecido ¿por qué hoy habría de ser diferente?; ¿por qué tendríamos que suponer, como apresuradamente los politólogos hemos hecho otras veces, que un cambio genuino de cultura política ocurrió y alimenta ahora los nuevos hechos?

Estas preguntas exigen, antes, revisar cómo cambia la cultura política de una parte de la sociedad. Los referentes clásicos apuntan a tres elementos distintos: el recambio generacional que paulatinamente coloca en el centro del sistema político una generación socializada bajo otras experiencias y valores (Inglehart); una situación traumática que exige comportamientos diferentes a instituciones o prácticas alternativas (Almond/Verba); o una radical alteración en la relación costo-beneficio de las conductas y repertorios de acción practicados hasta el momento (Olson). Pocas dudas hay sobre la existencia de mudanzas radicales y traumáticas en los últimos años. Y tampoco puede negarse que desde 1983 pasaron años suficientes como para identificar la llegada de una generación nueva.

3. El tercer argumento, un nuevo cálculo racional, es quizá el más obvio y también el más difícil de argumentar sin que parezca arbitrario. Tal vez, el tradicional juego de cooperación que nutrió las conclusiones sobre la lógica de la acción colectiva ayude a ilustrarlo. Delante de un bien público accesible a todos

(p. ej., agua potable), en una situación de posible disminución de las rentas o rendimientos (p. ej., escasez) que exija un cambio momentáneo de conductas hacia la conservación del bien (p. ej., restricción del consumo), dos individuos pueden decidir cooperar (p. ej., ambos ahorran) o no. Las alternativas que sobran son más numerosas (el primer individuo puede optar por ahorrar y el segundo no, o viceversa, o ambas personas pueden optar por no ahorrar). Esas alternativas también son, desde el punto de vista personal, las más racionales en el corto plazo. ¿Para qué sacrificarme y ahorrar si el otro/los otros lo estarán haciendo y el resultado me beneficiará de cualquier forma?; ¿o para qué ahorrar si asumo que los otros tampoco ahorrarán?

Por décadas, esa lógica de la acción eximió a las clases medias de la participación (juego cooperativo) porque las consecuencias de tal opción nunca repercutieron gravemente de forma masiva y por un largo tiempo. Sin embargo, todo indica que el escenario para hoy es otro, donde se hace visible la pésima calidad de los resultados (bienes públicos) de un comportamiento no cooperativo. Y el detonador de esa revisión vuelve a ser la conexión visible entre pésimos bienes públicos (p. ej., corrupción, mala administración, recesión, paridad irreal del tipo de cambio) y pésimos bienes privados (p. ej., confiscación del dinero, congelamiento de los planes personales relacionados, achicamiento de las oportunidades personales, desempleo, etc.). La evidencia de un resultado del tipo «todos pierden» altera el costo-beneficio de las conductas típicas y motoriza nuevos repertorios de acción individuales, rápidamente masificados, impensables pocos meses atrás.

Razones para el optimismo politológico

Si un objetivo del politólogo es entender mejor cómo se produjeron los cambios, otro no menos importante es tratar de explicar por qué debieran verse con ojos esperanzados.

Abandonando la democracia delegativa. Probablemente un politólogo no necesite mucha persuasión para celebrar el fin de la democracia delegativa, especialmente después de leer el argumento originalmente disecado por O'Donnell (1992) sobre las características de este nuevo tipo de «animal político», como él mismo la llama. Desde la perspectiva del ciudadano, la democracia delegativa no es más que un conjunto de rituales electorales confirmatorios de la concentración del poder público en una persona, combinado con la renuncia popular a tentativas serias de fiscalización y participación ciudadana durante periodos no electorales. Algo que pocos cientistas sociales asociarían a la noción de democracia.

Sin embargo, este modelo de organización del poder y de ética pública de la democracia no solo fue aceptado dentro y fuera del país sino también recomendado como la fórmula para el desarrollo y el éxito democráticos. El delegacionismo decisonal pasaba a ser una cuestión de estilo idiosincrático de liderazgo, disociado del contenido de las decisiones tomadas. Los presidentes podrían

decidir ser corruptos o no, ser furiosos o racional-

mente privatistas, exhibir preocupación

social o ser del todo indiferentes. Esta

cuestión de los contenidos obviamente

es importantísima y ayuda mucho

a explicar la debacle argentina, pero

no es el eje de lo que se debate como

democracia delegativa, que es una cuestión

estrictamente vinculada con el ejercicio del

poder, la representación y el liderazgo ins-

titucional. Entre los aspectos políticos de esa

fórmula pueden enumerarse: el recurso a

mecanismos extrainstitucionales de deci-

sión (decretos, leyes de emergencia, *per*

saltum jurídicos, sobornos, presiones po-

liciales, abuso de fondos reservados);

confusión indisimulada de intereses

privados y públicos; vaciamiento de las

formas de control del poder; y el uso

discrecional de la justicia y de la fuerza

pública como recursos de negociación

y capitalización política, entre otros.

Concomitantemente, dicha fórmula

gozaba de la aceptación tácita aunque

visible de la mayoría. En Argentina ese

liderazgo no fue solo tolerado sino

también premiado con votos, inclusi-

ve más allá de su eventual coexisten-

cia con condiciones económicas favorables. Así apuntaron diversos exámenes

de los resultados electorales y de popularidad hasta 1997: la variable que cap-

turaba el efecto exclusivamente político del liderazgo del Ejecutivo generaba

votos y aprobación presidencial en la medida en que éste se tornaba más asertivo,

controlado por el efecto del desempeño económico (Echegaray; Echegaray/

Elordi). Los datos indicaban claramente que el ejercicio explícito del comando



El momento de legitimidad instrumental de la democracia delegativa, pasó gracias al repunte económico de los 90

político por parte del presidente contaba con las muecas de simpatía de la población, aunque significara centralización del poder, eventuales abusos de autoridad y una nula rendición de cuentas. El confort psicológico del fuerte liderazgo compensaba esos déficit.

Por otro lado, para quienes trabajaron el concepto de la democracia delegativa, la cristalización de ese imperialismo decisional del presidente suponía dos cosas: en primer lugar, la expresión de una respuesta sistémica y eficiente (aunque oblicuamente democrática) a las presiones capaces de erosionar el consenso democrático; en segundo lugar, la preexistencia de vulnerabilidad cívica por parte del público, resultado de hábitos y costumbres modelados sobre la matriz cultural autoritaria. Como tantas veces en la historia, el liderazgo carismático actuaría como «pegamento» entre un público sin vocación sistémica por la democracia y un sistema democrático sin militancia cívica que lo resguardase.

Sin duda, volver a discutir el concepto 10 años después (tras haber sido adoptado casi acríticamente durante los años 90) puede ser una práctica saludable. Pero parece serlo más aún someter el concepto a la realidad actual y entender dónde fue desmentido. No es el objetivo de este artículo, pero puede iniciarse la labor admitiendo que si la existencia de un régimen de democracia delegativa no docilizó las mayorías para aceptar un liderazgo discrecional *ad infinitum* es porque otros valores (participacionistas, prodemocráticos) ya estaban presentes y porque tal estilo no resultó todo lo eficiente que se esperaría durante el tiempo que duró.

De 1997 en adelante, el consenso antes comentado empezó a hacer agua, y los resultados electorales han sido testimonio de ello. El momento de legitimidad instrumental de la democracia delegativa, gracias al repunte económico de los 90, pasó. No solo pasó como parece haber deslindado la fórmula delegacionista de liderazgo político, sobre la posibilidad de alcanzar resultados económicos buenos para toda la sociedad. Hoy, al menos para la clase media, las premisas de lo que se define como liderazgo político parecen disociadas de aquel delegacionismo pro-activo.

Ejercitando la voz horizontal. El término «voz horizontal» no es tan popular entre los politólogos. Bosquejado por O'Donnell (1986) al ensanchar los aportes de Hirschman sobre las posibles respuestas a una situación de crisis, el término pasó

desapercibido⁷, pero no por ello fue menos útil para entender las bases de la renovación cultural y representatividad cívica de la democracia entre los argentinos. Hirschman esquematiza tres tipos posibles de respuesta frente a situaciones de descontento con el desempeño de organizaciones: la salida, la reclamación o el silencio leal. Rápidamente, observadores atentos de la realidad política argentina recurrieron al esquema hirschmaniano para traducir el abanico de expresiones comentadas por los medios: las filas en los consulados extranjeros (la salida), los cacerolazos y piquetes (la voz o reclamación), y –mucho más raro– el silencio sepulcral de los simpatizantes partidarios y del resto de los argentinos que no corrían atrás de su pasaporte ni de sus utensilios de cocina.

Entre otras cosas, lo que los usuarios de este simple pero utilísimo abordaje racional dejan de lado⁸, es que la opción de la voz no queda circunscripta solo al plano vertical (esto es, de los ciudadanos hacia los gobernantes), sino que la misma se genera y alimenta en un reclamo de naturaleza horizontal: la interacción comunicativa frecuente, deliberativa y de consecuencias identitarias entre personas percibidas como iguales y con intereses comunes. La falta de atención a este tipo de voz no es casual: fue justamente el modo de acción más violentamente reprimido por el golpe de 1976 y, tras la restauración de la democracia en 1983, el más boicoteado por los partidos y sindicatos que no consiguieron absorberlo, permaneciendo vivo en su formato más visible de movimientos sociales y ONGs. De allí la sorpresa de autoridades, policías, medios de comunicación y de las propias personas cuando se descubre que en contextos diferentes y por personas aparentemente aisladas, emerge una red comunicativa de base geográfica definida y dinámica sustentable.

Puede argumentarse que un pasado de sociedades de fomento barrial o de sociabilidad en clubes deportivos y culturales, junto con el prestigio actual de las ONGs, contribuyeron a hacer viable la aparición de estas redes, pero –como mínimo– hay que pensar en un empate entre fuerzas favorables y desfavorables a la opción de voz horizontal. Nuevamente, pareciera ser mucho más un producto de la opción racional que una consecuencia de algún proceso de metamorfosis de la cultura política. La voz horizontal indica el reconocimiento mutuo de objetivos y afinidades colectivos, volcados siempre a una acción de voz vertical, esto es, de reclamo hacia quienes tienen los instrumentos de decisión o implementación y cumplimiento de iniciativas públicas. Independientemente del resultado final, la práctica de la voz horizontal genera su propia

7. Dígase de paso, como la mayoría de los ensayos de O'Donnell sobre aspectos de cultura política.
8. V. Mariano Grondona en *La Nación*, 10/2/02.

gratificación en términos de diversificar la identidad individual y aumentar la autoestima; es una satisfacción cognitiva y emocional, no necesariamente material, pero que posibilita su continuidad y aumenta las posibilidades, a futuro, de obtener resultados esperados.

Esos aspectos favorables se notan en la capacidad movilizadora de dicha práctica (hasta casi 40% de los argentinos adultos admitió haber participado de algún cacerolazo, marcha, asamblea o piquete entre enero y febrero de 2002, cayendo a 17%-18% un mes después⁹), como también en la imagen positiva de los cacerolazos y marchas pacíficas (cerca de 64% de la población adulta veía aquellas expresiones de voz horizontal con buenos ojos y menos de 10% las condenaba¹⁰). Más importante aún, la visión positiva se desprendía directamente de la empatía con dichas acciones: casi 2/3 de los entrevistados admitieron sentirse identificados con dichas expresiones públicas.

Germinando el capital social. La creciente intensificación y regularización de esas deliberaciones y relaciones asociativas da lugar a lo que muchos científicos conocen como capital social. Solo que aquí la experiencia argentina vuelve a desafiar el argumento-padrón de generación y difusión de dicho capital.

El argumento-padrón indica que el capital social brota de niveles relativamente altos de confianza entre las personas. A su vez, la confianza emerge del optimismo personal como también de la sensación de previsibilidad y transparencia de las conductas de los otros, de la percepción de bajos niveles de violencia y de la satisfacción con el funcionamiento del régimen político (Rennó; Stoller; Uslaner). De hecho, la cuestión de la confianza está en el centro de la generación de afectos y comportamientos democráticos desde hace ya un buen tiempo (Inglehart), solo que la explosión asociativa, deliberativa y participativa argentina ocurre justamente en la situación contraria: cuando el pesimismo es mayor, cuando la percepción de violencia cotidiana e insatisfacción con los políticos y el funcionamiento de la democracia llegaron a un pico sin precedentes, cuando reina la imprevisibilidad de las acciones individuales¹¹. Esta contribución del caso argentino merece ser objeto de estudio, también, por la manera explícita con que pone de relieve los límites de proyectar linealmente las conclusiones teóricas desarrolladas en otros contextos. De hecho, uno podría pre-

9. Encuestas con muestras urbanas probabilísticas publicadas en *La Nación*, 13/1/02, 24/2/02; *Clarín*, 10/3/02.

10. Encuestas con muestras urbanas probabilísticas publicadas en *Clarín*, 10/3/02; *Página 12*, 10/3/02.

11. Situaciones confirmadas por los diversos estudios de opinión pública publicados en los medios; v. *Clarín*, 10/3/02.

guntarse por qué las personas se incomodarían en movilizarse y participar activamente si sus autoridades responden, las leyes se aplican con ecuanimidad y sin sorpresas, si existe confianza en el futuro y el prestigio de las instituciones permanece en buen nivel. Claro que cuidar y garantizar la vida de emprendimientos asociativos cívicos sería razonable, como también lo sería que las autoridades no desprestigien el funcionamiento de la democracia o que se vigilen y repriman desvíos de la aplicación adecuada de las leyes. Lo concreto es que tenemos evidencia de peso sugiriendo que donde tales precauciones no forman parte de la rutina cívica e institucional, acciones generadoras de capital social se multiplican como recurso de apoyo y repertorio válido de reacción frente a la ausencia de expectativas, al mal desempeño del sistema y al deterioro drástico del orden.

Hacia mediados de marzo de 2002, se estimaba que 1 de cada 10 argentinos estaba regularmente involucrado en las asambleas (casi 2 de cada 10 en la región metropolitana de Buenos Aires¹²), en su gran mayoría individuos diferentes de ese 14% que, hasta entonces, corporizaba lo que tradicionalmente se entiende como capital social, esto es, los participantes de formas voluntarias de organización civil¹³. Actualmente, se estima que existen 272 asambleas barriales permanentes, 40% de ellas en la Capital Federal, justamente donde se registró el pico de movilización política durante el verano (que llevó a las calles a casi 20% de la población total). Como aproximación, esto quiere decir que cada asamblea fue y está siendo animada por más de 8.800 argentinos, movilizandando un total de 2.400.000 jóvenes y adultos¹⁴. Naturalmente existe la sospecha de una posible súbita descapitalización social en tanto correlato de la rapidez y forma como eclosionó el fenómeno. Allí, sí valdría la pena concentrarse e investigar los factores más sensibles para tal resultado: baja confianza interpersonal, pesimismo sobre la calidad y –eventualmente– el efecto de las iniciativas asociativas, y problemas para entender y actuar en conjunto, esto es, para legitimar un padrón de procedimientos objetivo y ecuaníme.

Sabiendo del abanico de elementos que precisarían ser atendidos por los politólogos, existen ya algunos indicadores aislados que permiten alimentar el optimismo. Para empezar, la duración de las asambleas barriales está a punto de superar los cuatro meses, más de la mitad del periodo crítico típico para la supervivencia de micro-emprendimientos comerciales en Argentina. Puede re-

12. *Página 12*, 10/3/02.

13. PNUD, enero de 2002; *Clarín*, 10/3/02.

14. Números sumamente próximos a los calculados por los propios medios, ej.: Raúl Kollman en *Página 12*, 10/3/02.

sultar una comparación extraña, pero mirado desde la perspectiva de acciones que cuentan con el doble desafío de ser de naturaleza colectiva y de objetivos sin fines de lucro, en la comparación con las iniciativas comerciales aquéllas lucen un desempeño que va más allá del éxito momentáneo. Por otro lado, pueden encontrarse diferentes mediciones de la legitimidad de esas iniciativas en algunas encuestas recientes: preguntados sobre la percepción de las asambleas como entes independientes esencialmente vecinales y como nueva forma de acción política, 3 de cada 7 personas coinciden totalmente¹⁵. Por último, las asambleas han generado rutinas propias y que requieren dedicación, tendientes a generar sentido de identidad como también de eficacia política: algunas organizan «escraches» a figuras políticas (identificándolas públicamente de forma acusatoria), muchas otras han lanzado sus propios vehículos de comunicación (p. ej., en la Capital Federal una asamblea lanzó el primer diario que expresa las opiniones y los reclamos de las asambleas barriales, con un tiraje de 1.200 ejemplares; otras asambleas de localidades de provincia concretaron un espacio radial propio en diferentes radios FM¹⁶).

Más importante para el optimismo, dadas las penurias del momento, es recordar el efecto de progreso social y material aparejado por el capital social. Tal como concluye Putnam para el caso italiano: cuanto mayor capital social, más se encuentra instituciones que funcionan y condiciones que favorecen el desarrollo y la acumulación de riquezas. El politólogo escéptico se preguntaría: ¿otro ejemplo de «sentarse y esperar» hasta que una condición genere su impacto, tal como el crecimiento generaría democracia o la apertura de la economía generaría riqueza? No; la extensión y multiplicación de experiencias asociativas va de la mano con el aumento de la cooperación y ayuda recíproca, que –en el plano financiero– acostumbran a evolucionar de contribuciones solidarias, pirámides informales de inversión, préstamos específicos y emprendimientos de pequeño porte, hacia prácticas masivas de obras mutuales, esfuerzos cooperativos y esquemas recíprocos de ayuda monetaria, redes de crédito al consumo y formación de sociedades comerciales. De hecho, tales desarrollos ya ocurren en algunas de las asambleas, que organizan planes de asistencia social para los sectores más carenciados, fuerzan la reapertura de comedores escolares antes del inicio del ciclo escolar y multiplican las huertas urbanas¹⁷.

15. *Clarín*, 10/3/02.

16. *La Nación*, 25/3/02.

17. Otros ejemplos de expresiones de capital social que generan desarrollo económico, en otros países sudamericanos, son mencionados por Kliksberg.

18. SAAP: Carta a los asociados, marzo de 2002.

Finalizando

Si el cuadro de situación actual sugiere que todos los análisis de la realidad argentina deban teñirse de un realismo pesimista, reconocer aquellos aspectos que, al ojo del politólogo, son positivos y alentadores puede resultar un buen contrapeso. Como reflexionaba, recientemente, para la asociación de politólogos argentinos, frente a los innumerables interrogantes del momento, se trataba de «extraer algunas enseñanzas sobre lo sucedido en los últimos meses a nuestro alrededor y tratar de aplicarlas»¹⁸. Que entre tales eventos pueda enumerarse el agotamiento del apoyo a un tipo de democracia que prescindía de ciudadanos, la revitalización –aun si restringida socialmente– de prácticas regulares de autoafirmación cívica y la reproducción de un asociativismo politizado con objetivos y recursos propios, capaz de sustentarse en el tiempo, no es poca cosa. Es motivo de sobra para recuperar el entusiasmo politológico y reencontrarnos con el sentido ético que la ciencia política tiene, principalmente, en momentos tan amargos y adversos.

Referencias

- Almond, Gabriel y Sidney Verba: *Political Culture Revisited*, Little, Brown & Co., Boston, 1980.
- Barrington Moore, Jr.: *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press, Boston, 1966.
- Bosoer, Fabián y Santiago Leiras: «Posguerra Fría, 'neodescisionismo' y nueva fase del capitalismo: el alegato del príncipe-gobernante en el escenario global de los 90» en Atilio Borón (comp.): *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina*, Eudeba / Clacso, Buenos Aires, 1999.
- Echegaray, Fabián: «¿Voto económico o referéndum político? Los determinantes de las elecciones presidenciales en América Latina, 1982-1994» en *Desarrollo Económico* N° 142, 1996, p. 36.
- Echegaray, Fabián y Carlos Elordi: «Public Opinion and Market Reform in Argentina, 1989-1996» en Susan Stokes (org.): *Public Support for Market Reform in New Democracies*, Oxford University Press, Cambridge, 2001.
- Hirschman, Albert: *Exit, Voice and Loyalty*, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1970.
- Inglehart, Ronald: *Culture Shift*, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1990.
- Kliksberg, Bernardo: «Capital social y cultura», Documento de Trabajo N° 7, BID / Intal, Buenos Aires, 2000.
- O'Donnell, Guillermo: *Modernización y autoritarismo*, Paidós, Buenos Aires, 1973.
- O'Donnell, Guillermo: *El Estado burocrático-autoritario*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982.
- O'Donnell, Guillermo: *Contrapuntos*, Vozes, San Pablo, 1986.
- O'Donnell, Guillermo: «¿Democracia delegativa?» en *Cuadernos del Claeh* N° 61, Montevideo, 1992.
- Olson, Marcus: *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
- Putnam, Robert: *Making Democracy Work*, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1994.
- Rennó, Lúcio: «Confianza Interpersonal a Comportamiento Político» en *Opinión Pública* 7/1, 2001.
- Rustow, Dankwart: «Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model» en *Comparative Politics* 2/3, 1970.
- Stoller, David: «Bowling Together, Bowling Alone: The Development of Generalized Trust in Voluntary Associations» en *Political Psychology* 19/3, 1998.
- Uslaner, Eric: «Social Capital, Television, and the 'Mean World': Trust, Optimism, and Civic Participation» en *Political Psychology* 19/3, 1998.

Fuego y barricadas

*Retratos de la
beligerancia popular
en la Argentina
democrática*

Javier Auyero

Este artículo argumenta que las protestas de diciembre de 2001 deben ser enmarcadas en los cambios que el repertorio de acción colectiva ha sufrido en los últimos tiempos en Argentina. Centrándose en dos casos de beligerancia colectiva paradigmáticos, el Santiagazo de 1993 y la pueblada de Cutral-co y Plaza Huincul en 1996, este artículo examina algunas características de este repertorio prestando particular atención a sus causas estructurales, a las modalidades que adquirió la protesta, y a las experiencias de sus protagonistas.

Si bien inéditos por su magnitud y por sus consecuencias, los episodios de diciembre de 2001 –en los que una combinación de saqueos, cortes de calles y rutas, y cacerolazos hizo renunciar a un presidente votado por 48% de la población dos años antes– deben ser enmarcados en los cambios que la acción colectiva ha sufrido en los últimos tiempos en Argentina. Lejos de ser una «explosión» de una ciudadanía que hasta entonces parecía «ensimismada, incapaz de expresar su descontento»¹, diciembre representa el punto álgido de un pro-

Javier Auyero: profesor del departamento de Sociología de la State University of New York-Stony Brook y miembro del Cecyp - Fundación del Sur (Centro de Estudios en Cultura y Política), Buenos Aires. Es autor de *Poor People's Politics* (Duke University Press, 2001), que obtuvo el premio al mejor libro del año del New England Council of Latin American Studies y fue finalista del C. Wright Mills Award. Versión en español: *La política de los pobres. Las prácticas clientelísticas del peronismo*, Manantial, Buenos Aires. Es autor también de varios artículos publicados en numerosas revistas académicas. Su próximo libro, *Contentious Lives. Two Women, Two Protests, and the Quest for Recognition*, será publicado por Duke University Press en 2003.

Nota: Quiero agradecer la entusiasta colaboración y aporte crítico de Laura Zambrini y Rodrigo Hobert, quienes trabajaron como asistentes de investigación en este proyecto, y los comentarios de Gastón Beltrán, Lucas Rubinich y Mark Healey. Esta investigación fue financiada por una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. La mayoría de los testimonios citados en este artículo fueron recogidos durante mi trabajo de campo realizado entre 1999 y 2001. Las fuentes secundarias sobre las que se basa esta investigación incluyen tres periódicos nacionales (*Clarín*, *La Nación* y *Página 12*) y varios periódicos provinciales (*La Mañana del Sur*, *Río Negro*, *El Litoral*, *El Liberal*, *Diario Norte*, y *El Tribuno*).

Palabras clave: protesta popular, acción colectiva, movimientos sociales, Argentina.

ceso de movilización popular que lleva casi una década. La primera parte de este artículo examina este proceso prestando particular atención a sus causas estructurales y a las modalidades que adquirió la protesta. La segunda, centrada en un trabajo etnográfico sobre dos episodios de beligerancia colectiva paradigmáticos (el Santiagazo de 1993 y la pueblada de Cutral-co y Plaza Huincul en 1996), describe las experiencias de los manifestantes, esto es, la protesta vivida.

Dos momentos de la última década sirven para ejemplificar las recientes formas de la protesta. Entre abril y junio de 1997, cortes de ruta en demanda de empleo y ataques a edificios públicos se multiplican en el país. En abril, las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén, son sitiadas durante varios días en reclamo del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobernador luego que los habitantes de la zona realizaran su primera «pueblada» en reclamo de fuentes de trabajo en junio de 1996. Tres meses más tarde, autoridades del gobierno provincial y municipal fueron tomadas como rehenes por unos 300 manifestantes que reclamaban el aumento en los subsidios de empleo en el edificio municipal de Cutral-co. En mayo, cortes de ruta, organizados por gremios municipales y organizaciones de desempleados, aislaron la provincia de Jujuy durante 12 días, a consecuencia de lo cual el gabinete del entonces gobernador Ferraro presentó su renuncia. Cutral-co y Jujuy tal vez sean los casos más recordados pero no los únicos. En estos meses, «piqueteros», «fogoneros» y «zanjeros» cortan la ruta nacional 3 en Trelew (Chubut) durante un día en demanda de puestos de trabajo; vecinos y desocupados organizados en una multisectorial interrumpen el tráfico en la ruta nacional 38 en Cruz del Eje (Córdoba); trabajadores municipales que piden la incorporación a la planta permanente y el pago de sueldos atrasados cortan la ruta 11 en Capitán Bermúdez (Santa Fe). En estos meses, cortes de rutas nacionales y provinciales también ocurren en Catriel (Río Negro), Banda del Río Salí (Tucumán), y en la ciudad de Neuquén, mientras que los maestros de todo el país confluyen en la Plaza de los Dos Congresos (Buenos Aires) y levantan allí la llamada Carpa Blanca. A propósito del prolongado corte de la ruta 34 en Tartagal y General Mosconi en mayo, el gobernador salteño Romero (no precisamente un simpatizante de esta forma de protesta) es quien mejor resumió lo que ocurría en este periodo de movilización popular al referirse al corte de ruta como «una práctica de acción política que se está divulgando en todo el país».

Luego de poco más de tres años, en noviembre de 2000, esta forma de protesta ya ha sido aprendida y adoptada en todo el país. Cortes se suceden en Isidro

***El desempleo,
 el hambre,
 o la necesidad
 económica
 no conducen
 necesariamente
 al corte de ruta
 ni a la quema
 de un edificio***

Casanova, Esteban Echeverría, y Glew (Gran Buenos Aires), Plottier (Neuquén), Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Cuña Muerta y Zanja Honda (Salta), Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco), Belén (Catamarca).

Analistas locales y extranjeros han señalado la pobreza y el desempleo como razón y sentido de este ciclo de protesta; los llamados «estallidos», los cortes de ruta, y las puebladas que se generalizaron en el país durante los años 90 son, desde este sentido común

dominante, respuestas a la falta de un estímulo económico. Para «explicar» la protesta bastaría, desde este punto de vista, con mencionar una subida en la tasa de desempleo, el crecimiento de los niveles de pobreza, falta de pago a empleados públicos, o (en el caso de los últimos cacerolazos) la indebida retención de los depósitos bancarios. Desde esta perspectiva, las acciones beligerantes de la multitud son vistas como intromisiones en el curso rutinario de los eventos, como compulsiones casi mecánicas, poco concientes y poco organizadas, caóticas. El historiador inglés E.P Thompson denominó a esta perspectiva «visión espasmódica de la historia popular». En su clásico texto sobre la economía moral de la multitud inglesa, este autor formula preguntas que servirán de punto de partida a este ensayo: «Cuando tiene hambre, ¿qué hace la gente? ¿Cómo es su comportamiento modificado por la costumbre, la cultura y la razón?». Preguntas que le permitirán adentrarse en las experiencias de la rebelión popular, en las maneras en que ésta es vivida y sentida. Preguntas que utilizaré de guía para cuestionar la ecuación «desempleo + pobreza = protesta». No hace falta demasiado análisis para darse cuenta que los desempleados que cortan una ruta no tienen trabajo, pero el desempleo, el hambre, o la necesidad económica no conducen necesariamente al corte de ruta ni a la quema de un edificio. Constituyen sí las bases sobre las cuales se erige la beligerancia popular, pero la forma de la protesta tiene que ver con procesos políticos y con formas de reclamo aprendidas en repetidos enfrentamientos con el Estado y con su relativo éxito y/o fracaso.

Entre los numerosos observadores de las nuevas formas de protesta quizás sea Marina Farinetti quien más detalladamente ha diagnosticado las mutaciones en la beligerancia popular ocurridas a partir de los inicios de la década de los 90². De acuerdo con ella, dicha década está marcada por el *desplazamiento* del

2. Pueden consultarse también los trabajos de Federico Schuster y Adrián Scribano.

conflicto laboral del área industrial al sector público, la *disminución* de reclamos por aumentos salariales y el *crecimiento* de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, la *disminución* de huelgas y el *aumento* de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva, el *incremento* de la frecuencia de la protesta en las provincias, y el *creciente protagonismo* de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto.

A pesar de la gran variedad de formas de protesta habidas durante los años 90, las modalidades con que la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente entre una fase y la otra (digamos entre abril y junio de 1997 y noviembre de 2000) cuando actores similares son quienes activan la protesta (desocupados y/o empleados públicos). Es más, los manifestantes se dan cuenta de esta recurrencia al referirse, pública y análogamente, tanto a sus acciones y a las acciones de otros (*el corte*) como a sus autodefiniciones y a las de otros manifestantes (siendo *piqueteros* la denominación que comienza a aparecer con más frecuencia). Tenemos, entonces, todas las indicaciones que señalan la emergencia de una forma de protestar, «un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado» (Tilly) mediante las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al Estado; esto es, tenemos los indicios de la conformación de un *repertorio de acción colectiva*.

Cortes vs. huelgas: falsa dicotomía

Conviene, sin embargo, no exagerar el carácter novedoso de las formas y sentidos de la protesta a los efectos de no perder de vista la continuidad que existe con modalidades previas de lucha. Estas «nuevas formas» no reemplazan a otras, como la huelga y la manifestación callejera, ni tampoco pueden ser asociadas simplemente a una demanda en particular como el reclamo de empleo³. Por el contrario, cortes y paros, ataques a edificios y manifestaciones, campamentos y huelgas, conviven, se complementan y se potencian de acuerdo con su relativo éxito o fracaso en la satisfacción de demandas. Si bien la forma «corte de ruta» está predominantemente asociada a la demanda de trabajo y de subsidios de empleo (los llamados Planes Trabajar), no puede ser vinculada de manera directa y exclusiva con un tipo de reclamo, como lo demuestran los ganaderos con sus

3. Los informes del Centro de Estudios Nueva Mayoría, ampliamente citados por periodistas y analistas locales, son el mejor ejemplo de esta dicotomía.

***La diversidad
 de la beligerancia
 popular
 fue enfrentada
 por las elites
 gubernamentales
 con una combinación
 de negociación,
 brutal represión,
 y los usuales intentos
 clasificadores/
 criminilizadores***

cortes de ruta en protesta por el resurgimiento de la fiebre aftosa en Formosa, los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro (Jujuy) en demanda del pago de salarios atrasados, o los grupos indígenas bloqueando el paso en la ruta 34 en Salta en demanda de tierras (noviembre de 2000). Si bien los desocupados adquieren prominencia en los cortes de ruta, los sindicatos de empleados estatales y los gremios docentes (en Jujuy en 1993, 1995 y 1997, o en Neuquén en 1997, p. ej.), organizaciones de segundo grado (la Central Argentina de Trabajadores en los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires), y otros tipos de organización (frentes barriales, comisiones vecinales, etc.) también adoptan esta forma de lucha colectiva. Quizás sean las huelgas de 1997 (agosto) y 2000 (junio), llevadas a cabo durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, las que mejor grafiquen esta coexistencia de formas establecidas de protesta con otras emergentes. El paro general de 1997 combinó cortes de ruta, ollas populares, manifestaciones y piquetes de huelga en todo el país. El de 2000 incluyó cortes de puentes (Misiones y Capital Federal), de rutas (Jujuy y Chubut), de vías ferroviarias (Castelar, Gran Buenos Aires), ataques a oficinas de Repsol-YPF (Neuquén) y del Citibank (Santa Fe y San Juan), pedradas contra edificios públicos (Secretaría de Educación en Neuquén), y bloqueos a destilerías (Ensenada, provincia de Buenos Aires).

Por último, la dicotomía huelga (de trabajadores) / cortes de ruta (de desempleados) nos puede hacer perder de vista el encadenamiento de las emergentes formas de protesta durante los años 90 con otras predominantes durante los 80: quizás haga falta recordar que uno de los líderes de la Federación de Tierras y Vivienda (Luis D'Elia), organización clave durante los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, fue también uno de los organizadores de las tomas de tierras (asentamientos poblacionales en tierras fiscales y/o privadas) durante la dictadura y el primer gobierno democrático (Merklen). Cuando en noviembre de 2000 las autoridades de los gobiernos provincial y nacional no admitían las demandas de quienes cortaban la ruta en La Matanza, uno de los piqueteros, sintetizando en un solo comentario lo que a muchos observadores de las protestas en Argentina pareciera que se les escapa en sus intentos por construir modelos dicotómicos de la acción colectiva, decía: «Si es necesario, les vamos a armar un asentamiento en la ruta».

Los sospechosos de siempre

La diversidad de la beligerancia popular fue enfrentada por las elites gubernamentales con una combinación de *negociación* (en la que el reparto de planes de empleo y de comida, muchas veces a través de mecanismos clientelares que dieron lugar a nuevas protestas, y el temor al «contagio» o el «efecto dominó» cada vez que los manifestantes obtenían parte de sus demandas, fueron dominantes), brutal *represión* (previo a los eventos de diciembre de 2001, entre 1995 y 2001, cientos de manifestantes fueron heridos y ocho murieron durante enfrentamientos con la policía y/o gendarmería –Víctor Choque en Ushuaia, 1995; Teresa Rodríguez en Cutral-co, 1997; Francisco Escobar y Mauro Ojeda en Corrientes, 1999; Aníbal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios y Víctor Jofré en Salta entre 2000 y 2001, este último murió de un infarto al quedar atrapado en medio de la represión–), y los usuales intentos *clasificadores/criminalizadores* que funcionarios, tanto del gobierno menemista como de la Alianza y de los gobernadores provinciales, utilizaron para ver en cada marcha, en cada corte, en cada demostración de oposición a una multitud inocente liderada por activistas, un «pasivo instrumento de agitadores externos», como diría George Rudé. Estas acusaciones varían desde el ya usual mote de «subversivos» de procedencia disímil (militantes de Sendero Luminoso ocultos entre las «hordas» en Santiago del Estero en 1993, activistas de Quebracho al acecho entre los «vándalos» y «criminales» en Cutral-co en 1997), al más imaginativo pero tampoco probado («los piqueteros [salteños, en mayo de 1997] fueron comprados por los traficantes de drogas para que los gendarmes se concentren en la ruta y dejen de custodiar la frontera»), pasando por la visión de la protesta como producto de «activistas perfectamente entrenados» (Salta, junio de 2001) hasta la infame (y finalmente letal) acusación de «enemigos de la república» a los protagonistas de los eventos de diciembre de 2001 por parte del entonces presidente De la Rúa.

Desproletarización, retirada del Estado, descentralización

El contexto estructural de este aumento de la beligerancia popular está caracterizado por tres procesos que, si bien pueden ser separados analíticamente, se encuentran en la raíz de la protesta de manera simultánea y se refuerzan mutuamente: 1) desproletarización; 2) retirada del Estado en su función de bienestar; y 3) descentralización de los servicios educativos y de la salud.

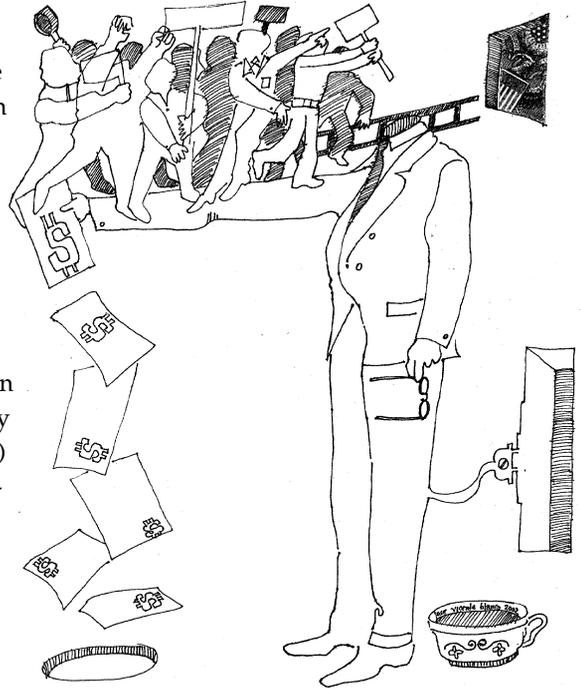
1. El aumento explosivo de la desocupación producto de la desindustrialización del país y de la desconexión funcional entre las tendencias macroeconómicas y

los niveles de empleo (la tasa de desempleo subió de 5% de la población económicamente activa en 1974, a 18% en 2001; desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en 1991, el desempleo creció 200%) ha sido objeto de numerosos y detallados estudios por lo que no me detendré aquí en este aspecto (se pueden consultar los excelentes trabajos de Beccaria/López; Murmis/Feldman). Como sintetiza Aronskind: «Los pobres eran 21,5% de la población en 1991, y 27% al final del periodo (en 2000). Los indigentes eran 3% de la población, para alcanzar 7% en 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma».

2. La retirada y el desmantelamiento del Estado de bienestar-populista hace que los riesgos implicados en situaciones de privación material sean aún mayores. En la última década, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación del sistema público de educación, de salud y de las políticas de vivienda dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a «combatir el desempleo» y de las políticas sociales destinadas a «combatir la pobreza» hace que la situación sea aún peor: los pobres son cada vez más débiles y están cada día más desprotegidos. El Estado ha exhibido una particular indiferencia respecto del destino de los desempleados: el seguro de desempleo solo cubre a una exigua proporción de quienes perdieron su trabajo y el dinero otorgado en cada subsidio no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. La privatización de las empresas estatales no es solo otro aspecto de la retirada estatal de las funciones básicas sino que tiene un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus trabajos como consecuencia directa del proceso de privatización. En 1989, cerca de medio millón de trabajadores estaban empleados en las compañías estatales de teléfono, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviario y gas. En 1999, estas empresas ocupan a 75.000. Como veremos, el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) es de particular importancia dado que muchos de sus despidos ocurren en comunidades cuya existencia depende en buena medida de la presencia de esta empresa (Cutralco y Plaza Huincul en Neuquén, y Tartagal y General Mosconi en Salta).

3. El proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud es otro aspecto que, si bien no ha sido estudiado en relación con el aumento de la protesta, es de crucial importancia para entenderla. A partir de 1989, los servicios educativos (sobre todo de educación media) y los de salud, comienzan a ser transferidos de la órbita del Gobierno Federal hacia las provincias (para estudios detallados del proceso, se puede consultar Rodríguez Larreta et al.; Rothen). Descentralización que profundiza la crisis de ambos sectores dado que las ad-

ministraciones provinciales tienen que afrontar esta nueva responsabilidad con sus ya escasos recursos financieros. Esto transforma a los gobiernos provinciales en objetos de demandas por parte de los, ahora también provinciales, empleados públicos. El aumento de la protesta por parte de docentes y trabajadores de la salud en las provincias (los llamados «jeringazos» en los hospitales públicos de Corrientes y los innumerables paros en la educación) son difíciles de comprender si no se tiene en cuenta que, como consecuencia directa del proceso de descentralización, lo que cambia es el blanco de las demandas, el *locus* de la acción colectiva; de reclamarle al Estado nacional antes responsable por salarios, condiciones de trabajo, infraestructura, etc. ahora la protesta se traslada al ámbito provincial –veremos cómo, en el caso de Santiago esto se expresa claramente en los inicios del conflictivo 1993.



Los cambios macroestructurales no afectan a la acción colectiva de manera directa sino que impactan en los medios y sentidos de la acción colectiva al modificar *intereses* (en términos un tanto simplificados podemos decir que de ser la defensa del salario, el *interés* dominante pasa a ser la defensa de fuentes de trabajo y luego la obtención de subsidios de desempleo); las *oportunidades* (al colocar a los gobiernos provinciales como objeto de demandas); y la *organización* de la gente común (convirtiendo a los gremios de empleados públicos y las nuevas y múltiples organizaciones de desempleados en actores principales de la protesta). Intereses, oportunidades y organizaciones que, en casos de generalizada corrupción en las administraciones provinciales y/o municipales, confluyen en la formación de una identidad beligerante que opone, por un lado, a manifestantes y, por el otro, a funcionarios y/o políticos.

La retirada del Estado y el hiperdesempleo vistos desde abajo

Cutral-co y Plaza Huincul se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1933 y 1918 respectivamente, ambas ciudades

crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del «oro negro» en la región, le siguió su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo bajo auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de ambas ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990, el total de la población creció de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento impresionante bajo cualquier estándar. El Estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa («cualquier cosa que se rompía era arreglada por YPF», me comentaban ex-obreros de la compañía), acceso a un excelente hospital, obra social y vacaciones pagas («una vez al año, teníamos pasajes gratis y dos semanas de hotel pagas en Buenos Aires o en cualquier lugar del país»). El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia. YPF construyó barrios enteros, en otros realizó los tendidos de luz y cloacas, también construyó un hospital moderno, un teatro y un centro deportivo.

En menos de dos años, un sistema económico y una forma de vida que duró más de cuatro décadas se hizo trizas. La privatización de YPF fue sancionada por el Congreso en septiembre de 1992; desde un poco antes los devastadores efectos se hacían sentir en ambas comunidades. YPF no solo redujo su personal de 4.200 operarios a 600 en menos de un año (Favaro et al.), sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual la vida de ambas ciudades giraba, convirtiéndose en una industria de enclave conducida bajo premisas estrictamente capitalistas.

Los titulares de los principales diarios regionales capturaron el clima de desconcierto generalizado cuando comenzaron a sentirse los primeros impactos de la «modernización del Estado»: «Futuro incierto aguarda a Cutral-co y Plaza Huincul», «Alarmante desocupación en zona petrolera», «La lucha por no ser otro pueblo fantasma». Mientras ocurrían los despidos masivos, los artículos en los principales periódicos describían el «sentimiento de incertidumbre» sobre los inicios de un proceso que hoy se encuentra en su forma avanzada: el hiper-desempleo. En Cutral-co, 30% de la PEA (25.340 habitantes) estaba desempleado en 1997. En la actualidad, más de la mitad de la población de ambas ciudades vive debajo de la línea oficial de pobreza (Favaro et al., p. 17)⁴.

4. En marzo de 2001, solo 35 I de los desempleados recibía subsidios (un promedio de 150 pesos) del gobierno nacional o provincial.

Lejos de allí, en el extremo norte del país, un residente de General Mosconi (provincia de Salta) describe a la ciudad en términos dolorosamente familiares para los cutralquenses y huinculenses: «Hace 10 años Mosconi se transformó en un pueblo fantasma. La privatización de YPF marcó el fin de una época dorada. Mi marido trabajó durante 20 años en el correo y siempre hablaba de los enormes aguinaldos que cobraban los empleados de la empresa petrolera. Ahora, la gente tiene que salir a cortar la ruta para recibir poco más que una limosna».

Mediaciones

Si algo nos han enseñado los estudios de la protesta, de los movimientos sociales, y de la acción colectiva en general en otras partes del mundo y otras épocas históricas –enseñanza que muchos analistas y periodistas que hablan sobre los eventos de diciembre de 2001 como producto casi automático de la indignación, del hambre, o de la desesperación, parecen olvidar– es que la miseria, la pobreza, la necesidad económica, el sufrimiento, el desempleo, el disgusto y la angustia colectivas, no se traducen necesariamente en movilización popular. Esto es, la protesta, el conflicto, la violencia, no son respuestas directas a las tensiones producidas por el deterioro de las condiciones de vida que surgen de las macro-transformaciones político-económicas sino que fluyen de los procesos políticos específicos. En otras palabras, los cambios macro impactan en el conflicto a través de la estructura de poder, dando forma a los medios organizativos y a los recursos que los distintos actores tienen a su disposición.

Para que la protesta ocurra, hacen falta redes asociativas previas que la activen (desde redes clientelares cuyos flujos de recursos se interrumpen dando lugar a la acción colectiva, como en el caso del Gran Buenos Aires entre 1999 y 2001, hasta redes organizativas surgidas al calor de protestas previas, como en el caso de Salta entre 1997 y 2001, o Jujuy de 1995 en adelante), oportunidades políticas que la hagan viable (el fraccionalismo entre elites suele abrir la puerta a la consecución de demandas en forma conjunta por actores que están fuera del sistema político –los casos del Correntinazo en 1999 y el Santiagazo en 1993 tal vez sean los ejemplos más claros–, y recursos que la faciliten (desde recursos materiales, como cubiertas para quemar y alimentos para sobrevivir día y noche en las barricadas, a veces provistos por grupos políticos opositores como en Cutral-co y Plaza Huincul, hasta recursos simbólicos con los cuales enfrentar los embates retóricos de los gobernantes). Una mirada a la última década de activismo popular en Argentina no puede dejar de tener en cuenta estos elementos si no quiere reproducir una visión mecanicista de la rebelión popular que ve en cada subida de precios, en cada alza de las tasas de desempleo, o en

*Así como
 la emergencia
 y curso de la protesta
 no se desprende
 de su contexto
 estructural,
 tampoco su sentido
 puede leerse
 directamente
 de la apremiante
 necesidad económica*

cada caída del nivel de vida una condición suficiente para el «estallido» (una sociología rigurosa de estas formas de acción colectiva debería comenzar por cuestionar las categorías entre políticas, periodísticas y policiales de «estallido» o «explosión» que ocultan más que develan los mecanismos y procesos en la raíz de la rebelión popular).

Así como la emergencia y curso de la protesta no se desprende de su contexto estructural, tampoco su sentido, el significado que sus protagonistas le dan a sus acciones beligerantes, puede leerse directamente de la apremiante necesidad económica (desde la falta de pago a los empleados públicos a la falta de empleo en los miles de desocupados) que la enmarca.

Si escuchamos más de cerca a los manifestantes en plazas, rutas y puentes, detectaremos la existencia de una directa impugnación a la llamada «clase política» como sentido omnipresente en las acciones de los manifestantes. El resto de este artículo, se centra en dos casos para examinar con más detenimiento este aspecto de la acción colectiva, dimensión que ha sido equivocadamente analizada como un indicador del carácter «antipolítico» de la protesta.

Santiago. Salarios y castigo

El 16 de diciembre de 1993, tres edificios públicos –Casa de Gobierno, Tribunales y Legislatura– y una docena de residencias privadas de políticos y funcionarios locales fueron invadidas, saqueadas e incendiadas por cientos de empleados públicos y vecinos de Santiago del Estero. Empleados estatales y municipales, maestras primarias y secundarias, jubilados, estudiantes, dirigentes sindicales y otros, reclamaban el pago de sus salarios, jubilaciones y pensiones (adeudados desde hacía tres meses), protestaban contra la implementación de políticas de ajuste estructural, y expresaban su descontento con la generalizada corrupción gubernamental. Conocido como Santiago, este episodio tiene características singulares en el sentido de que es una rebelión de gente «hambrienta e indignada» (como la describió buena parte de la prensa nacional) que convergió en las residencias particulares de funcionarios y en los símbolos del poder público, y en la cual prácticamente ningún comercio fue asaltado y no se conocen víctimas fatales.

Lejos de ser un estallido, el Santiagazo fue producto de una escalada en la beligerancia popular que comenzó a principios de 1993 (en enero de ese año se registran tres marchas y concentraciones, en diciembre más de 30) y que tuvo a los sindicatos docentes como protagonistas. Una de las líderes del sindicato docente (Cisadems) resume el proceso que desembocó en los eventos del 16 de diciembre. Nótese la importancia que el proceso de descentralización educativa y su articulación con mecanismos de cooptación política tienen en su relato:

En 1993 se concretaba la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Nosotros en ese momento nos oponíamos. Nuestro sindicato agrupaba justamente a las escuelas que serían transferidas en su totalidad. ... Lógicamente, empezamos a organizarnos para resistir esa transferencia de escuelas. Porque entendíamos que era una forma de desentenderse del Estado nacional, de ir abandonando el rol del Estado en la educación y su obligación indelegable de sostenerla. En enero de 1993 estábamos en la calle 7 u 8 personas, con un megáfono y un cartel (risas) ... denunciábamos que la transferencia de escuelas nacionales a la provincia iba a significar una gran pérdida de calidad educativa porque la provincia manejaba toda la cuestión educativa de una manera político-partidaria, o sea, se distribuían los cargos docentes con criterios de clientelismo político sin tener en cuenta la preparación del docente ni nada de eso. Denunciábamos que la provincia era absolutamente incapaz tanto en el aspecto económico-financiero, como administrativo de recibir semejantes escuelas grandes, y que históricamente habían estado más o menos bien administradas, desde la nación, y que ahora serían absorbidas por un Estado provincial ineficiente.

A principios de 1993, los manifestantes formulaban sus reclamos como empleados públicos de esta o aquella rama de la administración o como miembros de este o aquel sindicato (judiciales, maestras, jubilados, etc.). Las maestras se oponían a la transferencia de escuelas, reclamaban mejores salarios, su pago a término y mejoras en los establecimientos educativos; los trabajadores de la salud pedían por sus salarios, su aguinaldo y por recursos para sus hospitales; los profesores universitarios exigían aumentos de sueldos y mejoras en las condiciones laborales. Hacia junio del mismo año aumentaban la frecuencia de las protestas organizadas por los sindicatos, que en ocasiones convergían en marchas y actos en la plaza principal. Meses más tarde, si bien la protesta los encontraba juntos en las calles no surgía de una coalición. Sin embargo, en noviembre, el recientemente formado Frente de Lucha (que agrupaba a los principales gremios), convocaba a un acto masivo frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales para protestar contra la recientemente sancionada ley de ajuste y demandar el «castigo a los culpables del robo y la corrupción». Hacia fines de 1993, los manifestantes ya no se veían a sí mismos como miembros de este o aquel sindicato sino como parte del «pueblo de Santiago» que enfrentaba en las calles a los «gobernantes corruptos». Este es el colectivo que «estalló» en la mañana del 16 no solo en reclamo de sus salarios impagos sino también en búsqueda de «cárcel a los corruptos». Todos mis entrevistados, refiriéndose a los ataques a las casas de los políticos y funcionarios locales, dicen «Se lo merecen». Este simple comentario ilustra lo que «todo el mundo en Santiago sabe» —que los ataques a



@ El Liberal (derechos cedidos al autor)

los notables constituyen una calculada retribución, «Queríamos arreglar cuentas con los poderosos y los corruptos», me dice Carlos, quien estuvo presente en las quemas de los tres edificios, y María, del sindicato docente, agrega en que el «Santiagoazo fue una lección para los políticos ... todo tiene un límite».

La foto muestra a José, de 40 años, con tres hijos, empleado público de la Dirección de Vialidad Provincial, portando la bandera argentina frente a la Casa de Gobierno en llamas. Al describir el sentimiento de los manifestantes, la manera en que éstos se veían a sí mismos, y el carácter relacional de su identidad colectiva, José encapsula buena parte del sentido que la protesta tuvo para sus protagonistas:

¿Para qué querían entrar a la Casa de Gobierno?

Nosotros queríamos entrar para correr a todo el mundo, no queríamos que nadie quedara ahí. No queríamos que realmente nadie quede ahí, que quede grabado. Y así es que yo entré a la Casa de Gobierno. ... Mi objetivo era subir al despacho del gobernador y tomar la bandera.

¿Para qué la querías?

Tener la bandera es como haber dicho: hemos ganado la guerra, el trofeo más valioso que podía existir ... haber recuperado la bandera, significaba algo glorioso para mí. Hemos ganado esta batalla, esta bandera es nuestra. Es decir, ¿cómo te podría explicar lo que uno siente cuando uno toma un símbolo así? Cuando vos ves una película de Estados Unidos, siempre hay una bandera, fijate que en todas las películas siempre está la bandera de por medio. En un despacho, en una formación militar, en un buque, siempre está la bandera. Y el hecho de tomar la bandera significaba haber ganado una guerra, porque para mí en ese momento era una guerra. ... Algún día la voy a enmarcar, la voy a poner en un marco, con pana de fondo, y el mástil abajo. La tengo escondida. Es el símbolo de haber ganado una guerra ... el santiagueño tomó la Casa de Gobierno y echó a un grupo de corruptos que manejaban en ese momento la vida del santiagueño.

Dentro de 10 años tu hijo te va a preguntar por la bandera, porque la vas a tener enmarcada...

(Riéndose.) En ese momento, lo voy a sentar y le voy a contar lo mismo que te estoy contando a vos...

Seis días en el sur, la pueblada

Entre el 20 y el 26 de junio de 1996, miles de habitantes de las vecinas localidades de Cutral-co y Plaza Huincul bloquearon las rutas de acceso al área interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos durante siete días y seis noches. «Che, esto no es joda, acá hay gente bien vestida», dijo un gendarme cuando, arrasada la primera barricada (o «piquete») con gases lacrimógenos, balas de goma y agua lanzada desde un camión hidrante, vio que 20.000 personas esperaban a los menos de 200 uniformados (enviados por el gobierno nacional para despejar la ruta) en la Torre Uno de Plaza Huincul, el 25 de junio. Quizás sin saberlo, el gendarme estaba haciendo una observación sociológica sobre la composición de la multitud que reclamaba trabajo y la presencia del entonces gobernador neuquino, Felipe Sapag. La multitud, que había bloqueado el acceso a Plaza Huincul y a Cutral-co durante cinco días, incluía «gente bien vestida», no solo pobres y desocupados, y por tanto, «no era joda», esto es, era una protesta que excedía la capacidad represiva de la gendarmería, no solo por el número sino por la diversidad del «objetivo». Esta heterogénea multitud esperaba a la gendarmería entonando el himno nacional, cantando «Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está», viviendo a «Cutral-co y Plaza Huincul», y gritando «¡Que venga Sapag!». La jueza federal que comandaba el pelotón con la orden de despejar la ruta pidió hablar con representantes de esas 20.000 almas; en medio de la ruta los habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul le espetaron: «Acá no hay representantes, acá está el pueblo ... venga a hablar con el pueblo». A cuatro años de la protesta, Laura, portavoz de la comisión de piqueteros, afirma: «Decir que esa fue una protesta de desocupados o de los excluidos, es hacer una mala lectura. Ahí estaba todo el pueblo». La evaluación de Laura fue y es compar-

@ El Liberal (derechos cedidos al autor)



tida por muchos habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul. Durante los días de protesta, sus habitantes repitieron frente a las cámaras: «Nosotros queremos laburar. Les damos la luz, el gas, el petróleo y nos pagan así. ¡Que venga Felipe! Somos 30.000, no somos 5.000. ¡Está todo el pueblo!». «Acá no hay políticos, acá está el pueblo.»

Esta multitud-en-la-ruta se definía como *unida* («todo el pueblo está acá»); *numerosa* («somos 30.000, no 5.000»); *comprometida* con un objetivo («queremos trabajo, queremos que venga Sapag a darnos una solución»); *valiosa* («les damos la nafta, el gas, la electricidad...»); y *carente de líderes* («acá no hay políticos»). Tanto en las maneras de llamarse a sí misma como en su composición social, tanto en su discurso como en sus relaciones sociales, los manifestantes construyeron una identidad participativa que giraba alrededor de la noción de «pueblo».

Esta identidad insurgente, sin embargo, no surge de la nada ni de un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta (como si tal cosa existiese); es, por el contrario, una construcción colectiva y conflictiva. Durante seis noches y siete días en la ruta, los manifestantes realizaron incesantes esfuerzos por definirse a sí mismos diciendo quiénes eran y *no* eran. En las afirmaciones de Laura y de muchos otros piqueteros, el término «pueblo» tiene dos connotaciones diferentes. Por un lado, el «pueblo» se refiere a la localidad, a las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul. Las repetidas referencias a «todo el pueblo» apuntan, en parte, al hecho de que buena parte de la población de ambas ciudades estaba en la ruta. Y ambas ciudades estaban en la ruta para que el gobernador y «todo el país» reconozcan el proceso de extinción por el que rápidamente atraviesan luego de la privatización de YPF. En las representaciones de los habitantes, este es un pueblo muy especial porque provee de energía (gas y petróleo) al resto del país. Como grita un piquetero, a metros de los amenazantes gendarmes: «Les damos el gas, la nafta, la electricidad... ¿Y nos pagan así?». El piquetero se refiere de esta manera al pueblo-como-localidad, una significación que está profundamente arraigada en las creencias comunes de los habitantes de la región. Entre cutralquenses y huinculenses existe una creencia generalizada (arraigada, a su vez, en una pertinaz retórica nacionalista que describe a los habitantes como «dueños» del petróleo de la región) de que los recursos minerales de YPF les pertenecen. La frase «Nosotros les damos el gas, nosotros...» no es, pues, una expresión ideosincrática de este piquetero, sino que fue repetida en más de una ocasión durante la protesta reflejando un conjunto de creencias compartidas. En otras palabras, los entendimientos mutuos, las identidades colectivas que se forjaron en la ruta

durante esos días, encuentran sus raíces (sus bases materiales, diría) no solo en la situación actual de Cutral-co y Plaza Huinca como ciudades en peligro de extinción, sino en las memorias de los «tiempos de oro» de YPF y en una concepción compartida sobre la propiedad de los recursos naturales. Así, las memorias colectivas sobre el funcionamiento de un Estado de semi-bienestar durante el tiempo de YPF otorgan una suerte de ímpetu solidario para organizarse colectivamente y defender lo que se considera intereses de la ciudad. Este «nosotros» colectivo tiene dos preocupaciones fundamentales: la falta de oportunidades de trabajo, y los riesgos que implica para la sobrevivencia de ambas comunidades. Como afirma Mónica: «Yo amo este lugar, este paisaje. ¿Por qué me tengo que ir? ¡No! Si yo armé mi familia acá en Cutral-co, me dio posibilidades este paisaje. La plaza fue testigo de mis encuentros con el padre de mi hijo. Hay muchas cosas. Este Cutral-co le dio la posibilidad de nacer. ... A mí me costó mucho tener mi casa ¿por qué me tengo que ir? La pueblada fue sobre eso». O como sintetiza Zulma: «Nosotros queríamos fuente de trabajo ... queríamos que se terminara con esto de que no teníamos nada, que estábamos muy alejados del Gobierno, que el Gobierno no respondía, que no teníamos nada para que los chicos siguieran estudiando, *que esto se iba al carajo sin retorno, eso reclamábamos*».

*Existe,
sin embargo,
otra connotación
importante del
término «pueblo»
implícita en el rugir
de la multitud*

Existe, sin embargo, otra connotación importante del término «pueblo» implícita en el rugir de la multitud. Los manifestantes construyeron su identidad colectiva y sus demandas en términos democráticos contra lo que ellos percibían como oscuras negociaciones de los políticos y sus constantes intentos de «usar al pueblo». Desde el punto de vista piquetero, quiénes eran los manifestantes y por qué estaban en la ruta tiene tanto que ver con la devastación provocada por la retirada del Estado expresada en la privatización de la petrolera estatal, como con la ruina producida por las acciones interesadas de los políticos. Una perspectiva sensible a las palabras y las acciones de la multitud, a las demandas y a las creencias compartidas, nos alerta sobre el actor principal *en oposición al cual* los piqueteros construyen su identidad: la «clase política» o, en términos de Laura, «Las personas que están al mando ... las personas que dicen que más adelante voy a hacer esto, si me votan, voy a hacer aquello». Sin sus representantes habituales (o, mejor dicho, a pesar de sus representantes) los manifestantes pueden hacer oír su voz de descontento por el rápido deterioro de ambas comunidades y hacérselo saber al resto del país. «Por una vez», Laura y muchos otros piqueteros repiten una y otra vez, «los políticos no nos pudieron usar».

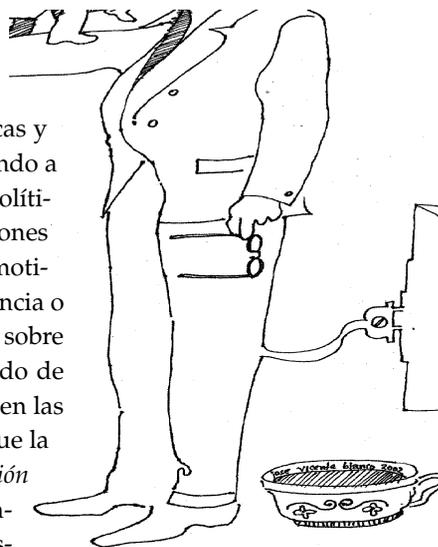
Conclusiones

Durante los últimos años se ha escrito mucho sobre la beligerancia popular en el país, pero se ha investigado poco. Hay quienes aún siguen viendo en la acción colectiva de los manifestantes una multitud enardecida, casi irracional, que solo se calma con una bolsa de comida o con un subsidio de empleo, una muchedumbre hambrienta capaz de todo, gente pura y simplemente harta que, como loca, sale a la calle o a las rutas, a cortarlas. A veces se exceden y prenden fuego a algún edificio público como en Santiago del Estero, Salta o Jujuy. Hay otros, desde posiciones ideológicas opuestas, que ven en cada protesta, corte o ataque a un edificio público, un indicador del surgimiento de una suerte de Gran Movimiento contra el ajuste, el neoliberalismo o –los más optimistas– contra el capitalismo. El piquetero es la imagen inversa del manifestante desesperado: un sujeto de inquebrantable y racional voluntad. Curiosamente, ambas posiciones siguen dominando las discusiones, a expensas de los (por cierto escasos) análisis fundados en la investigación empírica. Son pocos los que se han tomado el trabajo de mirar de cerca a los manifestantes y a sus formas de acción sin imponer sentidos que tienen más que ver con lo que uno quisiera ver que con lo que realmente está sucediendo.

Durante bastante tiempo, periodistas y académicos hablaron de la poca oposición que el «modelo» económico suscitaba, sin registrar lo que cualquier observador atento a la dinámica beligerante en el llamado «interior» podría ver, un ciclo de alta movilización popular con innovaciones importantes en las formas y en los sentidos de la acción colectiva. Puede que la efectividad de la protesta aumente cuando «golpea a las puertas de la capital», pero eso no es excusa para no observarla con detenimiento cuando ocurre en algún remoto rincón del país –y (solo) se ve en el aparato de televisión. Solo mirando más de cerca y más allá de los estrechos límites de los escenarios centrales del poder podremos entender las transformaciones en la acción colectiva.

En el transcurso de la última década surgieron muchas organizaciones que han de marcar el pulso de la acción colectiva en los años venideros. Se podría nombrar algunas de las que ocupan las tapas de los diarios y preocupan a las autoridades: Federación de Tierras y Vivienda; Movimiento de Trabajadores Desocupados; Corriente Clasista y Combativa; Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados; Movimiento Territorial de Liberación; Polo Obrero; Coordinadora Aníbal Verón; Movimiento de Trabajadores Teresa Rodríguez. Multiplicidad de organizaciones con diferencias políticas, ideológicas y tácticas importantes pero que dan cuenta del ritmo que ha tenido la beligerancia popular en los últimos

años. Nadie puede predecir cuál será su destino, ni el de la protesta en general. Es difícil calibrar el impacto inmediato que la acción colectiva tiene en las instituciones democráticas y en la cultura política, si esto servirá o no, citando a la maestra santiagueña, de «lección para los políticos». La inmediatez, la urgencia de las discusiones sobre la situación actual en el país, sobre las «motivaciones» de los manifestantes, sobre la presencia o no del proverbial agitador entre la multitud, sobre el carácter anárquico, espontáneo u organizado de la protesta, sobre la violencia que se produce en las manifestaciones (quizás haga falta recordar que la violencia colectiva es producto de una *relación*



entre Estado y ciudadanos, más que de intenciones individuales, y que hasta donde muestra la evidencia la mayor parte de la violencia física en estos 10 años –medida en muertes y heridas físicas durante acciones colectivas– ha sido producida por agentes del Estado) nos puede hacer perder de vista lo que sí sabemos sobre el efecto que la acción colectiva beligerante ha tenido en la democracia, en otros tiempos y lugares. La lucha popular, en el largo plazo, incide de manera positiva en la trayectoria democrática. No se trata de un optimismo celebratorio sino de una lectura detenida del registro histórico. Como señala Tilly (1997a), sin duda uno de los más perspicaces analistas de la relación entre protesta y vida democrática a través de la historia:

Las instituciones democráticas duraderas surgen de luchas repetidas, de largo plazo, en las que trabajadores, campesinos, y otra gente común han estado involucrados ... las revoluciones, rebeliones y movilizaciones de masas marcan una diferencia significativa entre un país y otro con respecto al alcance de la democracia.

Cuando se escribe sobre los grupos subalternos –y más aún cuando procuramos entender sus acciones conjuntas– siempre navegamos entre dos posiciones extremas igualmente perniciosas: interpretaciones miserabilistas e interpretaciones populistas. Bajo la influencia de las primeras, tendemos a ver la protesta como el acto inconducente, derrotado desde su inicio, de las víctimas de un sistema todopoderoso. Bajo la influencia de las segundas (sin duda más predominantes entre los científicos sociales), nos disponemos a ver en cada protesta un acto de resistencia heroica de un «pueblo» invulnerable, sin rastros de dominación ni de las cicatrices que (sin duda) dejan la miseria y la destitución. La tarea, si uno quiere comprender la dinámica beligerante, es evitar caer en

esta nociva antinomia y observar con más detenimiento no solo a la protesta sino a las continuidades que esta tiene con la vida cotidiana de quienes por días, semanas o meses expresan su frustración, su necesidad, su desesperación y/o sus demandas en las rutas, calles y plazas del país. Allí, en ese ir y venir, del barrio a la barricada, al corte o a la plaza, se encuentran muchas de las respuestas a los interrogantes que aún tenemos sobre la beligerancia popular.

Bibliografía

- Aguilar, M.A. y E. Vázquez: «De YPF a La Ruta: un acercamiento a Tartagal» en Marta Panaia, Susana Aparicio y Carlos Zurita (eds.): *Trabajo y población en el Noroeste argentino*, La Colmena, Buenos Aires, 2000, pp. 327-345.
- Barbeito, A. y R. Lo Vuolo: *La modernización excluyente*, Losada, Buenos Aires, 1992.
- Beccaria, L. y N. López (eds.): «Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano» en Luis Beccaria y Néstor López: *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*, Losada, Buenos Aires, 1996, pp. 17-46.
- Cetrángolo, O. y L. Golbert: «Desempleo en Argentina: magnitud del problema y políticas adoptadas», CECE, Serie Estudios N° 8, Buenos Aires, 1995.
- Edelman, M.: «Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics» en *Annual Review of Anthropology* N° 30, 2001, pp. 285-317.
- Farinetti, Marina: «¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina» en *Trabajo y Sociedad* N° 1, 7-9/1999, <<http://habitantes.elsitio.com/proit/zmarina.htm>>.
- Farinetti, Marina: «El estallido: la forma de la protesta», Buenos Aires, 2000, manuscrito.
- Favaro, O. et al.: «La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales» en *Realidad Económica* N° 148, 1997, pp. 13-27.
- Golbert, L.: «Viejos y nuevos problemas de las políticas asistenciales», CECE, Serie Estudios N° 12, Buenos Aires, 1996.
- Gould, Roger: *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*, University of Chicago Press, Chicago, 1995.
- Merklen, D.: *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*, Catálogos, Buenos Aires, 1991.
- Murmis, M. y S. Feldman: «De seguir así» en Luis Beccaria y Néstor López (eds.): *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*, Losada, Buenos Aires, 1996.
- Prevot Schapira, M.: «Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984-1994» en *Revista Mexicana de Sociología* N° 59/2, 1996, pp. 73-94.
- Rodríguez Larreta et al.: «Descentralización de políticas sociales», segundo informe de avance, Buenos Aires, 2000.
- Roth, D.: *Global-Local Conditions of Possibility: The Case of Education Decentralization in Argentina*, Department of Education, Stanford University; 2000, disertación de doctorado.
- Schuster, Federico: «La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política», Buenos Aires, 1999, manuscrito.
- Scribano, Adrián: «Argentina 'cortada': cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste» en Margarita López-Maya (ed.): *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste*, Nueva Sociedad, Caracas, 1999, pp. 45-72.
- Tarrow, Sidney: *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge University Press, Nueva York, 1998.
- Thompson, E.P.: *Customs in Common*, The New Press, Nueva York, 1993.
- Tilly, Charles: *The Contentious French*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
- Tilly, Charles: «How to Detect, Describe, and Explain Repertoires of Contention» en *The Working Paper Series. Working Paper N° 150*, New School for Social Research, 1992.
- Tilly, Charles: «Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834» en *Theory and Society* N° 26, 1997a, pp. 245-273.
- Tilly, Charles: *Roads From Past to Future*, Rowman and Littlefield, Lanham, 1997b.

Vaca flaca y Minotauro

Ascenso y caída de la imaginación política argentina

Este ensayo analiza la crisis argentina a partir de la disolución de buena parte de la imaginación política que acompañó la historia de la nación desde comienzos del siglo xx. La articulación entre imágenes de abundancia y ascenso político plebeyo construyó un tipo de mentalidad política activa y «ascendente», pero durante la década del 90 se desorganizaron todas las bases estructurales que podían seguir sosteniéndola. Una de sus consecuencias ha sido el crecimiento de una forma de la picaresca institucional que acabó saqueando al Estado, superpuesta a la creciente irrelevancia de la casta política y de sus lenguajes; otra, el aumento de la tasa de daño en Argentina. Sufrimiento que, acumulado, al fin estalló políticamente en diciembre de 2001, y del cual tanto puede esperarse un proceso de regeneración espiritual como el final de una sociedad que alguna vez se pensó moderna e igualitaria.

Christian Ferrer

La vaca es el emblema grabado a fuego en la imaginación de los argentinos, ya desde edad muy temprana. La silueta bovina se prodiga en láminas,

Christian Ferrer: es sociólogo y ensayista; profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido miembro del grupo editor de las revistas *Utopía*, *Fahrenheit 450* y *La Letra A*. Actualmente lo es de las revistas *El Ojo Mocho* y *Artefacto*. También ha sido jefe de redacción de las revistas *Babel* y *La Caja*. Ha publicado *El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo*, editorial Altamira, Buenos Aires; y *Mal de Ojo. Ensayo sobre la violencia técnica*, editorial Octaedro, Barcelona; así como una compilación de ensayos del poeta y ensayista Néstor Perlongher bajo el título *Prosa plebeya*, Colihue, Buenos Aires.

Palabras clave: crisis y cultura políticas, clase media, mentalidades, Argentina.

gráficos y estadísticas en los libros escolares; es también el objeto temático del texto que tradicionalmente redactan los niños una vez dominados los primeros palotes; y se la reencontra en la ritual excursión pedagógica a las exposiciones de productos agroganaderos.

Cornucopia

La vaca y el trigo, bienes que la feracidad de la tierra pampeana prometió mansos, abundantes y eternos, encadenados al sol y la lluvia, sus fieles activantes naturales del ciclo anual que culmina en el silo y el matadero.

Por más de un siglo, esos cuatro elementos han conformado la cuadratura del círculo argentino, problema resuelto sin mayores trámites en el convencimiento de que Dios tiene una partida de nacimiento local. En la idea que los habitantes de este país se hacían de una renombrada parábola bíblica, los siete años de vacas gordas solo podían repetirse al infinito. Y así como el cangrejo ermitaño busca refugio en el caracol, la imaginación nacional no ha conocido otro hospedaje que el cuerno de la abundancia. Cien años de imágenes de bonanza y tres momentos de consolidación de «derechos plebeyos», contribuyeron a fijar la posición excéntrica de Argentina en el mapamundi sudamericano. En cada una de esas etapas, tensas luchas sociales –ocasionalmente sangrientas– soldaron la masa crítica de la cultura popular a un vehículo político específico. El primer momento vinculó la cuantiosa inmigración europea con la construcción de sindicatos y de una red de instituciones promotoras de «ilustración obrera», mayormente orientadas por ideas anarquistas. El segundo momento unificó al obrero peronista con la medianamente pujante flora industrial de la época. Y al último lo constituyó la epifanía cultural de la clase media modernizada de los años 60 y 70, atravesada por diversas y crecientes modalidades de la radicalización política. Esta sucesión y superposición de «ganancias históricas» promovieron diversos grados de ascenso social, apropiación de derechos laborales y la consolidación de la imaginación plebeya como ingrediente inescindible de la mentalidad política dominante. Su consecuencia fue cornucópica. Sintéticamente: hasta hace un par de décadas atrás, todo argentino nacía con el convencimiento de que le sería garantizado trabajo de por vida, sueldo anual complementario, vacaciones pagas, salud y educación amparadas por el Estado, obra social sindical, psicoanalista pagado por el gremio, e incluso de que podría enlazarse en matrimonio con un galán o doncella de clase media superior. Esas

***Cien años
 de imágenes
 de bonanza
 y tres momentos
 de consolidación
 de «derechos plebeyos»,
 contribuyeron
 a fijar la posición
 excéntrica
 de Argentina
 en el mapamundi
 sudamericano***

certezas constituían a la vez el nutriente del temperamento político y social y el límite de lo pensable sobre las causas de la riqueza y la decadencia de las naciones: en estas tierras la vaca flaca era una imposibilidad zoológica. Ninguna de aquellas garantías caía del cielo: eran el fruto jugoso de las pugnas sociales anteriores. Pero a pesar de tantos avances de la línea de trincheras, la lucha de posiciones permanecía irresuelta.

En los años 90 la imaginación política plebeya se mantuvo activa y demandante –si bien a la defensiva–, pero los fundamentos económicos, institucionales y políticos que la sustentaban se debilitaron, o simplemente se disolvieron. Ciertamente, fueron años en que Argentina promocionó su sistema monetario, único en el mundo, como experimento digno de merecer el premio Nobel a la vez que sus habitantes se comportaban a la manera de fenicios satisfechos. El encastré aparentemente grácil del país en los flujos culturales y económicos de la globalización hizo germinar una inmensa fantasmagoría colectiva que ocultó la visión de la vaca enflaqueciente y sin nutrición a la vista. La moneda argentina aparentaba solidez y el consumo de bienes parecía una máquina de movimiento perpetuo, pero los economistas locales (cuya locuacidad y arrogancia merecerían por sí mismos un tratado completo) les adosaban cada año nuevo hipótesis *ad hoc* para explicar la supervivencia del mecanismo, tal cual sucedía a fines de la Edad Media con los astrónomos seguidores de la teoría ptolomeica. Mientras tanto, el desempleo se arraigaba y afianzaba a lo largo del país, como ristas de tejido muerto a lo largo de un cuerpo. Y en el horizonte, la envergadura de la deuda externa crecía día a día y se adosaba a las finanzas públicas a la manera de las contracciones de una boa constrictor. Lenta pero indeteniblemente, las líneas de continuidad social entre pobres, clase media y sectores privilegiados se descoyuntaban, astillando aún más a los excluidos y haciendo irreversible el deterioro social. El contraste entre ricos y pobres devino una copia de la rutina latinoamericana. Ahora, a cuatro meses del desplome de Fernando de la Rúa, una cuantiosa transferencia de ingresos se desliza incontinentemente hacia los grupos privilegiados, tal cual una transfusión de sangre sacrificial en beneficio de los fuertes y victimarios, en el mismo momento en que las nuevas condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional para soltar la calderilla que el país imperiosamente necesita se cierran sobre el cuello argentino a la manera del cepo.

La consigna y sus antecedentes

«Que se vayan todos» es el clamor que recorre la Argentina entera desde diciembre pasado. La consigna, salpimentada de repudios a la casta de políticos

locales, no fue enarbolada por partido alguno ni saltó a la calle desde el estudio de un creativo publicitario. Emergió en un instante, como por generación espontánea, dos meses después de las últimas elecciones legislativas y en el mismo año en que 70.000 argentinos zarparon del país con mirada de vigía fijada en algún punto de la costa europea. La consigna estremece al régimen político afincado en el país desde 1983 y aglutina a todas las clases sociales, resultando ser la expresión lingüística más nítida de un intenso malestar colectivo. La impugnación de la exigencia corre por cuenta del Gobierno, de sectores de la prensa y del empresariado, convencidos de que su extensión e intensificación conduciría a un estado de incipiente guerra civil o de desgobierno anárquico. Pero se trata de una estrategia defensiva, y en parte necia, pues supone en el reclamo un capricho pasajero o protesta administrable, y no asume que surge de las vísceras ciudadanas, tal cual la supuración urgente e indetenible de un órgano moral ya colmado hasta el hartazgo y necesitado de una purga. Quienquiera hubiera prestado una mínima atención al panorama estadístico que instaló el último comicio de octubre, habría notado que el agua estaba hirviendo y las venas hinchadas. No habiéndose practicado una curación a tiempo, su consecuencia ha sido la ruptura de la representación política, acompañada por la conculcación del resto de los contratos sociales –comenzando por los bancarios y los jurídicos. No ocurría un acontecimiento semejante desde 1945.

La «mala sangre» burbujeó por años. Buena parte de los argentinos transitaron la década del 90 «a la espera» de un cambio. Esa espera asumió un contenido moral, y por lo tanto su *tempo* era pacienzudo y su móvil el resentimiento. Su correlato institucional fue encarnado por el Frepaso (Frente País Solidario), recambio político sentimental para la clase media que por un tiempo pudo desplegarse con anchas y abiertas velas. Pero su alianza matrimonial con la centenaria Unión Cívica Radical haría abortar su salto a la madurez electoral. Fue curioso que se esperara un cambio de rumbo por parte de la Alianza, cuyo mascarón de proa, el candidato De la Rúa, era botón de muestra emblemático de la vieja corporación política. Casi se diría que el personaje se había desarrollado desde el estadio de bebé de probeta de comité. La participación del Frepaso concedió a la Alianza un dejo de *sex-appeal*, pero el encanto se disolvió en un 13% de rebaja salarial a los empleados públicos compensado por una suma desconocida de coimas entregadas a diputados y senadores para sancionar, por lo menos, una nueva ley laboral. En diciembre pasado, la espera abandonó su estadio moralista y se autotransformó instantánea y radicalmente en un sinfín de microacontecimientos políticos, inorgánicos algunos, fundamentados en variedades de la ética práctica otros, pero más pregnantemente, en una irritada conversación colectiva que rehúsa conceder poderes de representación. No obstan-

te, asambleas y marchas de protesta se han revelado impotentes para construir un poder y para lanzar al ruedo a nuevos líderes sociales, al menos por el momento. El descreimiento final suscitado por la administración anterior fue pa-

***Se olvida que
la tradición
«antipolítica»
es antigua
en la Argentina***

tético: en su origen solo se esperaba de ese gobierno que las cosas no empeoraran y que se limpiara el escenario de cuatro o cinco nombres propios odiosos. Era poco.

Numerosos analistas creen que el rechazo a la corporación política es una tendencia de los años 90 causada por el triunfo de los saberes económicos y tecnocráticos por sobre la racionalidad argumentativa de la política; o que resulta ser la reacción histérica a hipócrita de las clases medias violentadas en sus expectativas; o bien que esa casta política es prebendaria, ignorante e ineficaz, y por lo tanto, indefendible. Quizás. Pero se olvida que la tradición «antipolítica» es antigua en la Argentina. Basta pensar que los millones de inmigrantes que arribaron a este país nunca se integraron del todo a los procesos electorales o bien lo hicieron con suma lentitud. Habitaron, por bastante tiempo, una frontera imaginaria. Por entonces, las primeras organizaciones gremiales del país, preñadas de ideales anarquistas, se mantuvieron al margen de los incipientes procesos de inclusión de ciudadanías, condición pronto legada a la izquierda comunista y más subrepticamente a saberes populares que localizaban en la actividad política síntomas de arribismo, «cuña» y oportunidad de «negociado».

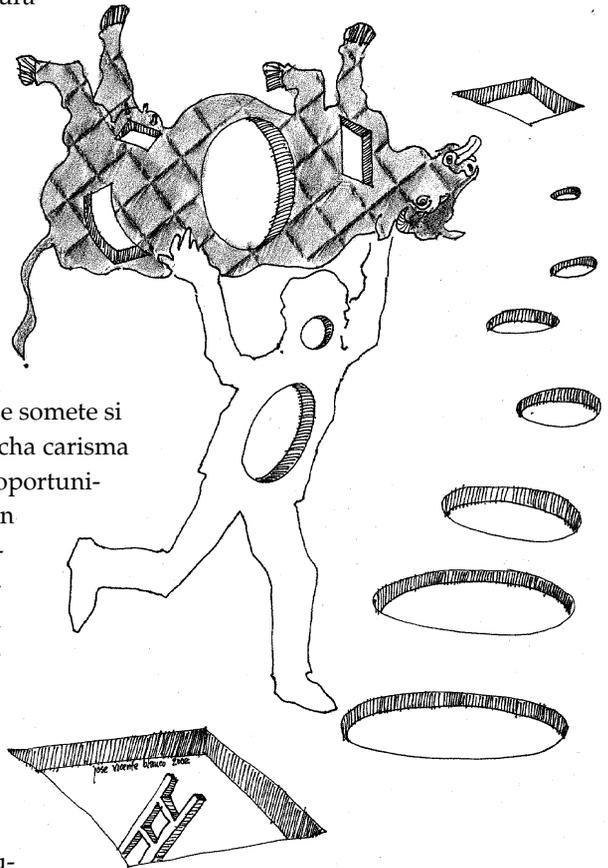
Por su parte, desde la década del 30, la derecha integrista, los grupos de acción católicos y los ideólogos del nacionalismo también repudiarían la política «burguesa». Dos décadas después, el peronismo se autoafirmó como «movimiento», paralelo a las prácticas parlamentarias de los «doctores» y superador de ellas. Más adelante, la generación política de los 70, desde la nueva izquierda al peronismo tercermundista, creía en la democracia formal tanto como un hippie norteamericano en el envío de tropas a Vietnam durante el gobierno de Nixon.

En esos años, también el despliegue de los grupos de rock en Argentina se nutrió de ideales contraculturales que no han desaparecido del todo de sus temáticas y de la sensibilidad de sus audiencias, a pesar de constituir una industria y un mercado pujantes. Al fin, los excluidos por la economía durante la década del 90 poco y nada esperaban de sindicalistas y políticos. Son muchos los afluentes que confluyen hacia esta desembocadura, y aunque muchos de ellos dejaron de estar activos hace décadas, la transmisión subterránea de los saberes y valores que ellos encarnaron en otros momentos históricos no deja de pujar bajo la superficie política nacional.

No estamos tan lejos de los orígenes de esa desconfianza: le hemos dado un beso al abuelo inmigrante. Aún viven muchísimos inmigrantes llegados hace más de medio siglo y millones de argentinos son sus descendientes, impregnados por una memoria política mucho más compleja de lo habitualmente reconocido. Escasa es la reflexión existente sobre el doble vínculo de los inmigrantes con la idea de autoridad, oblicua

frente de suspicacia hacia la figura del político. Un enorme porcentaje arrastraba consigo la experiencia del régimen autocrático, del poder arbitrario de un emperador, zar, sultán o señor feudal –todavía en el sur de Italia a fines del siglo XIX. Esa experiencia se trasladó a los nietos y nutrió una imagen ambigua y dual de la autoridad, vértice al que el argentino se somete si lo obligan, al que adora si derrocha carisma y al que desobedece a la menor oportunidad. No estaban mejor las cosas en la Argentina a la que tantos arribaron. El gaucho matrero, el indio «alzado» y el criollo rural aborrecían o temían la llegada de la autoridad, encarnada en el caudillo, el militar o las castas privilegiadas de provincia. Desconfiar de la autoridad es una tradición local, aunque demasiadas veces asume variantes perversas e imprevistas.

Como extraña secuela, en época de elecciones la población suele optar por los peores, pues la tradición oral transmite a los jóvenes la convicción de que quien se mete «en política» es alguien destinado a ensuciarse, a robar o a vehiculizar ambiciones personales. Consecuentemente la honestidad sería una virtud solo resguardable en el terreno familiar, en la vida amistosa –el tango ofrece un ramillete de metáforas sobre el tema–, o en los esfuerzos vocacionales. El misterio de la opción por los peores no se explica solamente porque la única posibilidad



presentada al electorado venga envuelta en «listas sábana», sino por desconfianza hacia la política en sí misma como actividad asociable al bien común. A las raíces de la especificidad argentina habría que rastrearlas en esas antiguas experiencias rurales con la autoridad, del indio o el bandolero popular en fuga, pasando por la montonera sublevada contra el centralismo porteño, hasta llegar a las diversas formas de malestar con el orden social de los caudillismos provinciales; o bien en la memoria de quienes migraron desde imperios autocráticos hacia un puerto del Río de la Plata.

Una paradoja poco pensada arroja más gasolina al fuego. La población conserva en su memoria política una ajada estampita religiosa con imágenes de hombres y mujeres representativos de antaño que no intersecta en lo más mínimo con los representantes actuales. Se trata de figuras carismáticas que acompañaron la larga marcha de la Argentina republicana y plebeya, entre 1900 y 1950, tales como Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen o Eva Perón, todos ellos aureolados de honestidad, resguardo de los dineros públicos o abnegación guerrera. Pero los espacios de emergencia de los políticos ahora repudiados han sido otros, básicamente la etapa de conflictos civiles de los años 60 y 70 y, un poco más adelante, el mundo de la especulación financiera y del acuerdismo clandestino de los 80. El primer tipo de político maduró en comités, unidades básicas, sindicatos, células guerrilleras y centros de estudiantes, unidades mínimas de agregación que basculaban entre sí según los humores violentos del mar de fondo de los años «de plomo». Son personajes «sesentistas», y no solo debido a su nutrición ideológica sino porque las velitas que coronaban su última torta de cumpleaños indicaban una edad equivalente. Se consideran «pilotos de tormentas» y han forjado sus alianzas públicas y secretas al calor de viejas rencillas superadas una vez que los militares los trataran alguna vez como parásitos ineficaces por igual. No pocos han pasado por la experiencia de la prisión y su retórica está rociada de alusiones a la supervivencia de la víctima y a los derechos morales del derrotado por la dictadura. El segundo tipo de político es una o dos décadas más joven y los nichos donde se formaron son más opacos y nos remiten a la imaginación social afincada durante la dictadura: el ejercicio privado de la profesión, los cargos gerenciales en grandes empresas, las primeras armas cumplidas en medios periodísticos, el trabajo en estudios que brindaban asesoramiento financiero y el mundo de la clandestinidad tolerada. Dejo aparte a aquellos que eran buscados para su exterminio. Se trata de un tipo de político que tenía unos 20 años en aquella época, que se formó *no a pesar de sino en* la dictadura militar, de acuerdo con las modalidades que asumió la vida cotidiana y pública en esa época y con el tipo de articulaciones que se establecieron entre partidos, sindicatos, cargos estatales, medios gráficos,

financieras y bancos, es decir, al rescoldo de laboratorios especulativos y transaccionales, donde la negociación no solamente constituía una herramienta partidaria sino el centro de gravedad de la Argentina de entonces. Si la cuna y corralón del primer tipo de político estuvo señalado por la conflictividad y el acuerdismo previos a la dictadura, al molde de la siguiente generación de políticos se conecta subrepticamente con las prácticas de la *city* porteña, donde todo valor era objeto de negociación y a partir de donde se tejó la telaraña que une a los diversos grupos de poder de la actualidad. Y más allá del sentimentalismo populista (de izquierda o de derecha) que cansina y burocráticamente concede color a sus discursos, es gente permeada por ideas tecnocráticas, propias también de la época militar, en la cual los ideales de eficacia y los criterios no políticos en la gestión de los asuntos públicos estaban a la orden del día, y que una década después se acoplarían fácilmente a las exigencias de la globalización. Esta generación está a punto de articularse transversalmente en una nueva corporación política.

A pesar de lo mucho que se ha escrito e investigado, *lo que sabemos sobre la vida cotidiana durante el proceso militar es misérrimo*, incluyendo sus formas de legitimación, sus articulaciones políticas o las relaciones que establecieron los grandes partidos con militares y empresarios. El periodo que corre entre 1976 y 1982 es fecundo para estudiar la emergencia de saberes y oficios de la especulación: contadores, banqueros, economistas, financistas, expertos en evasión de impuestos, en vaciamiento de empresas, en fusiones, en creación de empresas *off-shore*, de empresas fantasmas. Además, es la época en que comienza a fisurarse la relación entre mentalidad plebeya y vehículo político, habilitándose de este modo la extensión de las mafias que tomaban al Estado como vaca lechera a ser ordeñada con fines privados. La mentalidad plebeya, mientras estuvo conectada a canales políticos y a esperanzas colectivas, ejercía un trabajo de acoso sobre los sectores privilegiados. En cambio, una vez disueltas sus bases estructurantes y desorganizado su referente político, el plebeyismo deviene «pícaro», y lentamente las diversas articulaciones entre Estado, sindicatos, empresas, sector financiero, la policía, los militares y los encargados de vigilar las fronteras, conformaron encadenamientos mafiosos que tomaron a las instituciones estatales como espacios de saqueo. Buena parte del problema argentino reside en que el personal a cargo de los asuntos públicos, incluyendo a la corporación política, no cree en su misión ni dispone de ideales de servicio público, y por eso mismo pueden secar o desguazar al Estado. La tendencia al encanallecimiento no es solo propiedad de las clases privilegiadas sino también del personal jerárquico del Estado, cuyas propias vidas cotidianas carecen de adherencia a las ideas que han formado a lo público en la Argentina –la

educación libre y gratuita, la reforma universitaria, el ideal del médico sanitarista al servicio de la salud colectiva, etc., etc., etc.–, y esto desde hace mucho tiempo. El plebeyismo pícaro alimentó lenta pero eficazmente una red arterial del Estado, expandida hacia familiares, conocidos, amigos y diversos beneficiarios y que, a la manera de las colonias coralinas, conforma microemprendimientos mafiosos, que alguna vez pudieron responder a partidos, líneas políticas inter-

***La mercancía
argentina
mejor producida
y distribuida
desde hace años es
la irresponsabilidad
pública***

nas o a «punteros» barriales pero que hoy ya están independizados y se acoplan con cualquier factor de poder por igual. Todo culmina en un Estado marchito.

La descomposición de la imaginación política plebeya y de sus bases estructurales de sustento instaló en el espacio público, a modo de secuela inconducente, a dos tendencias protagónicas: el sentimentalismo populista, cuya última estribación ha sido el breve interregno semanal de Adolfo Rodríguez Súa; y el ajustismo y eficientismo de índole economicista, sembrados de emplastos de racionalismo socialdemócrata. Ambas escuelas de acción, que confluyen ahora en el presidente Duhalde, amenazan con transformar al país en una rata de laboratorio. La mercancía argentina mejor producida y distribuida desde hace años es la irresponsabilidad pública, y prueba de ello ha sido la elevación al puesto de canciller de Carlos Ruckauf, probable incitador de los primeros saqueos a supermercados suburbanos el día previo a la caída de Fernando de la Rúa. No está exenta de compartir aquella mercancía la población en general, pues una faceta del repudio a los políticos exigiría una reflexión sobre la propia responsabilidad en el encumbramiento de estos mismos. Sería una visita a la galería de espejos deformantes: la moderada satisfacción general ante la asunción de Rodríguez Súa se constituyó en un índice de irrealidad. Por cierto, el irrelevante caudillo de la provincia de San Luis había logrado meter las liebres más difíciles en su bolsa –incluyendo a piqueteros y Madres de Plaza de Mayo– sin disparar un solo tiro ni hacer el menor esfuerzo por correrlas: sencillamente las invitó a su corral y las encandiló con retórica populista –la panacea de los nostálgicos de épocas más exaltadas. En esos siete días grotescos se manifestaron los deseos más intensos de los argentinos. Pero no necesariamente tienen razón quienes localizan la avería del sistema en la debilidad de las instituciones democráticas ante gobernantes populistas o en el «carácter irracional» del pueblo o en su mentalidad anclada en la etapa del «bucolismo obrero y campesino» de la época peronista. Ni el psicologismo conservador ni el republicanismo abstracto ni el modernismo globalizador pueden sustituir la carencia de acumulación plebeya de poder

capaz de hacer frente a los grupos privilegiados de un país, especialmente cuando las bases culturales del proceso de transición a la democracia –tal cual se lo llamaba– eran endebles.

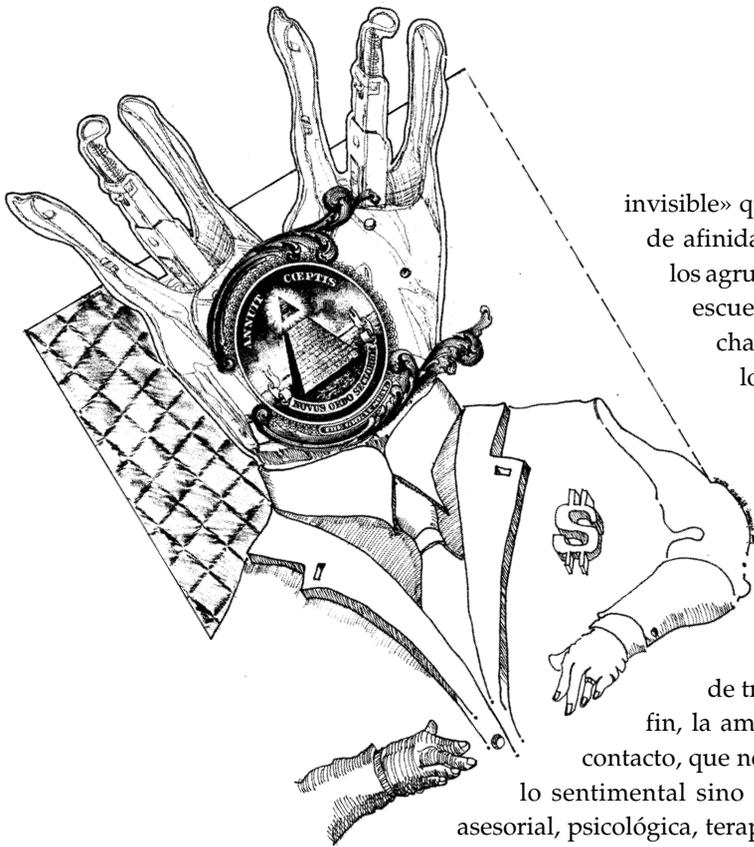
Daño a intimidad

¿Cuál es la tasa de daño tolerable por una población? La pregunta no admite una consideración sociológica, sino política. Durante las presidencias de Menem y De la Rúa, la economía y la política se transformaron en planos inclinados y oscilantes. En el terreno de la economía, aumentaba indeteniblemente el desempleo a la vez que crecía el frenesí del consumo, en especial de bienes importados, entre amplias franjas de la clase media. En la política, mientras buena parte de la población retiraba sus energías del campo político y las desplazaba hacia otras fuentes de interés, la expansiva inquietud moral se depositaba en el emergente Frepaso. Para millones de personas, la economía y la política se transformaron en zonas de arenas movedizas, y a medida que se desplomaba la calidad de los servicios públicos sanitarios y educativos, solo la vida íntima parecía ofrecer un proyecto de reparación del daño causado. La tasa de daño aumentaba un grado más cada vez que la tierra completaba su giro anual, y llegó el momento en que los distintos quebrantos morales, económicos, políticos, subjetivos y carnales devinieron en una gran cualidad. El evidente deterioro de zonas enteras de la ciudad de Buenos Aires, antes gratas a la vista y hoy apenas acantilados carcomidos, acompaña al deterioro físico y moral que escarba las caras de los porteños. Pero la intimidad resultó ser refugio tanto como ciudadela sitiada, justamente porque encajó en sí misma toda la carga de responsabilidades que no era posible canalizar a través de la justicia, la política, la economía o la vocación. Eso mismo explica las formas lingüísticas viscerales que asumió la protesta en el mes de diciembre pasado: alaridos, gemidos, griterío, racimos entrecortados de voces airadas. Al dolor argentino le llevará mucho tiempo atravesar las cuerdas vocales con lenguajes autorreflexivos, capaces de pensar el vínculo entre sufrimiento y política, solo expresable ahora bajo las formas del desánimo, el delirio de fuga, el estupor político y el deterioro afectivo, polos simétricos de la agitación improductiva, la exaltación irresponsable y la codicia de los grupos que acumularon poder. Impulso autodestructivo y desamor por la propia nación, tales son las consecuencias del desplome de los ideales de porvenir.

Cada daño individual se extendió como por un tendido de cables subterráneos hacia los demás, y en el mes de diciembre pasado su intensificación forzó la salida de la multitud a las calles: la envergadura del perjuicio y la humillación

se hizo evidente en un solo instante. ¿Por qué tardó tanto en asumir una modalidad política? En parte porque la población había confiado en una última posibilidad representacional, el Frepaso, y en parte porque la forja de una intimidad satisfactoria, de índole amorosa, familiar o amistosa, o bien asociada al consumo de bienes de diverso tipo, había condensado –y consumido– una intensa energía colectiva. Agréguese a esta olla que se cocinaba a fuego lento el consumo de antidepressivos y de libros de autoayuda. Muchos se congratulan ahora de que la clase media al fin haya retirado su apoyo a la casta política y tomado conciencia de la destrucción general. Otros tantos desdeñan el nuevo tráfigo y culpabilizan a este mismo sector por haber concedido legitimidad a Menem, a Galtieri durante la Guerra de Malvinas o a Perón en 1973. Pero estas tomas de posición suelen estar desinformadas acerca de la verdadera condición de la clase media argentina actual. Hace tiempo que su unidad epifánica se disolvió, y tanto los sectores beneficiados por las transformaciones de los años 90 como los fragmentos desfavorecidos e incluso lumpenizados flotan ahora sobre un universo que estalla una y otra vez. Solo restan cuarteamientos, estratos fisurados que se interconectan unos con otros, a la manera de las formaciones cristalográficas, y todo ocurre al interior de una misma familia, de un mismo grupo de amigos, del mismo grupo laboral. La experiencia del maltrato y de la salvación, del enriquecimiento y la bancarrota, coexisten y se miden entre sí. Suponer a la clase media un dato uniforme es una equivocación estratégica, salvo que se la considere como mentalidad plebeya dominante en retirada. A su vez, la experiencia del recambio generacional de la clase media superpone la humillación al borramiento del horizonte: la entrada intermitente al mercado de trabajo, los sueldos miserables, el trato indigno, hace que la condición del joven no sea del todo desigual a la de los sectores populares. También ellos son sudacas en su propio país. Tampoco estos hijos de aquel sector arrogante y culto han conocido el modelo del grupo familiar tribal, y abundan las parejas inestables, las mujeres solas que son «cabeza de familia», los padres separados incapaces de sostener económicamente a sus hijos; condimentos que se precipitan sobre la actual experiencia política de la clase media, y que explican las motivaciones diversas de aquellos que se lanzaron a la calle en diciembre tanto como los distintos cursos de acción que asumió la protesta: eran la momentánea unidad harapienta de fibras de un tejido social entrecortado.

Las asambleas que emergieron durante este verano no son figuras fáciles de analizar, pues no hay demasiados antecedentes locales de ese raro sarpullido. Sin duda, existe la memoria de las asambleas sindicales y las rutinas –bastante extendidas– de los centros de estudiantes. Pero la inflorescencia asamblearia es efecto de siembras cercanas en el tiempo, la emergencia final de una «sociedad



invisible» que ya articulaba grupos de afinidad variados, tales como los agrupamientos propios de la escuela secundaria, las marchas contra la impunidad, los debilitados pero resistentes organismos de derechos humanos, los grupos de ayuda mutua, los grupos de apoyo psicológico, los grupos de estudio, los talleres de todo tipo, los clubes de trueque, los rockeros y al fin, la amistad como cemento de contacto, que no solo supone un vínculo sentimental sino también funcionalidad asesorial, psicológica, terapéutica, financiera y política.

La riada de la memoria de la autoorganización es subterránea y concierne a todas las formas de filiación construidas durante la última década, que no se condensan únicamente en las figuras del «piquetero» o la del «cacerolero». Es larga la lista de redes cuyo amarre a la representación política clásica era inexistente. Ahora las asambleas languidecen, en gran medida porque no hay fundamentos culturales en este país que les permitan establecerse como principio de autogobierno. Su valor reside en haber ofrecido una contención política tanto como haber posibilitado un efímero bautismo de fuego para nuevas generaciones. Es un espacio de aprendizaje político, salvo para la izquierda, que solo percibió en ellas una ocasión de captura. Es esta autoexperiencia política la que inquietó al Gobierno y que fue impugnada por numerosos voceros del pensamiento conservador local, cuyos temores son herencia y actualización de otros anteriores, algunos tan antiguos como los provocados en su momento por el malón indígena, la chusma rosista y la montonera provincial, continuados con las imágenes del inmigrante «sucio y feo» y de los activistas anarquistas y socialistas, miedos renovados –aunque en forma localizada– por el bandolero popular rural y la «polaquita» urbana, y más tarde aún, con la aparición súbita del «aluvión zoológico» de la época peronista, los «melencidos» y la mujer emancipada de los años 60, el «subversivo» de la década de los 70, los drogadictos en los 80 y los travestis hace 10 años. Ese «afuera» incomprensible e incivilizado irrumpió nuevamente a finales de 2001.

***La mayor parte
de las voces
femeninas
se lanzaron
a la esfera pública
desde espacios
no matizados
por la rutina
partidaria***

Resta el misterio de la creciente audibilidad de la voz femenina en política, quizás un ingrediente importante para un futuro proceso de recomposición de la esperanza colectiva. Al igual que en otras partes del mundo, la política ha sido en Argentina un asunto masculino y, a medida que su práctica se cerraba sobre un universo centrípeto, las promesas de los políticos cruzaban el nivel menos cero de credibilidad pública. Por el contrario, las voces femeninas, en tanto y en cuanto *se mantuvieran en una frontera* entre lo social y lo político, encontraban oídos

cada vez más atentos. La mayor parte de estas voces femeninas se lanzaron a la esfera pública desde espacios no matizados por la rutina partidaria. En muchos casos, desde una intimidad dañada, o abandonada. La retórica de estas mujeres difiere en gran medida de la de sus contrapartes masculinas, fundamentalmente porque su lenguaje no es pomposo ni burocrático, y más bien transmite una suerte de franqueza que en estos tiempos es muy apreciada, es decir, en momentos de indecisión colectiva sobre la calidad de las verdades que circulan en el ámbito público. Tradicionalmente, las mujeres no intervenían activamente en la política argentina, y su irrupción, todavía incipiente, quizás sea causada por una mayor conciencia asumida del daño que las desatenciones estatales han provocado indirectamente en la vida íntima, pero también porque la posición estructural, económica y afectiva de las mujeres argentinas dio una vuelta de campana desde los años 60. Pero quizás no se entienda la nueva experiencia femenina si se recurre únicamente a teorías de género o a interpretaciones psicoanalíticas: es la cuestión de la franqueza lingüística en política lo que está en juego.

En el matadero

Las naciones no son eternas. Pueden ingresar en etapas donde prima su descomposición moral, económica e incluso física, más aún cuando ciertos poderes financieros y políticos internacionales las eligen a modo de prototipo experimental de próximas subordinaciones territoriales a un orden que aún no está ensamblado del todo. A modo de prerrequisito, el experimento exige la aceptación voluntaria de la degradación. Los países sudamericanos iniciaron su vida activa con una declaración de independencia, pero el aprendizaje de la indignidad puede agravarse por medio de un simple decreto de metamorfosis monetaria que permute su peso histórico por un puñado de dólares, indispensables en el plazo fijo pero contingentes en el largo plazo. En este mismo año, la auto-

biografía de la Argentina inicia un nuevo capítulo, y las voces colectivas que orientan la escritura son vacilantes y escépticas, efecto coral de sus ahora empobrecidas posibilidades existenciales. Por su parte, sus dirigentes políticos –a los que cabría imaginar como *tenedores* de ese libro– ya han dejado de hacer malabarismos con la idea de nación, y se aprestan a ensayar el mutis, el travestimiento o el empeñamiento del cadáver del Estado nacional a la doctrina económica de moda entre las burocracias de los organismos internacionales.

Las palabras que usan los hombres representativos de un país no pasan indemnes por el inmenso cedazo que teje la conversación colectiva: tanto pueden animar como damnificar a los pueblos que las absorben. Hay palabras públicas que elevan y fortalecen las esperanzas comunitarias y otras que ilusionan sin fundamentos y se vuelven, al cabo, estériles e irresponsables. Una corporación política despliega lenguajes, que pueden adquirir tonos vacuos o pomposos como en el caso de De la Rúa, o estilos burocráticos como era costumbre entre ministros y funcionarios, o estrategias demagógicas e insinceras, tal cual sucedía con la mayoría de los diputados y senadores. Palabras huecas, discursos de ocasión, rimbombancia teatral, altisonancia de acto escolar, mentiras dichas con tono enfático, en fin, cáscara vacía. Seguramente ese lenguaje tiene escasas posibilidades de supervivencia pública, pues la población reclama nuevas voces políticas, pero no debe descartarse que la corporación política reconstruya sus juegos y posiciones, metamorfoseándose y confluyendo con ambiciosos hombres de negocios a otros *outsiders* del campo político, o bien aprovechándose de la carencia argumentativa general, pues lo que ha circulado hasta ahora en asambleas y en los emergentes partidos de oposición es una mezcla de viejos retazos de discurso populista, parafernalia del léxico trotskista y voces vecinales fragmentadas por una década de desastres y de fraudes lingüísticos.

Un ejemplo de la insustancialidad de los hombres políticos argentinos ha quedado expuesta en sus respuestas cuando han sido confrontados con las 30 vidas perdidas el 19 y 20 de diciembre de 2001: rituales «deslindamientos de responsabilidades» sumados a remisiones a la obediencia debida. Nadie será responsabilizado por esos muertos, pues los pactos de impunidad que la corporación política ha sellado con sindicalistas, policías y jueces lo impiden. Pero cuando la ley no se cumple por arriba nadie se siente llamado a cumplirla por abajo, y ello se extiende a los órdenes impositivos, pedagógicos y familiares, enraizando aún más la irresponsabilidad pública. ¿Por qué tantos se sorprenden entonces cuando borbotones de violencia inesperada brotan en Argentina, como un géiser? Las napas desde dónde se abrió camino la riada venían trabajando subterráneamente. El viejo fantasma facúndico recorrió las calles de Bue-

nos Aires por dos días, y nadie sabe cuándo volverá a hacer su ronda nuevamente. El «retorno de lo reprimido» resultó de enormes tensiones previas, algunas muy antiguas, muchas otras producto de los traumas que dejó la dictadura, otras de haberse promovido a partir de 1983 un constitucionalismo de cartón piedra desasido de energías políticas, otras de haberse malherido a la educación y la salud públicas, muchas veces con la colaboración de personeros de intereses privados, y aún otras del hechizo que las promesas, personalidad y logros efímeros de Carlos Saúl Menem activaron en el notorio porcentual electoral que lo acompañó en su gesta ruin y destructiva. El inventario casi no registra beneficios, y la nueva pobreza encuentra a la mayoría incapaz de imaginar un acto de contrición colectivo. A la vez, un sacrificio general en pos de un porvenir mejor solo puede tener sentido si la compensación, material o simbólica, es creíble. Por el momento, la sola idea de aceptar nuevos años de dureza sin el contrapeso de la oxigenación política, jurídica, intelectual, empresarial y periodística supone para los argentinos poco menos que una intolerable conmoción espiritual.

Argentina no es ya la vaca gorda de antaño que pastaba en horizontes inacabables. Sus actuales marchas y contramarchas se parecen a las de un Minotauro agitado que transita desconcertado por su propio laberinto, en el mismo momento en que propios y ajenos repudian su extraña fisonomía. Cortado el chorro anual de bienes obsoletos, invertida la dirección de los fondos que llegaban de lejanos paraísos financieros e incierto el túnel de cuya desembocadura podría manar una claridad esperanzadora, ese Minotauro apenas puede subsistir devorándose a sí mismo. La autofagia es sinónimo del presente argentino, y salvo que una dosis de sabiduría y de esfuerzo colectivos detengan el proceso, inevitablemente se obturará la posibilidad de una renovación espiritual en la generación aún adolescente y le será negada a la población un principio de justicia económica y política. Y si los argentinos no fueran capaces de apropiárselos por sí mismos, el destino del país que hemos conocido sería una mayor y casi inimaginable agonía, o bien el afinamiento de un tipo de subjetividad estupefacta, aturdida y resignada. Argentina sería arreada más allá de su voluntad, carneada por obtusos matarifes locales y extranjeros, sus cueros alfombrarían las salas de directorio de remotos organismos de crédito y fondos de inversión, y de sus huesos solo se ocuparían los historiadores de la decadencia de las naciones. Al final de todo, la efusión de fósforo óseo que despidió el esqueleto del ganado sucumbido en el campo suele aureolar momentáneamente la noche pampeana. Se la conoce como «luz mala» y perdura apenas por un instante. Luego, se restaura la oscuridad.